

**JOSÉ NATANSON ARIEL WILKIS CARLOS GRECO GABRIEL VOMMARO
ALEXANDRE ROIG MARTÍN PLOT SEBASTIÁN PEREYRA MARÍA S. GATTONI**

LE MONDE **NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2018**
diplomatique

el Dipló, una voz clara
en medio del ruido
Capital Intelectual S.A.
Paraguay 1535 (1061)
Buenos Aires, Argentina
Publicación mensual
Año XX
Precio del ejemplar: \$100
En Uruguay: 100 pesos

www.eldiplo.org



EDICIÓN ESPECIAL

ANATOMÍA DEL NEO- LIBERALISMO

Plástico y adaptativo, el neoliberalismo gobierna nuevamente Argentina y avanza en América Latina. Entender sus mecanismos profundos es esencial para elaborar estrategias que permitan derrotarlo.



**MARTÍN ABELES MARIANA HEREDIA PABLO SEMÁN ALEJANDRO GRIMSON
GABRIEL KESSLER PAULA ABAL MEDINA RITA SEGATO NANCY FRASER**

El neoliberalismo del siglo XXI

por Ariel Wilkis* y José Natanson

Desde hace cuatro décadas, cuando irrumpió en la escena política global para reorganizar radicalmente el orden de la posguerra, primero en Chile, Estados Unidos y Gran Bretaña y luego en buena parte del planeta, el neoliberalismo se muestra cambiante, resistente, adaptativo. Mil veces lo dieron por muerto y otras tantas se levantó: la crisis financiera que estalló en 2008, que por primera vez en décadas comenzaba en el Norte para desde allí propagarse al resto del planeta, pareció condenarlo una vez más a la desaparición, pero una vez más el neoliberalismo logró sobrevivir.

Una de las claves que explican esta asombrosa sobrevida es su capacidad de ensayar múltiples fórmulas para reconstruir sociedades cuya institución principal sea el mercado. A lo largo de su breve (en términos históricos) período de hegemonía, el neoliberalismo ha demostrado que es lo suficientemente plástico como para apoyarse en propuestas democráticas de gobierno: las revoluciones conservadoras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80, así como los gobiernos de la reforma estructural en la América Latina de los 90, con Carlos Menem, Fernando Henrique Cardoso y Alberto Fujimori como máximas expresiones, no fueron resultado de golpes de Estado sino de la voluntad de sus respectivas sociedades, que soberanamente se inclinaban por este neoliberalismo popular y de masas.

Pero el neoliberalismo se acomoda también a liderazgos autoritarios: de hecho, la primera experiencia concreta fue el Chile de Augusto Pinochet, que inauguró la fórmula de neoliberalismo económico con autoritarismo político que luego se replicaría en Argentina. Y hay también modelos híbridos, como el fujimorismo pos-autogolpe y quizás el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. En suma, contra lo que predicaban los teólogos liberales de la transición en la América Latina de los 80 y 90, que concebían a la apertura democrática y las reformas pro mercado como partes de un todo indivisible, el neoliberalismo es capaz de convivir perfectamente con las dictaduras más sangrientas.

Pero no solo eso. Así como se apoya en diferentes tipos de régimen político, el neoliberalismo también admite diferentes proyectos culturales. Puede contener un conservadurismo extremo al estilo de Pinochet o Bolsonaro, en alianza más o menos explícita con la Iglesia Católica o los pastores pentecostales; puede sintonizar con posiciones xenófobas que reivindican fronteras y muros

para los migrantes mientras impulsan la apertura total de los capitales, como en el caso de Donald Trump o las diversas variantes de la extrema derecha europea. Y puede ofrecer también una cara abierta, tolerante y juvenil: es lo que Nancy Fraser define como “neoliberalismo progresista” (1), una alianza entre los nuevos movimientos sociales (feministas, multiculturalistas y de defensa de los derechos de las minorías sexuales) y el poder económico de las finanzas: la coalición social clintoniana, que combinó a los afros y latinos con el poder de Wall Street y el glamour emprendedor de Silicon Valley, o la propuesta de Emmanuel Macron de tomar la derecha de la izquierda y la izquierda de la derecha para formar un nuevo “centro liberal”, son ejemplos de estos ensayos, que confirman una intuición básica: el neoliberalismo está dispuesto a resignar todo salvo el mercado.

Paradojas argentinas

La experiencia argentina reciente arroja dos paradojas. En primer lugar, los gobiernos kirchneristas desplegaron un conjunto de políticas orientadas a recuperar cierto rol regulatorio del Estado en la economía, desde la estatización de las jubilaciones, YPF y Aerolíneas hasta las más folklóricas políticas de control de precios y restricciones a la compra de dólares, todo bajo un discurso antimercado que identificaba a las políticas aperturistas y desreguladoras de los 90 como el origen de buena parte de nuestros males.

Pero al mismo tiempo contribuyeron fabulosamente a expandir el mercado. Durante sus tres gestiones, el aparato estatal, que al fin y al cabo ocupaba el centro de su discurso, se transformó menos que la infraestructura de crédito y consumo, que se ensanchó y diversificó aceleradamente. Por ejemplo, los hogares con celular pasaron del 60 por ciento a comienzos del ciclo kirchnerista a 88 por ciento en 2013, aquellos con computadora saltaron del 49 al 57 y los que tienen auto del 34 al 38 por ciento. El proceso de financierización fue impactante: la cantidad de cajas de ahorro prácticamente se duplicó entre 2002 y 2013 (2).

Se trata de una de las grandes paradojas del kirchnerismo y una de las fuentes de sus deudas pendientes. Cualquier balance de la década, ganada o perdida, no puede dejar de lado el hecho de que pensó poco al Estado y mucho menos al mercado que contribuyó a crear, en una línea con la histórica dificultad de la izquierda para considerar al mercado como realmente existe y no como una entelequia, lo que luego le impide medir sus consecuencias, comenzando por sus efectos subjetivos en el largo plazo. ¿Es posible reconstruir un

proyecto de igualdad y bienestar si se subestiman las consecuencias de un Estado que cambió poco y un mercado que cambió mucho?

En la vereda de enfrente, la segunda paradoja. El macrismo es un gobierno explícitamente *market friendly* que enfrenta serias dificultades para construir mercados. Si la dictadura aplicó un protoneoliberalismo aperturista y desregulador pero sin privatizaciones y el menemismo emprendió la reforma del Estado enfundado en el overol peronista, la actual administración es más transparente: por la pertenencia social, la inclinación ideológica y los antecedentes profesionales de buena parte de sus responsables –31 por ciento de los funcionarios con rango superior a subsecretario de Estado desempeñaban una posición gerencial en el sector privado en el momento en que fueron convocados al Estado– (3), el macrismo lidera el primer gobierno claramente pro mercado de nuestra historia.

Que al mismo tiempo, increíblemente, le escatima la experiencia de mercado a una parte importante de la sociedad. El macrismo prometió libertad para comprar dólares, pero no garantiza los ingresos suficientes para que los pequeños ahorristas la aprovechen. Propuso la utopía del acceso a la vivienda a través de nuevas modalidades crediticias, pero no logró evitar que la inflación se coma los UVA. Dispuso que el ANSES otorgue créditos a tasa fija para los jubilados y beneficiarios de la AUH, pero el desplome del trabajo informal y la inflación fueron creando serias dificultades para pagarlos y obligando a los sectores populares a recurrir a estrategias desesperadas, como las financieras que cobran tasas del 180 por ciento. En otras palabras, el macrismo tuvo más éxito en proponer la utopía de una sociedad de mercado que en garantizar los beneficios de su realidad.

Bolsonarización

La inclusión de nuevos sectores sociales al mercado es un recurso básico de construcción de legitimidad política. Con sus políticas de pleno empleo, salarios altos y vacaciones, el peronismo de los 40 dio el primer gran paso para acercar a los trabajadores, las clases medias emergentes y los migrantes internos a la experiencia del mercado, lo que se reflejó por ejemplo en el boom de heladeras SIAM, que investigaciones posteriores comprobaron como un hito familiar en la memoria emotiva de las clases populares (4). Más tarde la inclusión al mercado seguiría desempeñando un rol central en la vida política argentina: el auge de la industria nacional durante el desarrollismo, la

Staff

EDICIÓN ESPECIAL

LE MONDE DIPLOMATIQUE

Director

José Natanson

Edición

Marta Vassallo

Corrección

Alfredo Cortés

Diseño original

Javier Vera Ocampo

Diagramación

Cristina Melo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Rector

Carlos Greco

Decano del Instituto de Altos Estudios Sociales

Ariel Wilkis

Director Lectura Mundi

Mario Greco

Coordinación general y edición de contenidos

Micaela Cuesta

Le Monde diplomatique

Director: José Natanson

Redacción

Pablo Stancanelli (editor)

Cruza Muñoz (editora)

Luciana Garbarino

Laura Oszust

Nuria Sol Vega (pasante)

Secretaría

Patricia Orfila

secretaria@eldiplo.org

Corrección

Alfredo Cortés

Diagramación

Cristina Melo

Diseño original

Javier Vera Ocampo

Publicidad: Maia Sona

publicidad@eldiplo.org

contacto@eldiplo.org

www.eldiplo.org

Fotocromos e impresión: Rotativos Patagonia S.A. Aráoz de Lamadrid 1920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. **Le Monde diplomatique** es una publicación de Capital Intelectual S.A., Paraguay 1535 (C1061ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, para la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.

Redacción, administración, publicidad, suscripciones, cartas del lector: Tel/Fax: (5411) 4872 1440 / 4872 1330

E-mail: secretaria@eldiplo.org. En internet: www.eldiplo.org. Marca registrada*,

Registro de la propiedad intelectual N° 348.966. Queda prohibida la reproducción de todos los artículos, en cualquier formato o soporte,

salvo acuerdo previo con Capital Intelectual S.A. © Le Monde diplomatique y Capital Intelectual S.A. **Distribución en Cap. Fed. y Gran Bs. As.:** Vaccaro Hermanos y representantes de Editoriales S.A.

Entre Ríos 919, 1° piso, Tel. 4305 3854, C.A.B.A., Argentina.

Distribución en Interior y Exterior: D.I.S.A., Distribuidora Interplazas S.A.

Pte. Luis Sáenz Peña 1836, Tel. 4305 3160, CF. Argentina.



La circulación de *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, del mes de noviembre de 2018 fue de 20.150 ejemplares.

Capital Intelectual S.A.

Le Monde diplomatique (París)

Fundador: Hubert Beuve-Méry

Presidente del Directorio y

Director de la Redacción: Serge Halimi

Jefe de Redacción: Philippe Descamps

1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París

Tél.: (331) 53 94 96 21

Fax: (331) 53 94 96 26

Mail: secretariat@monde-diplomatique.fr

Internet: www.monde-diplomatique.fr

Editorial

ampliación a los productos importados en los primeros años de la dictadura, por supuesto el menemismo, que incorporó una serie de productos y servicios propios de la economía globalizada, y finalmente el kirchnerismo, con su explosión de plasmas, motitos y splits.

Recuperemos el comienzo de nuestro argumento antes de concluir. Decíamos que el neoliberalismo es capaz de asumir diferentes formas políticas y congeniar con diversas propuestas culturales en tanto no ponga en riesgo su programa económico principal. En momentos en que el neoliberalismo vuelve a operar como el paradigma que organiza la gestión del gobierno nacional consideramos fundamental volver a analizarlo, para entender qué cambió desde su irrupción en los 80, qué elementos nuevos incorporó y hasta dónde avanzó en la penetración de las subjetividades sociales. Por eso dedicamos al tema este Número Especial de *el Diplo*, elaborado conjuntamente con el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín, que festeja sus veinte años de vida.

Creemos finalmente que es necesario advertir sobre un riesgo. Frente a la dificultad para garantizar en los hechos el sueño de un mercado para todos que había prometido en la campaña y con el tic tac electoral acelerándose, el macrismo parece cada vez más tentado de seguir la fórmula de Bolsonaro, que combina un programa económico ultraliberal con un autoritarismo social tan ramplón como descarado. Aunque un océano de historia separa a Brasil de Argentina, la política explícita de manos libres a las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich, las declaraciones acerca de la tenencia de armas y la apelación xenófoba del propio presidente sugieren la escena de un gobierno dispuesto a recurrir al atajo del “discurso del orden”, como si los rigores del déficit cero pudieran compensarse con la demagogia de la tolerancia cero. ¿Será ésta la fórmula exacta del nuevo neoliberalismo? ■

1. Véase la nota de la autora en la contratapa de esta edición.

2. Carla del Cueto y Mariana Luzzi, “Salir a comprar. El consumo y la estructura social en la Argentina reciente”, en Gabriel Kessler (comp.), *La sociedad argentina hoy*, Siglo XXI, 2015.

3. Observatorio de las elites argentinas, IDAES/UNSAM

4. Natalia Milanesio, *Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*, Siglo XXI, 2014.

*Decano del IDAES

© *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

El rol de la Universidad

por Carlos Greco*

¿Cuál es el rol que las instituciones universitarias de gestión pública deberían asumir en los debates que afectan a los miembros de la sociedad? En primer lugar, debemos recuperar la confianza y evitar, en general, el estado de sospecha que se ha impuesto sobre los sistemas de educación superior. No podemos rendirnos en nuestra vocación y compromiso con la verdad; asumimos, con toda honestidad, nuestro límite respecto de ella y entendemos que su construcción sólo es posible mediante el trabajo permanente de su búsqueda.

En segundo lugar, la formación de profesionales de alta calidad, basada en la pluralidad y la excelencia, junto a la generación de investigaciones teóricas y aplicadas de vanguardia, deben constituirse en aportes significativos tanto para quienes toman las decisiones gubernamentales y empresariales, como para las organizaciones sociales –productores originarios de esos saberes–.

Existe un stock y un flujo permanente de producciones académicas, realizadas por un conjunto heterogéneo de instituciones y centros de investigación, con posibilidades reales de abastecer y sustentar diversas políticas públicas que, más allá de su perspectiva ideológica dominante, deberían orientarse en pos de alcanzar el bien común. Ahora bien, la performance de las últimas décadas de la economía mundial, tanto en países centrales y desarrollados cuanto, sobre todo, en países periféricos y subdesarrollados, da cuenta de un fracaso generalizado en la previsión y solución de grandes momentos de crisis, con sus graves consecuencias en el modo de vida de las personas y las condiciones generales de un desarrollo equitativo.

El hecho de que los gobiernos dejen en manos de los mercados, los capitales, la tecnología y las finanzas, la solución de las crecientes inequidades y la disminución de la cada vez más amplia brecha entre ricos y pobres ¿se debe a un accionar premeditado? ¿Pueden los científicos sociales asumir aquí un rol público activo? Frente al desafío de participar y conducir el debate en torno a la definición de las nuevas profesiones y saberes que impondrá el futuro próximo, las ciencias sociales en general, y la ciencia económica en particular, deben procurar ser una palabra autorizada. Han de aunar sus esfuerzos en la construcción de una currícula actualizada que dialogue con su entorno, con el gobierno, la sociedad civil y las empresas, en el acuerdo de producir un conocimiento esclarecedor sobre el comportamiento de los actores políticos, sociales y económicos –decisores trascendentales, estos últimos, en la vida de las personas–, de modo tal de generar mejores condiciones para un desarrollo sostenible, una más equitativa distribución de ingresos y una democracia más plena.

En este juego de roles, la Universidad, a través de la producción de conocimiento –que emana tanto de ella misma cuanto del diálogo con sus interlocutores– y mediante su intervención responsable en los debates en la esfera pública, está llamada a contribuir en la construcción del bien común y de una forma de vida más justa para todas y todos. ■

*Rector de la UNSAM.

© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Trabado por el legado en políticas públicas y sociales del kirchnerismo, la índole especulativa de las ansiadas inversiones, la imposibilidad de imponer “el cambio cultural” que se había propuesto y por su propia impericia, el macrismo conserva un núcleo duro de votantes, y persiste en su condición de nuevo partido pro mercado.

Gobierno pro mercado frente a una sociedad movilizad

Debilidad económica y resiliencia política

por Gabriel Vommaro*



Buenos Aires, 12-9-2018 (Marcos Brindicci/Reuters)

Casi en el último cuarto del gobierno de Cambiemos hay dos evidencias que se imponen: la debilidad del programa económico y la resiliencia del proyecto político. Mauricio Macri asumió con una propuesta de “cambio cultural” de contornos imprecisos que podía ser interpretada en dos sentidos. El primero, evitar anclar su plataforma de gobierno en una propuesta económica, y hacerlo en cambio en un *framing* asociado con el impulso “antipopulista” que lo llevó al gobierno: era necesario producir un cambio en la cultura política argentina, y en especial en el modo de ejercicio del poder. El otro objetivo era evitar establecer metas políticas precisas, y en cambio autodefinirse como un gobierno de “normalización” que venía a llevar “racionalidad” a la vida económica luego de años de populismo-ficción. Lo cierto es que la propia naturaleza de la coalición Cambiemos encarnaba y empujaba un cambio cultural: se trata de la primera experiencia de partido pro-mercado que llega al poder por vía electoral y que lo hace, además, no como socio menor sino como núcleo de una coalición con un partido mayoritario como

el radicalismo. Esta novedad parecía indicar que es posible hacer de un programa *market-oriented* un producto atractivo para grandes contingentes del electorado argentino. En este sentido, el cambio cultural expresaba un intento de avanzar en un proceso de reforma económica pero también de reforma de los comportamientos de los principales actores económicos. La falta de pericia del gobierno para manejar la economía argentina –quizá una de las principales sorpresas que, a esta altura, deja una gestión que pretendía conocer (y entender) la racionalidad de los agentes económicos– no debería ser el punto de llegada sino el punto de partida de cualquier análisis socio-político sobre las dificultades de Cambiemos para llevar a cabo su programa económico. Aquí me propongo señalar tres obstáculos socio-políticos fundamentales que encontró el gobierno para la realización de su programa reformista. Su identificación contribuye a comprender el proceso político que derivó en la crisis económica iniciada en el segundo trimestre de 2018, y que desbarató buena parte del ímpetu refundacional que traía la coalición de gobierno al llegar al poder. Estos obstácu-

los se relacionan con algunos rasgos constitutivos de la alianza de gobierno, y en especial de su núcleo central, el partido Propuesta Republicana (PRO).

1 *Los legados del ciclo político anterior.* A pesar de apalancarse en el antikirchnerismo creciente en buena parte del electorado argentino, y en especial en la deserción de la coalición electoral nacional-popular de votantes peronistas enojados con el jacobinismo y la liturgia cristinista, Cambiemos tuvo que aceptar buena parte de los bienes públicos que legó el kirchnerismo. El giro discursivo realizado por el candidato presidencial luego de la victoria en la segunda vuelta en las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires, donde todo había comenzado para la nueva derecha, dio cuenta de esta necesidad de hacer “ir hacia el centro”. Lo ajustado del resultado del ballottage de las presidenciales mostró también la persistencia de las resistencias al macrismo y la fortaleza de ciertos consensos forjados en los años de *commodities boom* en Argentina: defensa del rol del Estado en la economía, legitimidad creciente de algunas políticas sociales, simpatía ha-

cia una política exterior cercana a los países de la región. En campaña electoral se puede prometer defender bienes públicos conseguidos en tiempos de economía dirigida al mercado interno y con alta regulación del Estado mientras se gira a una economía abierta y se reduce el rol regulador del Estado en la economía. Pero una vez en el gobierno, el sobregiro tiene sus costos.

En efecto, ese fue un punto de partida oneroso para Cambiemos, como también lo fue lo que las Ciencias Sociales llaman legados de política pública, es decir, un cierto set de políticas heredadas que configuran una estructura de intereses en torno a ellas, lo que eleva el costo de su supresión o desfinanciamiento. Los legados de los años kirchneristas en materia de políticas sociales, en especial de jubilaciones y de políticas de transferencia directa hacia sectores informales, no sólo significaban un gasto social “inelástico”, como admitió tiempo después un funcionario del área económica del gobierno, sino también un conjunto de actores movilizad

Así, los movimientos sociales que representan a los sectores informales lograron que se mantuviera vigente la agenda definida en el ciclo anterior, vinculada a la llamada economía popular, es decir, los circuitos de producción y circulación de bienes y servicios que funcionan de modo paralelo a los mercados formales y que requieren de reconocimiento y financiamiento estatal. Lograron, además, preservar su lugar de mediadores entre el Estado y los sectores informales al erigirse en garantes de la gobernabilidad social entre esos grupos. La misma capacidad de bloqueo puede vislumbrarse en los sectores asalariados formales, que consiguieron moderar la caída del salario real y que, inclusive con el impulso del triunfo electoral en las legislativas de 2017, hicieron que el gobierno no pudiera avanzar en la reforma laboral y tuviera que pagar altos costos para implementar una reforma previsional morigerada. En cuanto a las clases medias, éstas también usaron sus recursos de movilización –amparos judiciales, cacerolazos– para que los aumentos de tarifas no perjudicaran dramáticamente su economía.

En definitiva, el gobierno no logró vencer de manera duradera a ningún sector social –más allá de su núcleo duro de apoyos– de que pospusiera o depusiera sus demandas y se plegara al proyecto de “cambio cultural” asociado al giro hacia una sociedad de mercado. Mientras crecía su poder de la mano de triunfos electorales y apoyos internacionales, podía hacer creer que tarde o temprano doblegaría a los resistentes. En cuanto ese poder flaqueó, se encontró ante el desafío de gestionar un giro hacia políticas de ajuste más agresivas pero ahora como necesidad y no como virtud. El “cambio cultural” se detuvo ante las trincheras de una sociedad movilizad

2 *La debilidad de los apoyos económicos.* El nombre que tuvo la política que cerró la brecha entre el programa económico del gobierno y sus posibilidades políticas fue “gradualismo”. Y se expresó especialmente en el escalonamiento de la reducción del déficit fiscal, que el gobierno quiso administrar de tal modo que le permitiera realizar el ajuste económico al mismo tiempo que expandía sus bases de apoyo con obra pública y que administraba el conflicto social. La decisión de tomar ese financiamiento en mercados internacionales aumentó la deuda en niveles críticos y poco sustentables en el tiempo, lo que elevó la vulnerabilidad externa del país. Al

mismo tiempo, la combinación de alto endeudamiento con programa monetarista de reducción de la inflación creó atractivas oportunidades de especulación financiera que aumentaron la debilidad del frente externo, ante la entrada de capitales especulativos siempre listos a abandonar el barco. La disponibilidad de dólares luego de un ciclo de bajo endeudamiento produjo también una sobrevaluación de la moneda nacional atractiva para las clases medias-altas y altas, pero productora de déficit de cuenta corriente. Esos apoyos financieros fueron los más importantes que recibió el gobierno desde su asunción. Otros sectores de la economía, locales e internacionales, fueron mucho más reticentes a la hora de hacer inversiones en el país. Así, por ejemplo, en 2017, cuando aumentó sensiblemente la inversión privada luego de una abrupta caída en 2016, entre los sectores más dinámicos estuvieron la construcción y la intermediación financiera, ambos dependientes del Estado. El pronóstico de que había inversores esperando el cambio de ciclo para volcarse masivamente a la economía argentina no se cumplió. En cambio, la dependencia de la inversión pública se volvió aun más crítica cuando a partir de abril de 2018 el crédito internacional se cerró y el gobierno debió buscar fuentes de financiamiento con fuertes condicionalidades en el Fondo Monetario Internacional. La crisis que se inició entonces terminó con los recursos financieros para el gradualismo. El gobierno “tercerizó” en el FMI las restricciones para el cambio económico que no había podido promover por sus propios medios. El problema es que este giro se da cuando los recursos políticos de Cambiemos son más escasos, y cuando los sectores

sociales que bloquearon buena parte de las reformas desde los inicios tomaron nota de esa debilidad, mientras los apoyos económicos siguen sin llegar.

3 Escasos apoyos políticos. Es sabido que Cambiemos asumió con minoría en ambas Cámaras del Congreso y en los gobiernos provinciales. También que sus apoyos electorales eran duales. Por un lado, un núcleo duro compuesto por votantes de centro-derecha y por los contornos

El gobierno mostró que sabe usar los recursos políticos con los que cuenta para mantener su marca y su organización.

más antiperonistas del no peronismo que pareció haber encontrado en esta etiqueta un espacio de identificación luego de años de peregrinaje. Estos votantes posponen resultados económicos a cambio de la consolidación de la nueva fuerza política en el poder y del mantenimiento del antikirchnerismo como organizador del debate público. Por otro lado, hay una periferia transaccional cuya relación con Cambiemos está más basada en preferencias coyunturales –la opción no peronista disponible– en resultados económicos. Al inicio del

mandato fue movilizadada con expectativas de futuro más que con mejoras inmediatas. Fue sensible a la fugaz tangibilización de mejoras en el segundo semestre de 2017. A comienzos de 2018, la baja performance económica del gobierno y en especial la ruptura de las expectativas de una mejora futura anuló uno de los motores del apoyo a Cambiemos de esos votantes. En las actuales condiciones el gobierno parece tener poco para ofrecerles. Cuenta hasta el momento, a su favor, con la debilidad de los grupos opositores. Pero, al igual que la confianza de “los inversores”, este es un factor que Macri y su equipo no pueden controlar.

Hacia la reelección

Y a pesar de todo... el gobierno muestra solidez en su conducción política y se prepara para las elecciones de 2019 con posibilidades de triunfo. En buena parte, su resiliencia se basa en el hecho de que PRO es un partido que consolidó durante más de quince años una coalición dirigente con bases de apoyo en algunos bastiones sociales, en especial en clases medias-altas y altas, mientras aprendió a conseguir apoyos en sectores populares. Esa construcción soportó las tormentas de 2018. La capacidad de coordinación y centralización de la estrategia política fue clave para la construcción partidaria de PRO y para la organización de Cambiemos desde el gobierno. El cuidado de la marca se realizó siguiendo esa lógica, y contrastó con otras fuerzas políticas nacidas de la crisis de 2001-2002 cuyos zigzagueos provocaron su marginación o su subordinación a partidos tradicionales. Pero la marca PRO está hecha en buena parte de una promesa de eficiencia que la crisis económica puede erosionar.

Por ahora, la disciplina partidaria se mantiene, en línea con la lealtad de sus votantes duros: la promesa de continuidad de los de arriba “empuja” a la fidelidad de los de abajo. El gobierno mostró que sabe usar los recursos políticos con los que cuenta para mantener su marca y su organización. También tiene acceso al combustible que aviva el rechazo al kirchnerismo como motor de generación de apoyos electorales, en especial de su núcleo duro. Pero está claro que con eso no alcanza y que cada vez es audible para menos públicos.

Así las cosas, los sectores internos asociados a la “vieja política” proponen un camino para sacar al gobierno de su encierro: la transformación de Cambiemos en un nuevo partido del orden, que incorpore peronistas y radicales con poder territorial y combine neoliberalismo con compensaciones discrecionales. Una suerte de menemismo póstumo, ahora conducido por nuevos políticos. Pero la conducción del gobierno cree que llegó para otra cosa: si por primera vez un partido promercado ofrece bienes atractivos para el electorado es en parte por su carácter de “partido nuevo”. Su “normalización” podría producir efectos similares a los de una crisis económica. Porque cuando los seguidores comienzan a desconfiar de las capacidades de su líder para llevar a cabo las tareas que prometió, y que le fueron encomendadas, se entreabre la puerta del éxodo, por goteo o por chorradas. ■

* Doctor en Sociología por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Francia), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el IDAES, UNSAM.
© UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Soñar la vida. Construir los sueños.

Trabajamos junto a nuestros voluntarios promoviendo la educación y la cultura de nuestras regiones.

FUNDACIONES

GRUPO·PETERSEN 

 **Fundación
Banco San Juan**

 **Fundación
Banco Santa Fe**

 **Fundación
Banco Entre Ríos**

 **Fundación
Banco Santa Cruz**

El arrogante capital financiero se ha erigido en el mayor explotador de los asalariados, formales o de la economía popular. Un dato que los dominados deberán incorporar a sus demandas, para aprovechar mejor su probado poder de confrontación.

Frente al poder financiero, patriarcal y colonial

Una nueva máquina de confrontación

por Alexandre Roig*



Manifestación, 9-7-2018 (Martín Acosta/Reuters)

Algo no encaja en la actual crisis argentina. Un desasosiego nuevo, un enojo que no termina de nombrarse, un conflicto que no alcanza su maduración. Y no es por falta de degradación de la situación social y económica. Por primera vez un gobierno induce una crisis profunda para cambiar un régimen de acumulación. En general las grandes transformaciones económicas fueron producto de ciclos donde se incrementaban progresivamente contradicciones estructurales. Estas fueron contradicciones provocadas por el gobierno para favorecer a los sectores más concentrados y rentísticos. Paradójicamente y por suerte, los efectos de la economía fueron matizados, en esta etapa, por políticas redistributivas heredadas de los gobiernos anteriores y defendidas por las organiza-

ciones sociales. Estas demoraron, por un tiempo, el hambre y la rabia.

Simultáneamente, y a pesar de tener una sociedad cada vez más individualizada, la vitalidad social no mengua. El dinamismo y la fuerza de los feminismos, la organización de los trabajadores de la economía popular, las múltiples expresiones de indignación y protesta en los órdenes domésticos y públicos, dan cuenta de una vigente potencia de confrontación.

Pareciera, sin embargo, que no hallamos puntos de articulación, sentidos comunes propios que permitan una confrontación más enfocada, mejor orientada. Es como si la historia no lograra cuajar, como si no pudiéramos engranar las piezas de una nueva maquinaria de lucha. La crisis del 2001 fue más transparente en este sentido. El desempleo y

otras causas de indignación ordenaban el rechazo a un neoliberalismo agotado. Y, si bien la reivindicación social se sintetizaba en el “Que se vayan todos”, la respuesta a la crisis se hizo desde el Estado articulando con las reivindicaciones de las organizaciones.

Sobre el eco de este gesto histórico quisiera volver; sobre ese movimiento de toma de poder en el Estado y transferencia de poder a las organizaciones sociales para producir una transformación en la sociedad. Este “método” que captó el primer gobierno kirchnerista encierra, tal vez, pistas para organizar una nueva máquina de confrontación a favor de los dominados.

El fin de la dialéctica

Tal vez esté de más la insistencia, pero es clave: la lucha es en contra de las do-

minaciones. El problema no es la moralidad de los capitalistas, su codicia o avaricia. El problema es que quieren garantizar su dominio a través de la acumulación. El problema no radica en que los hombres no “reconozcan” a las mujeres como iguales, el problema es que se justifique el dominio patriarcal desde allí. El problema no es el odio al extranjero, al indio o al negro, sino que ese odio sea el arma de dominio del blanco, occidental. Una economía política es, en este sentido, una praxis de la emancipación que identifica y confronta todas las lógicas de dominio junto a sus articulaciones.

Pero ¿cómo caracterizar hoy esta praxis? Maurizio Lazzarato, en uno de sus últimos libros, *Guerras y capital* (1), insiste mucho en este punto: ni el conflicto capital-trabajo, ni el conflicto en-

tre géneros, ni los conflictos descoloniales tienen hoy una lógica dialéctica. Dicho de otro modo, los conflictos ya no pueden ser conflictos de “sustitución”, o no pretenden serlo. Esto es, los trabajadores no van a estar *en el lugar* de los propietarios de los medios de producción, porque la lógica accionarial hace que la propiedad sea fragmentada y que importe más la gestión de los medios de producción que su propiedad. Sumado a ello, hace 40 años que el capital se orienta a su valorización financiera, la propia lógica del dominio desde la propiedad está en jaque. Las mujeres no buscan estar *en el lugar* del patriarca, pues desplazan la lógica del dominio masculino. Y definitivamente, los negros no aspiran a ser blancos. La dialéctica está dejando lugar al desplazamiento como estrategia central de confrontación.

Detengámonos en el conflicto entre capitales y trabajos. Usamos los plurales porque el mundo del trabajo y del capital se han heterogeneizado. Es el caso en Argentina desde los años 90, cuando los desempleados fueron reconocidos como trabajadores –reivindicación piquetera finalmente retomada por la CTA–. Progresivamente se fueron autodefiniendo como trabajadores sin patrón y trabajadores de la economía popular. Agregados a las identidades obreras tradicionales, conforman un crisol de trabajadores que comparten la misma condición: ser explotados, aunque sus lógicas sean hoy de difícil visibilización. El capital, por su parte, también se ha complejizado. Ya no solo hay tensiones entre el capital industrial y el capital agrícola, sino entre estos y el capital financiero que despliega lógicas de acumulación que atentan contra las lógicas industriales y productivas.

Esa doble heterogeneización conlleva un primer problema. Los trabajadores seguimos confrontando con el capital industrial y productivo, cuando el dominio está también, y sobre todo, en el capital financiero. El capital financiero ha generado los mecanismos para evitar confrontar con el trabajo. Que el dinero produce dinero en el mundo financiero es sabido y debería ser asumido como rasgo de nuestros tiempos. Pero que las finanzas se conectan con el mundo productivo también es una realidad que se disimula todo lo que se pueda y que se explicita en tiempos de crisis financiera, cuando las caídas de las Bolsas producen despidos masivos.

Tomemos un ejemplo: los supermercados. La principal ganancia no proviene de la venta en góndolas sino de los intereses que pagan las tarjetas de crédito que emite la propia empresa (la comunidad Coto). Esta ganancia financiera no sería posible si alguien en la caja registradora no pasara esa misma tarjeta por el posnet. Sin embargo, a la hora de disputar salario, los trabajadores no exigen un porcentaje de la ganancia financiera producida por las tasas de interés. Lo mismo podríamos decir respecto del sector automotor, donde los planes de financiamiento producen más ganancia que la venta de autos, aun cuando estas ganancias dependen de la producción de autos. Lo mismo pasa con la deuda externa del país: es una ganancia financiera pagada por los impuestos, es decir, por una captación sobre nuestro trabajo.

Las tasas de interés son hoy en día las que organizan el dominio del capital, y no solo la tasa de ganancia en el sector productivo. Seguimos disputando de modo exclusivo la tasa de ganancia cuan-

do la que nos rige es la tasa de interés (2). Los ladrilleros usan el término “patrón oculto”: para caracterizar la cadena de explotación en la que están inmersos (3). Ampliando este concepto, podemos decir: cada uno de nosotros tiene un patrón oculto, el capital financiero que nos explota vía la tasa de interés.

El control del porvenir

El proceso de valorización financiera tiene un corolario conocido: la desva-

No hallamos puntos de articulación, sentidos comunes propios que permitan una confrontación más dirigida, mejor orientada.

lorización del trabajo como valor social y como remuneración efectiva. Valorar el trabajo es en sí mismo una manera de confrontar con el capital financiero tanto en el plano político como económico y simbólico. Y cuando decimos valorar el trabajo, incluimos la perspectiva de género y descolonial. Toda operación concreta que permita una mejor valoración del trabajo de las subalternidades es una herramienta de confrontación con el capital financiero (4). Los procesos de valorización del trabajo requieren un amplio desarrollo conceptual, pero digamos tan solo que su precio es político. Da cuenta de esta afirmación el salario social complementario que se logró institucionalizar con la ley de emergencia social de diciembre de 2016. Esta ley sostiene que el salario de los trabajadores de la economía popular no puede dejarse librado a la lógica del mercado, por todos los procesos sociales de explotación no explicitados y que, sin embargo, contribuyen a los ingresos bajos. Se abre ahí el concepto de “paritaria social”, de un lado los trabajadores de la economía popular, de otro, el Estado, que media con los “patrones ocultos” que explotan, y por ende merman los ingresos de los trabajadores. El salario social complementario aumenta la remuneración, revaloriza el trabajo y a las y los trabajadores.

Ahora bien, esta lucha de revalorización no puede ser dissociada del control de las tasas de interés. Porque lo que se puede valorar en los procesos productivos se puede perder después: las tasas toman lo que el trabajo da. Basta con observar que tasas de interés anuales que superan en 80% la inflación se aplican a los sectores populares que están endeudados en un 75% (5). Concretamente, además de la evidente necesidad de regular las tasas de interés en el Banco Central y en los directorios de los bancos públicos, tendría que haber representantes de los trabajadores que participen de la regulación de la tasa de interés. Y en todo caso, los conflictos gremiales podrían apuntar a la ganancia financiera, suspendiendo las herramientas de endeudamiento (no pasar la tarjeta de crédito en la caja, por ejemplo) y confrontando directamente con los acreedores.

Sabemos que esta centralidad del capital financiero sigue siendo resistida por imaginarios que todavía están atravesados por deseos industrialistas. Sin embargo, nuestro presente está, más que nunca, moldeado por una subjetividad financiarizada. Como bien señaló Michel Foucault, y más tarde Gilles Deleuze (6), en tiempos industriales la lógica central de dominación es el disciplinamiento al que hoy se agregan el control, especialmente el control sobre el futuro. Lo que está en juego para el capital no es solamente la obligación presente de ir a trabajar sino garantizar, en el futuro, las obligaciones de pago de deudas. La subjetividad financiera capta nuestros futuros y obstruye así nuestro devenir.

Tenemos aquí una de las grandes contradicciones del capital financiero: quiere condicionar el futuro pero no puede garantizar el porvenir. No puede prometer nada más que espera, pero no esperanza. No tiene base material para garantizar lo que propone. Es por eso que, como bien lo analizara ya Karl Polanyi en *La gran transformación* (7), el odio hacia los otros del poder forma parte del horizonte neoliberal financiero. Las finanzas no producen sentido. Quizás ésta sea la razón del crecimiento de cierto nihilismo en el mundo. Sueños enjaulados en tasas de interés.

Convencer desde la experiencia

Como vivimos en un país donde las reglas son democrático-liberales, no hay más alternativa que convencer. Convencer es la forma de tomar el poder desde el voto. Implica, entonces, conectar con las experiencias, producir sentidos, darse una política del sentido. Lo cual demanda captar las transformaciones existentes.

Una de las razones por las cuales el gobierno de Mauricio Macri llegó al poder es porque captó la individualización social que, paradójicamente, el propio bienestar económico y social del kirchnerismo había garantizado. Sin duda se asentó, también, sobre afectos negativos propios del desgaste del poder, pero su conexión con la individualidad se produjo sobre la explotación del eje “en todo estás vos”. Un discurso sobre una auto-realización sobreexcitada y finalmente una población endeudada que pensó que su bienestar material pasaba por su capacidad personal de pagar una deuda, una cuota.

Ahora bien, ¿qué hacer frente a esas individualidades que se reconocen como tales y que, además, quieren “un cambio”? La respuesta no estaría en contraponer el colectivo al individuo, sobre todo si eso supone el fin de su autonomía, sino en mostrar que esta individualidad autónoma se despliega en virtud de la mediación colectiva. Estas mediaciones constituyen el centro de la vida democrática moderna: son los sindicatos, las organizaciones políticas, los espacios culturales y artísticos, los propios medios de comunicación. Dado que la auto-percepción moderna es cada vez más individualizada el discurso político no puede ignorar este dato. Lo importante es entender que el individualismo neoliberal propone una autonomía que no puede sostenerse sino en los colectivos (8). En este sentido, defender los derechos o el lugar del Estado no remite a un plano meramente discursivo.

En estas coordenadas, para que un proyecto de transformación social a favor de los dominados pueda convencer, se requiere de instituciones que garan-

ticen este devenir, que puedan hacerse cuerpo. Esta es la tarea principal de una nueva máquina de confrontación.

Tomar el poder no es solamente acceder al gobierno, es también cambiar las relaciones de fuerzas de modo duradero a través de transformaciones institucionales sostenidas y producidas por organizaciones sociales. La máquina de confrontación no puede entonces limitarse al plano de la representación política. Requiere articular los múltiples conflictos sociales, encontrar sus puntos comunes y sus especificidades, organizarlos en favor de una institucionalización de los conflictos; desplazar las lógicas del dominio desde las relaciones de fuerzas instituidas; producir sentido desde las prácticas institucionales que se hacen cuerpo. El Estado puede ser la gran herramienta para impulsar estos procesos sociales como lo ha sido con los convenios colectivos de trabajo que institucionalizan el conflicto entre capital y trabajo, contribuyen prácticamente a la conciencia de clase, haciendo cuerpo el derecho de disputar por mejoras de salarios y de condiciones de vida.

Esta concepción del Estado no es entonces ni pura derivación del capital, ni pura administración de un interés general sin conflictos. Es una trama de relaciones contradictorias compuesta por las distintas fuerzas sociales organizadas. En este sentido, cuando hablamos de institucionalización, no nos referimos a reglas que limitan una acción, una herramienta lineal de disciplinamiento. La institución es tanto lo que limita como lo que potencia, es el proceso que tanto permite la sutura temporaria de un conflicto como el que proporciona las condiciones de un desplazamiento.

Nuestro mundo está dominado por las finanzas, el patriarcado y la voluntad de poderío colonial. Pero la ambición emancipadora sigue en pie y es parte de la experiencia contemporánea. Engranar las piezas de una nueva máquina de confrontación puede producir las condiciones para el desplazamiento de las lógicas de dominio y abrir a un devenir, que si bien es incierto, será mejor, sin duda, que el propuesto por el neoliberalismo financiero. ■

1. Maurizio Lazzarato y Éric Alliez (2016), *Guerres et Capital*, Paris, Amsterdam.
2. Pablo Chena y Alexandre Roig (2018), “L’exploitation financière des secteurs populaires argentins”, *Revue de la régulation*, <http://journals.openedition.org/regulation/12409>; DOI : 10.4000/regulation.12409.
3. Paula Abal Medina (2017), “Astilla del mismo palo”, en *Revista Crisis*, <https://www.revistacrisis.com.ar/notas/astilla-del-mismo-palo>.
4. Luci Cavallero y Verónica Gago (2018), “Sacar del clóset a la deuda: ¿por qué el feminismo hoy confronta a las finanzas?”, prólogo a G. Caffentzis, *Los límites del capital. Moneda, deuda y luchas de clases*, Buenos Aires, Tinta Limón & Fundación Rosa Luxemburgo.
5. Pablo Chena y Alexandre Roig (2018), *op. cit.*
6. Gilles Deleuze (1999), *Post-scriptum sobre las sociedades de control*, Valencia, Pre-textos.
7. Karl Polanyi (2007), *La gran transformación*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
8. Cornelius Castoriadis (2013), *La institución imaginaria de la sociedad*, Buenos Aires, Tusquets.

*Sociólogo, profesor investigador del IDAES-UNSAM, miembro de la Usina.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Una versión ampliada de este texto será publicada en Sosa, N., Cardelli, M., San Cristóbal, A., *Emergencias. Repensar el Estado, las subjetividades y la acción política*. Buenos Aires, Ciccus, 2018 (en prensa).



Manifestación en Buenos Aires contra los recortes al presupuesto universitario, 30-8-18 (Marcos Brindicci/Reuters)

En la actual crisis argentina incidiría el régimen presidencialista, que fija un plazo de mandato. El persistente mito de que un gobierno no peronista no puede gobernar explica tanto la ligereza con que el kirchnerismo arriesgó su continuidad, como el radical propósito de Cambiemos: borrar al peronismo del imaginario popular.

¿Puede gobernar un presidente antiperonista?

Inestabilidad política: hechos y mitos

por Martín Plot*

Toda democracia, no sólo en Argentina, enfrenta un dilema al mismo tiempo irresoluble y difícil de sobrellevar, ¿cómo proveer de un mínimo de estabilidad a una sociedad dominada por una lógica política basada en la inestabilidad, es decir, en lo inevitable de los cambios de gobierno, del humor colectivo y de los discursos dominantes en la opinión pública? Este mínimo de estabilidad necesaria tiene que lograrse contra un trasfondo de dos tipos distintos de inestabilidad institucional, una de gobierno y otra de régimen. La primera es, de manera paradójica, el pilar de la estabilidad democrática: en el largo plazo, la estabilidad de régimen es el resultado de la inestabilidad propia de la periodicidad y/o regularidad de las elecciones y de la renovación y/o revocación de los distintos cargos electivos. Este juego de estabilidades e inestabilidades no reconoce una fórmula única ni definitiva, ni puede deducirse automáticamente de la existencia de una cultura política determinada o de principios de validez universal. En definitiva, este juego de estabilidades e inestabilidades es un balance que hay que repensar una y otra vez, un ejercicio de pensamiento que sólo podría cesar con el cese de la democracia misma.

Una falsa dicotomía

Propongo entonces una falsa dicotomía para organizar la reflexión: una sociedad

democrática se mueve entre dos constelaciones alternativas, la de la *estabilidad-inestable* y la de la *inestabilidad-estable*. La estabilidad-inestable es aquella cuya rigidez institucional provee de períodos de estabilidad; pero ocurre que estos períodos se ven amenazados, con frecuencia variable, por el fantasma de la ruptura institucional. A la inversa, en la inestabilidad-estable una institucionalización flexible crea una inestabilidad permanente que, a la larga, puede resultar estabilizadora. Sé que este juego de palabras puede parecer intrincado, pero es el resultado casi inevitable de tratar de pensar por fuera de las dicotomías propiamente dichas, dicotomías que con frecuencia terminan boicoteando el intento por comprender las dinámicas de entrelazamiento y complejidad que dominan efectivamente la vida social y política. De allí lo de “falsa dicotomía”. La dicotomía real sería estabilidad vs. inestabilidad, donde ambos elementos se presentarían como mutuamente excluyentes. La falsa dicotomía propuesta, en cambio, no es lineal sino circular, ya que ambas constelaciones se oponen no por el hecho de encarnar conceptos esencialmente diferentes sino por su modo inverso de entrelazar estabilidad con inestabilidad.

Plantado esto, permítanme ahora sugerir que lo que suele llamarse régimen presidencialista o, más recientemente, hiperpresidencialista, se acerca al tipo ideal de la primera constelación de nuestra falsa di-

cotomía. Un régimen presidencialista suele proveer estabilidad a través de la rigidez de la duración de los mandatos, usualmente en combinación con un mayor decisionismo en la implementación de políticas públicas; decisionismo idealmente atemperado por los sistemas de contrapesos aportados por las ramas no-ejecutivas del entramado institucional –el Parlamento y el Poder Judicial–. Históricamente ha sido el parlamentarismo la forma política que más se acercó al tipo ideal de la segunda constelación de nuestra falsa dicotomía. En efecto, un régimen parlamentario suele promover la incertidumbre con respecto a la duración de los mandatos, junto con una parlamentarización a veces exasperante de la toma de decisiones; y estos elementos combinados suelen teñir de inestabilidad la vida política de los parlamentarismos. De todos modos, y de forma semejante al sistema de contrapesos en el presidencialismo, es la institucionalización de estos mecanismos lo que hace de la inestabilidad de los parlamentarismos, a veces, algo razonablemente estable.

Fin de las rupturas institucionales

Como puede observarse en la danza entre ambas constelaciones, a la estabilidad precaria de los primeros ministros parlamentarios se opone la inestabilidad institucionalizada de la posibilidad de su reemplazo, si es que su deterioro ante la opinión pública o el quiebre de sus mayorías parlamentarias

así lo demanda. A la inversa, a la estabilidad garantizada de los presidentes se opone el fantasma de la ruptura institucional. Es este fantasma de la ruptura institucional el que ha amenazado la vida política argentina desde el comienzo de la transición democrática iniciada en diciembre de 1983. En los inicios del gobierno de Raúl Alfonsín, la forma que asumía el fantasma de la ruptura institucional era por todos conocida: el golpe militar. En realidad, más que un mero fantasma, la intervención de las Fuerzas Armadas en la relación entre estabilidad e inestabilidad institucional era la piedra angular del régimen-realmente-existente desde 1930: en Argentina, desde aquel golpe, todos los gobiernos –no sólo los elegidos en las urnas– duraban hasta que las Fuerzas Armadas y sus circunstanciales aliados civiles decidieran lo contrario. Este régimen, aunque no lo supiéramos en ese momento, era el que había concluido en diciembre de 1983; o en rigor, en la Semana Santa de 1987, con el levantamiento fallido de esas mismas Fuerzas Armadas.

Aquel régimen nacido en 1930 había concluido, en efecto, al cierre del ciclo 83-87. Lo que de todos modos siguió vigente fue el problema de la estabilidad inestable: ¿qué hacer con los gobiernos de mandato rígido y decisionismo presidencial cuando cae su estima en la opinión pública o se deteriora enormemente su efectividad para gobernar? Ante la persistencia renovada de este problema nació un nuevo mito cuyo propósito difícil de ocultar fue la responsabilización de la inestabilidad del antiguo régimen a una de las principales fuerzas políticas de aquel período: el peronismo. Del mismo modo que dos puntos bastan para trazar una línea, dos acontecimientos son suficientes para delinear el mito: las elecciones anticipadas convocadas por Alfonsín al fragor de la hiperinflación de los primeros meses de 1989 y la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. En ambos casos, el peronismo se hizo del poder, en el primero ganando las elecciones anticipadas y en el segundo como resultado del dispositivo institucional disparado por el efecto combinado de la acefalía presidencial y la ausencia de un vicepresidente que ya había renunciado.

Este mito, como todo mito, es altamente productivo, en el sentido de que promueve prácticas y discursos generadores de realidades concretas. En este caso particular, el mito sirve para legitimar y deslegitimar distintas posiciones políticas, así como también para promover tanto el temor como la esperanza de una auto-realización de la profecía mítica: los gobiernos no-peronistas terminan inevitablemente entregando el poder de manera anticipada a un nuevo gobierno peronista. El gobierno de Cambiemos nació del corazón de este mito: el peronismo es no solo la causa de los principales problemas del país –este aspecto del mito le precede y hasta fue central a la forma de legitimación de la última dictadura– sino también de la inestabilidad sufrida por los gobiernos democráticos de 1983 en adelante.

Un propósito fundacional

Pero el gobierno de Cambiemos no es un episodio más de la vida política reciente. Su carácter distintivo reside precisamente en proponerse modificar esta tendencia delineada por el mito: no solo no fracasar en el objetivo de todo gobierno de término fijo –concluir su mandato– sino también transformar la estructura social y hasta la imaginación política de los argentinos, haciendo de lo que llaman “populismo” algo dejado definitivamente atrás gracias a la llegada de un neoliberalismo triunfante y fundacional. Este doble objetivo fue revelado desde el primer día del gobier-

no de Macri, al poner inmediatamente en marcha un presidencialismo proactivo que buscó despejar el mito de la fragilidad de los gobiernos no-peronistas. Cambiemos se propuso así poner a la estabilidad-inestable del presidencialismo argentino al servicio no solo de su continuidad en el poder –hablaron de 20 años de gobierno– sino, sobre todo, de un decisionismo libremercaderista que lograría desfinanciar primero, y desmantelar después, a un Estado redistributivo que identifican como el principal impedimento para la institución de una sociedad y una economía estables y ordenadas. La radicalidad de este proyecto es, quizás, la principal causa de la crisis actual.

Pero antes de evaluar el estatus de esta crisis, quisiera agregar que, de todos modos, no fue solo Cambiemos el actor político cuyas acciones fueron prefiguradas por la productividad del mito. El mito, operante incluso desde antes de la creación de Cambiemos, tuvo como uno de sus principales perpetuadores al oficialismo inmediatamente precedente, el kirchnerismo, particularmente durante el segundo y último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Solo la productividad del mito del pronto retorno puede explicar la displicencia con la que el kirchnerismo manejó su propia renovación interna y hasta la transición al nuevo gobierno. Solo la certeza de un súbito fracaso de un gobierno no-peronista puede explicar la forma en que aquel oficialismo en el poder desestimó la amenaza presentada por una oposición crecientemente organizada y, luego de la derrota, la necesidad de reorganizarse, renovarse y ampliarse para generar las condiciones políticas para un futuro regreso electoral al poder.

Imaginemos por un momento cuál sería el comportamiento de los principales actores políticos, ante la crisis económica actual, si dispusiésemos de un régimen de inestabilidad-estable. La oposición trataría, utilizando mecanismos institucionales flexibles, de persuadir tanto a la opinión pública como a los actores políticos institucionales, de que el gobierno actual ha perdido la confianza general, la efectividad para gobernar, o ambas, y que por lo tanto se requiere un inmediato cambio

El gobierno de Cambiemos nació del corazón de este mito: el peronismo es la causa de los principales problemas del país.

de administración. El oficialismo, por su puesto, haría lo contrario, tanto con su palabra como con sus acciones; lo que quizás estimularía el reemplazo de ciertos dogmas ideológicos por medidas más pragmáticas o consensuadas.

La crítica a esta situación imaginaria es más que previsible: los argentinos no estamos preparados para tanta inestabilidad, es decir, para un horizonte, institucionalmente habilitado, de cambio de gobierno sin términos fijos. No sé si esto es cierto. Los críticos de esta situación

imaginaria tampoco lo saben; pero postulan, instrumentalmente, hacerlo. Sea como fuere, está claro que en este escenario imaginario las acciones de los actores estarían plenamente visibilizadas: los opositores argumentarían por un cambio de gobierno, los oficialistas por su permanencia. Lo que este escenario probablemente eliminaría es la mera espera de –o la deliberada operación en las sombras para– que el gobierno cayese anticipadamente, a pesar de la ausencia de un mecanismo institucional disponible para administrar la transición. Entiéndase, los actores políticos imaginados no serían mejores que los actuales, sino que contarían con un dispositivo para la visibilización de sus intenciones, de un escenario para la manifestación de sus acciones y de un mecanismo institucional para determinar el éxito de las mismas.

Estos tres elementos –un dispositivo flexible de cambio de gobierno, un escenario institucional para el debate público abierto acerca de las políticas públicas necesarias y un mecanismo para la medición del resultado de dicho debate– son las ausencias omnipresentes de la actual coyuntura política. Lo que la presencia de estas ausencias hace, en combinación con la continua productividad del mencionado mito, es congelar el menú de opciones de los actores políticos. El oficialismo, dado que no tiene mecanismos institucionales para refundarse sobre una nueva base política, no hace más que repetir “este es el único camino” o “no hay plan B”. Y si todo sale mal, podrá recurrir a la excusa provista por la profecía auto-realizada: no es posible gobernar contra el peronismo. A la oposición, dado que no tiene es-

tímulos para construir nuevos consensos y coaliciones que le permitan formar una nueva mayoría electoral en el corto plazo, solo le queda esperar –o, como prefieren imaginar los promotores del mito, operar en las sombras–. En ambos casos, tanto gobierno como oposición, son presas de la constelación hoy dominante de nuestra falsa dicotomía inicial: la estabilidad inestable de nuestro régimen presidencialista.

Crisis y oportunidad

Es probable que Argentina esté hoy enfrentando una profunda crisis económica. También es probable que esta crisis, como toda crisis, se presente a los actores como una buena oportunidad. Para el oficialismo, la oportunidad de legitimar una fuga hacia adelante, haciendo uso de más decisionismo anti-redistributivo y de más mecanismos de “ley y orden” para acallar sus consecuencias. Para la oposición, la oportunidad de imaginar la perpetuación del mito en la repetición de alguna de sus versiones, ya sea en unas elecciones anticipadas o en un nuevo caso de acefalía presidencial. En definitiva, a pesar de que esta crisis se presenta como económica, permítanme concluir sugiriendo que la crisis es fundamentalmente política –puesto que en Argentina nadie sabe qué hacer cuando un gobierno de término fijo pierde el apoyo de la opinión pública o se muestra incapaz de gobernar con efectividad–. ■

*Investigador independiente y profesor de teoría política en IDAES/UNSAM-CONICET. Integrante de los grupos de trabajo “Democracia, organizaciones populares y representación política” de CLACSO, “Teoría política” de la UB y “Estética y política” de CalArts. © UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



**Tenés Credicoop.
Tenés quien te acompañe.**

Más información en www.bancocredicoop.coop



Banco Credicoop Coop. Ltda. Reconquista 484. CABA. CUIT: 30-57142135-2. Credicoop Responde: 0810-888-4500. www.bancocredicoop.coop



En un principio asociada al movimiento de derechos humanos, la agenda anticorrupción fue virando, a través de denuncias periodísticas escandalosas, a un enjuiciamiento de los políticos y de la intervención estatal, favorable a los objetivos neoliberales.

De los derechos humanos a las reformas de mercado

Anticorrupción bajo el signo de la antipolítica

por Sebastián Pereyra* y María Soledad Gattoni**

Desde fines de los años 80, Argentina fue uno de los países más activos en el desarrollo de demandas, formulación de políticas públicas y trabajo experto en materia de anticorrupción. Durante la década de 1990 y hasta el fin del gobierno de la Alianza en 2001, las redes locales fueron fuente de aportes sustantivos a la incipiente comunidad epistémica en desarrollo a nivel internacional. Las ideas sobre el problema de la corrupción lograron una gran proyección a nivel regional e internacional. Esa dinámica fue interrumpida por la crisis de 2001 y el reordenamiento político ideológico que ésta produjo. Desde entonces, esa agenda fue abandonada y absorbida por la centralidad y ubicuidad alcanzada por los escándalos de corrupción.

La agenda anticorrupción tuvo, en sus orígenes, una fuerte filiación con los debates sobre los derechos humanos, la consolidación democrática y la reforma de la Justicia. Sin embargo, a lo largo de los años fue perdiendo esa impronta. En su lugar, fueron ganando espacio los reclamos sobre la moralidad de políticos y funcionarios, la independencia del Poder Judicial y una crítica a la actividad política y las formas de intervención estatal –también presentes en los orígenes de estas demandas–. Mientras que el problema de la corrupción se fue consolidando como uno de los ejes centrales del debate político en el país, la agenda anticorrupción fue cediendo terreno a la lógica de los escándalos. El trabajo experto fue abandonado, perdiendo su especificidad local, y reemplazado por la denuncia periodística y el redireccionamiento en términos morales de la disputa político-partidaria.

La agenda anticorrupción se consolidó en Argentina durante la década de 1990 y estuvo ligada al desarrollo y ampliación del mundo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Esa génesis estuvo vinculada a una evaluación y transformación de la agenda de derechos humanos, crucial durante el período de la transición a la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín. Anticorrupción y derechos humanos tuvieron, en esos años, varios puntos de continuidad y de tensión. El trabajo de denuncia de la corrupción se apoyó fuertemente en el éxito y los logros del movimiento de derechos humanos en Argentina. Aunque sus pioneros no provenían de los organismos, sí eran cercanos a la temática y habían sido personajes relevantes en el desarrollo –tanto desde el Poder Judicial como desde el Ejecutivo– de la agenda de derechos humanos. La antio-

rrupción era considerada como una continuidad de los avances logrados en términos de derechos humanos para un escenario de consolidación democrática. Así, las reformas anticorrupción eran concebidas como un programa de reformas democráticas de segunda generación.

Los diagnósticos sobre la corrupción en ese entonces tuvieron varios puntos de contacto con el legado del movimiento de derechos humanos. En primer lugar, compartían un marco general de desconfianza sobre el Estado y pensaban a la democratización como un modo de contrarrestar los abusos de poder. En segundo lugar, ambas agendas proponían poner el foco en el problema de la Justicia; el marco de la impunidad fue utilizado recurrentemente como modo de señalar los alcances y la gravedad del problema.

Por otro lado, algunos puntos alejaban y tensionaban el trabajo en temas de derechos humanos y de anticorrupción. Si se comparan los escenarios de inicios y fines de la década de 1990, los estilos de intervención se fueron diferenciando progresivamente. El estilo de militancia y activismo, más propio del movimiento de derechos humanos, fue perdiendo fuerza en el mundo de la anticorrupción donde se consolidó un estilo de trabajo más profesionalizado. Esa brecha se angostó durante los convulsionados años de crisis luego del derribo del gobierno de Fernando de la Rúa y se amplió considerablemente a lo largo de los años de gobierno del kirchnerismo. Los posicionamientos en relación con los gobiernos kirchneristas establecieron una profunda diferenciación entre los actores. El kirchnerismo tomó posición en relación a ambas agendas. Priorizó y privilegió la agenda de derechos humanos y olvidó paulatinamente la agenda anticorrupción.

Cruzada contra los políticos

Finalmente, en los últimos años se ha renovado el interés por el tema de la corrupción en el país principalmente a partir de la aparición de una nueva ola de denuncias y escándalos vinculados a los gobiernos kirchneristas. Este interés asigna un rol destacado al Poder Judicial, focalizando en la Justicia como respuesta óptima y eficaz para combatir la corrupción. Se trata de una agenda moralizadora de la actividad política, afirmada sobre una tradición que entiende a la anticorrupción como una cruzada moral frente a los políticos. Tiene sus raíces también en los tempranos años '90 cuando el flamante gobierno de Carlos Menem impulsaba denuncias anticorrupción como prolegómeno a los procesos de

reestructuración de agencias del Estado y privatización de empresas públicas.

En este contexto, se vuelve imprescindible repensar una agenda anticorrupción volviendo sobre algunos aspectos de su génesis. Una agenda más ambiciosa y sustantiva y, sobre todo, autonomizarla lo más posible de la lógica de los escándalos. Los escándalos de corrupción trajeron aparejados malestares respecto de la representación política. Sin embargo, apostar por la moralización de la clase política como única alternativa para resolver dichos malestares no produce sino un efecto paradójico. Para repensar una agenda anticorrupción es necesario volver a vincular las diferentes aristas de dicha agenda que hoy se presentan desconectadas: la reforma judicial, la reforma política y la reforma de la administración pública.

Hay una diferencia importante entre afirmar que la Justicia Penal no puede resolver el problema de la corrupción y reconocer que el Poder Judicial no puede lidiar con ninguna causa de corrupción. Este segundo escenario, el actual, es potencialmente muy destructivo. Sobre esta cuestión hay al menos tres líneas de trabajo que merecerían ser exploradas: la composición y la carrera en el fuero penal federal; el rol y las funciones del Consejo de la Magistratura como mecanismo de enlace del Poder Judicial con los otros poderes del Estado, y, tercero, el procedimiento penal y su vínculo con el éxito de las estrategias de dilación de las causas.

La expresión reforma política, por su lado, se popularizó durante la crisis de 2001-2002 en virtud de la crítica generalizada al desempeño de los políticos profesionales. Sintetizando mucho las discusiones, existen al menos tres núcleos de problemas sobre los que convendría avanzar para recuperar aquella agenda de 2001. Un primer eje se vincula con los agrupamientos políticos. Hace décadas se discute la crisis de los partidos políticos y hasta ahora han prevalecido los intentos fallidos de volver a fortalecerlos. Sin embargo, las figuras políticas siguen ganando preeminencia frente a los agrupamientos partidarios y poco sabemos sobre el estado de la carrera política profesional. El segundo eje refiere a los sistemas electorales y de representación. Poco se ha modificado en términos de métodos de votación y criterios de representación en los sistemas electorales. Finalmente, un tercer punto alude al financiamiento de la actividad política. El problema aquí es, sin duda, la discusión en términos abstractos de lo que sería deseable que ocurriera sin sa-

ber qué tipos de equilibrios existen y permiten efectivamente el financiamiento de la actividad política en la actualidad.

Finalmente, en Argentina y en América Latina, las reformas de la administración pública han estado asociadas a procesos de privatización y reducción del aparato estatal. Durante los años 90 las mismas estuvieron atadas a un programa de reformas de mercado. La anticorrupción se vinculó desde entonces a una serie de presupuestos (eficiencia y eficacia del aparato estatal, reducción del gasto y del empleo público, desregulación de la economía) más propios de los programas de reformas de mercado que a las inquietudes ligadas al problema de la corrupción. Ninguno de esos presupuestos produce de modo directo, ni necesariamente, un acotamiento o control de los intercambios corruptos. Alcanza con recordar, por ejemplo, que el proceso de privatización de empresas públicas durante los años 90 fue prolífico en el desarrollo de negocios ilegales e ilegítimos. Algo similar podría decirse sobre el gasto o el tamaño del Estado; la corrupción no se vincula con el volumen del gasto ni del aparato del Estado, sino con su performance y el tipo de articulación virtuosa o no con el sector privado y con la ciudadanía en general.

Con esa marca de origen, las políticas de transparencia corren el riesgo de transformarse en el mascarón de proa de otros objetivos de reforma y de política y, por lo tanto, de limitarse a un conjunto de procedimientos y mecanismos de orden formal que no producen transformaciones ni persiguen objetivos sustantivos. En ese sentido, es necesario clarificar qué tipo de transformaciones son deseables en términos de reforma de la administración. Y es necesario pensarlas al menos en dos sentidos. Por un lado, un conjunto de elementos que son de orden interno a la administración. Medidas que garanticen la igualdad e idoneidad en el acceso y en el ejercicio de los cargos públicos (considerando e incluyendo una revisión de la distinción entre cargos políticos y técnicos). El reclutamiento y la carrera en el Estado (nacional, provincial y municipal) requieren un ordenamiento claro y preciso. Por ello resulta indispensable una clarificación de los criterios de ética pública que se han ido multiplicando y superponiendo sin ninguna razonabilidad en las últimas décadas. Por otro lado, elementos vinculados a las interacciones de la administración. Resulta fundamental distinguir niveles y escalas de la interacción, ya que las agencias del Estado interactúan con actores que poseen capacidades e intereses muy desiguales. Por ejemplo, respecto del sector privado y de los actores económicos en general esas interacciones deberían guiarse por criterios de diferenciación y articulación. La eficacia y la eficiencia son fundamentales en áreas históricamente sensibles como la obra pública o las compras públicas en general. Pero también es destacable la clarificación y el resguardo del conflicto de intereses que pueden ser tanto o más perjudiciales que el cohecho y los sobrepagos. Para la ciudadanía en general resultan más importantes los criterios de apertura y control que los de la eficiencia y eficacia. La información y la publicidad de los actos de gobierno son relevantes en la medida en que éstos se asocian a mecanismos de participación y de involucramiento de los profanos en distintas áreas y cuestiones de gobierno. ■

*Doctor en Sociología por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Francia), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente del IDAES, UNSAM.

**Doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora y consultora.

© UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Fito Chiacaps®

Fitoesteroles + Aceite de Chía

Único con **Doble** Acción

Aceite de Chía

Ayuda a **reducir** el **COLESTEROL** y **TRIGLICÉRIDOS** que produce nuestro cuerpo.

Fitoesteroles

Evita la **absorción** del **COLESTEROL** que consumimos con los alimentos.

Ayuda a **prevenir**

Disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular.



Mucho más que Chía.



Puente Pueyrredón, 24-9-18 (José Mateos)

Desde la Revolución del Parque en 1890 hasta el presente, a través de periódicas crisis donde lo económico se anuda con lo político, ha ido perdiendo espacio en Argentina la expectativa del progreso ilimitado de un país abierto, próspero e igualitario, consolidándose en cambio el fantasma de una sociedad en crisis permanente.

Retrospectiva de las crisis argentinas

La crisis permanente como marca identitaria

por Marina Franco* y Valeria Manzano**

El fantasma de la crisis recorre la historia argentina. En tanto modo de auto-representación, ese fantasma ha sido tan constitutivo como la otra imagen que enfatizó el carácter abierto, crecientemente igualitario y potencialmente rico de esta sociedad. Desde fines del siglo XIX, esos modos de auto-representación (el de la sociedad abierta y el de la crisis recurrente) organizaron percepciones, modelaron expectativas y permitieron dotar de sentidos a variadas experiencias sociales.

Aquí proponemos una mirada del largo plazo en torno a las crisis. La idea es dar cuenta de dos dinámicas concurrentes. Por un lado, observar cómo cada una de las crisis económicas más significativas de la historia argentina se articuló con dinámicas políticas, produciendo sentidos de crisis total de la sociedad. Por otro lado, veremos cómo cada uno de esos momentos estuvo atravesado por el fantasma de la crisis, es decir, por la auto-representación de la fatalidad titilante en el reverso de la moneda del imaginario de la Argentina abierta, igualitaria y rica.

La crisis de 1890

A partir de la denominada Organización Nacional, la primera crisis económico-política que registra la historia argentina

es la de 1890. Desde su ascunción en 1886 Miguel Juárez Celman se rodeó de un círculo de publicistas que intentaron popularizar la idea de que Argentina era “la nación más grande y feliz de Sudamérica” en una década marcada por las ideas de “orden y progreso”. Al final de esa década, sin embargo, esa creencia sufrió un cimbronazo que tomó la forma de una crisis económica y política.

En la década de 1880, las exportaciones de bienes primarios se expandieron sostenidamente, pero la balanza comercial fue negativa ya que las importaciones de bienes y capital fueron *in crescendo*. La crisis estalló en 1889: sin oro para sostener el peso ni para hacer frente al pago de deuda, el gobierno suspendió el pago de deuda y contrajo el gasto público. La magnitud de la crisis fue inmensa: una brusca caída del empleo y el salario con saldos migratorios desfavorables. Asalariados, comerciantes, sectores importadores sintieron más dramáticamente la crisis, mientras los sectores vinculados a las actividades de agro-exportación se beneficiaron con la devaluación y la caída de los costos de producción locales.

La dimensión económica de la crisis de 1890, que horadaba las ilusiones de “progreso” ilimitado, se entrelazó con una severa crisis política que puso entre signos

de pregunta al “orden” deseado. Al frente del arco opositor, Leandro N. Alem cuestionaba públicamente las prácticas electorales fraudulentas y lo que entendía como “decadencia cívica” y “retroceso moral”. Ya en 1890, ese arco tomó el nombre de Unión Cívica, sumó adherentes de peso (como Bartolomé Mitre) y convocó a una “Revolución” (la “del Parque”), que se inició el 26 de julio de 1890 y fue derrotada en solo tres días. Sin embargo, fundó un nuevo tiempo político, y aunque no logró desarticular las prácticas del grupo gobernante, contribuyó a desenmascararlas. Más aun, en la crisis de 1890 se consolidó un modo de construir el descontento político en términos morales.

La invocación a las nociones de “decadencia” y “retroceso” modelaron un sentido de crisis que suponía su reverso, esto es, la confianza en un destino de progreso. Podría suponerse que, cuanto más extendidas las expectativas en torno al progreso, más hiperbólicos los modos de concebir los sentidos de la crisis.

La depresión de los años 30

Los ecos de la crisis de 1890 pudieron despejarse con relativa rapidez, no así el fantasma de la crisis como auto-representación de la sociedad argentina. De hecho, éste se reactivó con fuerza a fines

de la década de 1920, cuando una crisis fundamental del modelo económico se imbricó con una crisis política que implicó el final de la experiencia democrática iniciada en 1916.

Para una economía como la argentina, la crisis capitalista global de 1929 representó un cimbronazo profundo. Los precios de los bienes exportables cayeron 64% entre 1928 y 1932. En muy poco tiempo, la crisis de las exportaciones se expandió a toda la actividad económica. El PBI cayó un 14% entre 1929 y 1932 cuando el desempleo en la ciudad de Buenos Aires alcanzaba al 26%. En un principio, las respuestas gubernamentales fueron ortodoxas: reducción del gasto (con baja salarial para los empleados y paralización de obras de infraestructura) y compromiso de seguir “honrando” la deuda pública.

Esa crisis económica empalmó con una crisis política. En las elecciones presidenciales de 1928, Hipólito Yrigoyen había casi duplicado en cantidad de votos a su principal oponente. Los primeros signos de la crisis económica mundial comenzaron a evaporar las expectativas sociales en el gobierno y potenciaron una gran coalición opositora. Desde principios de 1930, un arco que incluía asociaciones patronales, dirigentes de diversos grupos de derecha, casi la totalidad de los partidos y de la prensa y un segmento del ejército, conspiraba abiertamente. Cuestionaban la legitimidad de la democracia liberal y la supuesta “demagogia personalista” de Yrigoyen, vista como inoperante e ineficaz. El golpe de Estado del 6 de septiembre, comandado por José F. Uriburu, casi no encontró resistencia.

La crisis histórica de 1930 magnificó el fantasma de una crisis virtualmente terminal. Igual que en otros países, en Argentina el derrumbe económico fue interpretado como elemento clave de una “crisis civilizatoria” que ponía fin a las ilusiones de progreso. Esa percepción devino en un pesimismo persistente y en búsquedas intelectuales y políticas de vías de escape de lo que parecía un destino fatídico. Desde junio de 1943, uno de los “conspiradores” del golpe de 1930, Juan D. Perón, invocó las memorias de ese pasado: la “década infame” y su capacidad de condensar sentidos de crisis fue el telón de fondo donde resaltar la promesa de un tiempo diferente, el de una sociedad abierta e igualitaria.

“Rodrigazo” y después

Cincuenta años después de 1930, la alterancia cívico-militar en el poder y el conflicto peronismo-antiperonismo organizaron la narración retrospectiva de las décadas pasadas. Los grandes impactos visibles de la política argentina pasaban por los altos niveles de enfrentamiento político. La clave de lectura, si bien política, acentuaba el relato consagrado de la crisis permanente y la confrontación extrema como inherentes a la cultura política nacional. Esa narración surgió al calor de un nuevo intento refundacional de la democracia posdictadura, y permitió reordenar el pasado a la luz de las esperanzas en la nueva etapa que se abría en 1983.

En esa visión se desdibujaba el peso de las crisis económico-políticas. Hoy, a la luz de la nueva crisis, el hilo narrativo fantasmagórico puede reconstruirse de otra manera y el “Rodrigazo” de 1975 reemerge en el recuerdo social.

Para ese año, el gobierno peronista era incapaz de gestionar su propia crisis interna, la violencia represiva, la presión golpista de diversos frentes y la crisis económica. El nuevo ciclo descendente provenía, en parte, del aumento del precio del petróleo a nivel mundial y de la dependencia creciente del dólar. Ante el déficit

fiscal y comercial, el gobierno aplicó medidas de shock: el 4 de junio el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, anunció una devaluación del 80 al 160% y el aumento similar de los precios de combustibles, tarifas de servicios públicos, transportes, etc. El aumento inicial de los salarios fue del 45%. La devaluación y la suba de tarifas desataron una fuertísima inflación, que en junio fue del 44% y para todo el año llegó al 183%, inaugurando una experiencia social novedosa para los argentinos: la recesión con inflación.

La respuesta social fue una enorme movilización obrera y sindical de varios días que terminó provocando la renuncia de Rodrigo y del ministro de Bienestar Social José López Rega. Pero estas renuncias no aliviaron el deterioro político. Por el contrario, el deterioro político y el económico fortalecieron la creciente demanda de una salida autoritaria que pudiera restablecer “el orden” perdido. Meses después, con el apoyo de sus aliados civiles, las Fuerzas Armadas asumían el poder; entre sus metas principales figuraban “eliminar la subversión” y “contener la inflación”.

El “Rodrigazo” fue un shock en la memoria social de los argentinos, pero más profundamente fue un momento bisagra: el comienzo del fin del modelo económico de las décadas previas y el inicio de uno nuevo, que la dictadura y el terrorismo de Estado consolidaron. El modelo basado en la sustitución de importaciones, la demanda del mercado interno y una aceptable distribución del ingreso llegaba a su fin. Desde entonces se inició un proceso inverso de empobrecimiento y concentración del ingreso: entre 1975 y 2004 los ar-

gentinos de clase media y baja perdieron entre el 15 y el 40% de su participación en el ingreso nacional y la brecha entre ricos y pobres pasó del 12 al 29%. Desde entonces, la inflación rampante se instaló como parte del funcionamiento de la economía en ese círculo perverso entre la fuga de divisas, el pago de servicios de la deuda y la transferencia de ingresos hacia el capital y las políticas de ajuste para controlar la inflación. La experiencia de la zozobra económica se sumaría al bagaje de la transmisión generacional de ser argentino/a en un país de conflicto permanente.

“La hiper”

La reconfirmación no tardaría en llegar con “la hiper” de 1989. La expresión sugiere una cercanía con el término que es todo un dato cultural. “La hiper” se extendió desde comienzos de 1989 hasta 1990, cuando hacía más de un año que gobernaba Carlos Menem. Pero es “la hiper de Alfonsín”. Efectivamente, “la hiper” aceleró el final del primer gobierno posdictatorial. Como se dijo entonces, era un “golpe de mercado”. La frase inscribía la historia argentina reciente en la novedad del 89: si la democracia podía sobrevivir a las Fuerzas Armadas su fragilidad se rendía ante los mercados.

Hacia fines de la década, el deterioro económico y político del gobierno alfonsinista había destruido las esperanzas en un renacer democrático. Para 1988, la falta de crecimiento, la dependencia del ingreso de divisas para el pago de la deuda externa y la inflación sostenida, llevaron al gobierno a probar el “Plan Primavera”. Se buscaba bajar la inflación a través de un enfriamiento de la economía con altas

tasas de interés, precios acordados, e ingresos de divisas por exportaciones para pagar la deuda externa. Los apoyos internos y externos se evaporaron cuando el gobierno no satisfizo las expectativas de ganancias y las promesas de achicamiento del gasto estatal y de privatizaciones. En medio de una “corrida hacia el dólar” de los grandes grupos económicos, comenzaron a agotarse las divisas del Banco Central, el dólar aumentó, el austral se devaluó vertiginosamente y el FMI retiró el crédito otorgado. Las variables económicas se descontrolaron a comienzos de 1989 con la liberación del tipo de cambio, la pérdida de divisas y una tasa de interés del 125% mensual. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6 % mensual pasó al 196,6% en junio. El saldo anual sería 4.923% para 1989 y 1.343% para 1990.

“La hiper” dejó un nuevo actor social en escena: los pobres. La nueva realidad social que se instaló, como fantasmagoría temerosa de gobiernos, comerciantes y clases medias hasta el presente, fue la visibilidad de la protesta social expresada en los saqueos. Pero “la hiper” generó, sobre todo, las condiciones sociales para la aceptación de las reformas estructurales que impuso el menemismo en los 90, y que ya habían sido intentadas por Alfonsín. Se entendió a “la hiper” como el resultado y el costo de un Estado populista sobredimensionado que el país cargaba desde los años 40. Así, la “reforma del Estado” aparecía como una *necesidad* del nuevo período neoliberal que se abrió en los años siguientes.

“Que se vayan todos”

Sólo doce años después llegaría “el 2001”, una nueva y radical autoconfir-

mación de la crisis permanente, anunciando de modo profundo y duradero crisis económica y crisis política. La memoria está tan fresca que sobran las evocaciones. En ese 2001, poco más de un siglo después de 1890, la apoteosis confirmatoria quedaba sintetizada en la expresión emblemática “Que se vayan todos”. Esta vez, sin embargo, ya no había espacio para las imágenes opuestas: el país del progreso y la crisis ya no podían convivir. En “el 2001” la memoria de las crisis acumuladas, la impugnación global y la incertidumbre extrema solo dejaron lugar para el sentimiento de “crisis terminal”. Pero “el 2001” reactualizó un dato antiguo: la capacidad de movilización social. Esa explosión de energías puso en jaque la escena política, moderando, aunque fuera transitoriamente, el sentimiento de descenso a los infiernos.

Estos fantasmas hoy se reactivan, revolviendo capas memoriales que se acumulan unas sobre otras. En ellos es difícil encontrar restos de aquel imaginario de país próspero. En cambio, la fatalidad parece enhebrar mejor nuestras imágenes nacionales, casi como una marca identitaria. ■

*Docente e investigadora del IDAES-UNSAM y del Conicet. Especialista en historia argentina reciente y autora de diversos trabajos sobre dictadura y represión, entre otros: *Un enemigo para la Nación* (2012) y *El final del silencio* (2018).

**Docente e investigadora del IDAES-UNSAM y del Conicet. Se especializa en temas de historia cultural y social argentina. Su libro más reciente es *La era de la juventud: cultura, política y sexualidad desde Perón hasta Videla* (2017).

© UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

The graphic is split into two vertical panels. The left panel shows Roberto Caballero, a man with grey hair wearing a light blue shirt and headphones, smiling and speaking into a professional microphone. The right panel shows Daniel Tognetti, a man with dark hair and a beard wearing a black t-shirt and headphones, looking intently at the camera while speaking into a microphone. The background of both panels is a blurred radio studio with colorful lettering.

R O B E R T O
CABALLERO
6 a 9hs

D A N I E L
TOGNETTI
9 a 12hs

DEL PLATA
AÑO 1928. SIN TODOS

amdelplata.com



Pizarras en el distrito financiero de Buenos Aires, 27-9-18 (Eitan Abramovich/AFP)

Después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, las sucesivas devaluaciones del peso y los ciclos de alta inflación hicieron del dólar una presencia constante en la vida argentina, convirtiéndose para sectores cada vez más amplios en un modo de quedar a salvo de las vicisitudes del Estado y de las recurrentes crisis.

La preferencia nacional por el dólar

Ese oscuro objeto de desvelo de los argentinos

por Mariana Luzzi* y Ariel Wilkis**

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018. Después de una serie de jornadas calientes, y tras el breve mensaje al país con el que se esperaba que el presidente Macri llevara tranquilidad a “los mercados”, el dólar supera los 40 pesos. Los noticieros de todos los canales de televisión envían sus equipos de exteriores a la City. Camarógrafos, movileros, reporteros gráficos hacen guardia frente a las casas de cambio de la calle San Martín. Los teleobjetivos apuntan a las vidrieras, el foco en las pizarras. Un extranjero recién llegado, poco informado sobre la actualidad del país, podría imaginar que las cámaras esperan pacientes la salida de algún personaje famoso. Pero la figura del día no es una persona, sino un número (o dos): ¿a cuánto cierra el dólar?

Buenos Aires, 11 de enero de 2002. Una multitud hace cola delante de una de las casas de cambio emblemáticas de la City, en el primer día de operación del mercado cambiario desde el abandono de la convertibilidad. Uno de los diarios más antiguos del país propone a sus lectores un curioso ejercicio de memoria: la foto del día se publica acompañada de otra,

casi idéntica, tomada en la misma esquina pero en abril de 1989, en tiempos del austral y la hiperinflación.

Buenos Aires, 12 de enero de 1959. Tras el anuncio de una fuerte devaluación por parte del gobierno de Arturo Frondizi, reabre el mercado de cambios. Un nutrido público formado por clientes y curiosos por igual, ocupa toda la calle San Martín, a la altura de una conocida casa de cambio. Al día siguiente, la imagen ostenta un lugar destacado en la edición de los principales matutinos porteños.

Como lo muestran estas escenas, el dólar forma parte desde hace décadas de la vida económica, social y política de Argentina. Y no lo hace solo como moneda en la que progresivamente se fueron determinando y negociando precios y transacciones (al menos algunos), sino también –y sobre todo– como tema de preocupación y conversación pública. En otras palabras, si es cierto que (para retomar el mítico adagio atribuido a Perón) muchos argentinos nunca han visto un dólar, también lo es que casi todos lo reconocen en su importancia: como algo valioso, como un hecho al que

se le debe prestar atención, como un número que nos dice algo más allá de nuestras posibilidades concretas de comprar o vender un dólar alguna vez.

Los noticieros son un buen indicador de esa centralidad del dólar como número clave. Desde los años 80, el informativo diario de televisión culmina brindando un conjunto de informaciones relevantes para la vida de los televidentes: el pronóstico del tiempo para el día siguiente, el estado del tránsito y la cotización del dólar, que puede según las épocas venir acompañada por la de otras monedas (como el euro), por los índices bursátiles o por otros números relevantes para evaluar la economía (como el índice de Riesgo País que se hiciera célebre en 2001). ¿Qué es lo que hace entonces que el dólar sea objeto de tantos desvelos en Argentina? ¿Y cómo llegó a convertirse en eso?

Historia del dólar

Esta presencia de la moneda norteamericana en la vida social argentina es el resultado de un largo proceso de “popularización”. Este término refiere a dos cosas diferentes, aunque relacionadas entre sí. Por un lado, sabemos que a partir de los años 60 la información sobre el dólar dejó pro-

gresivamente de ser un asunto vinculado únicamente a los expertos del mercado financiero o del comercio exterior, para convertirse en un tema de relevancia pública y política para sectores cada vez más amplios de la sociedad argentina. Por otro, como resulta muy fácil advertir hoy, el dólar fue convirtiéndose en una moneda de uso regular para actores cada vez más diversos. La “preferencia de los argentinos por el dólar” se fue sedimentando entonces en un proceso de larga duración en el que pueden reconocerse distintas etapas.

La primera de ellas se ubica entre fines de los 50 y principios de los años 70, un período signado por una fuerte inestabilidad política y económica que se manifestaba, entre otras cosas, en una serie de devaluaciones periódicas de la moneda nacional. Desde mediados de la década de 1970 hasta fines de los 80 –el período de alta inflación– la popularización del dólar se expande y profundiza: una proporción creciente de distintos sectores sociales lo incorporan como parte de sus repertorios financieros. Al mismo tiempo, una porción de los mercados domésticos (entre ellos el inmobiliario) pasa a utilizar el dólar como unidad de referencia y/o medio de cambio. La hiperinflación de 1989 señala, sin duda, una inflexión en ese proceso; en ese año, que es también el del primer recambio presidencial tras la vuelta de la democracia, el dólar captura toda la atención pública y la fijación de precios y la realización de pagos en esa moneda alcanzan a los servicios más cotidianos. Tras esa experiencia de crisis radical, que tiene en la profundización del bimonetarismo una de sus principales expresiones, no llama la atención que la convertibilidad (1991-2001) haya sido planteada –tal como nos recuerdan los análisis de Alexander Roig– como un intento de legalización de prácticas que ya estaban extendidas en la economía (pagar, ahorrar, invertir en dólares). En efecto, los diez años de paridad cambiaria fueron también los de cierto disciplinamiento de esa popularización que venía del pasado, de la mano de una profunda transformación del sistema financiero, cuyas consecuencias quedaron al desnudo en la crisis de 2001.

Esa crisis, y el nuevo ciclo político que se inicia en 2003, no va a significar el fin de ese largo proceso de integración de la moneda norteamericana en los repertorios financieros de los argentinos, pero sí va a introducir algunas novedades en esa historia de la larga duración. En primer lugar, es preciso señalar que la crisis de 2001-2002 es el primer momento en que actores movilizadas de manera sostenida (como los ahorristas o los deudores hipotecarios) articulan demandas específicas en relación con la moneda norteamericana, constituyéndose en un claro emergente de esa historia de popularización del dólar. En esa línea, no resulta desatinado ubicar a los reclamos de acceso al mercado cambiario registrados entre 2011 y 2015 como expresión de ese mismo proceso. Así, una de las grandes novedades del período es que la popularización del dólar se anuda con la articulación de demandas formuladas en una lógica de derechos, de una manera inédita hasta entonces, y que al mismo tiempo va a tener una significativa gravitación en el desenlace político de las elecciones de 2015 que llevó a Macri a la Presidencia. La otra novedad es que entre 2011 y 2015 esa popularización del dólar va a ser puesta por primera vez en discusión desde el Estado, y con un eco notable en el debate público.

La hipótesis política

Tomamos distancia aquí tanto de las interpretaciones instrumentales que destacan que la opción del dólar por parte de amplios sectores de la sociedad obedece a

una decisión racional –en contextos de inflación, por ejemplo, se dice que es una opción racional “ir hacia el dólar” como modo de “proteger” el valor de los ingresos–, como de aquellas culturalistas que afirman que en Argentina se instaló un rasgo cuasi irracional, cultural y no económico. Ambas miradas compiten entre sí desde hace tiempo y reaparecen en determinadas coyunturas, pero sin aportar ninguna novedad para dar cuenta de la persistencia del dólar en los repertorios financieros de las personas y su rol en la sociedad en un sentido más amplio. Parte de esa dificultad se deriva del modo mismo en que ambas visiones definen el problema que buscan interpretar: más allá de sus diferencias, en los dos casos la “preferencia por el dólar” es concebida como un asunto exclusivamente de transacciones económicas.

A lo largo de las coyunturas críticas del país, innumerables funcionarios, periodistas y expertos intentaron sacar al dólar del centro de los debates argumentando que, en definitiva, se trataba de algo que sólo incumbía a una minoría de argentinos que podían comprarlo (o venderlo). Para ellos aplica la famosa e incierta frase del General ya mencionada. Ahora bien, si la moneda norteamericana está en el *prime time* televisivo y su cotización se difunde a diario es, precisamente, porque interesa a muchos más que aquellos pocos que efectivamente caminan las calles de la City. Y esto es así porque en el contexto argentino el dólar no es solamente una moneda “fuerte” en comparación con la debilidad de nuestro peso, sino además, y sobre todo, un artefacto de interpretación: los actores políticos, pero también el gran público, encuentran en su cotización un indicador

para evaluar la performance del gobierno y para estimar su futuro electoral.

Si tuviéramos entonces que develar la singularidad argentina habría que buscarla en este proceso de largo plazo histórico que le dio una especificidad social y política al dólar y, por extensión, al mercado cambiario. En no pocas coyunturas críticas, como la que experimentamos actualmente, el mercado cambiario ocupa el centro de la escena política. Las rela-

De manera despiadada para el actual gobierno, la preferencia de los argentinos por el dólar se muestra pos-ideológica.

ciones y apuestas políticas son mediadas por las cotizaciones del dólar, al tiempo que las relaciones y apuestas en el mercado cambiario están atravesadas por las expectativas políticas.

Así, frente al insistente interrogante sobre la “preferencia de los argentinos por el dólar” y ante nuestra incomodidad con las respuestas disponibles, la hipótesis política sugiere pensar menos en clave de un acto negativo o desviado (es un “refugio” para la opción instrumental o es una “obsesión” o un “vicio” para la opción culturalista) y explorar más cuáles son las prácticas

y las representaciones que produce la relación política con el dólar.

El aprendizaje de un repertorio financiero basado en la articulación de distintas monedas (en nuestro caso, el peso y el dólar) supone poder hacer cuentas, pagar y ahorrar, pero también imaginar y proyectar, en varias unidades a la vez. Desplegada al calor de situaciones críticas, esta socialización, que para el observador externo es muchas veces sorprendente, otorga a las personas reglas de acción que les permiten moverse en contextos inestables, adaptarse a circunstancias cambiantes, e incluso obtener ganancias nada despreciables en ellas. Todo este entrenamiento acumulado a lo largo del tiempo constituye en sí mismo un gran bagaje de conocimientos y prácticas; utilizado en coyunturas variables (ayer el “cepo”, hoy la maxi-devaluación del macrismo) es una brújula que orienta bastante bien como para renunciar a ella. Esencialmente, saber cómo moverse en un contexto de pluralidad monetaria supone ganar autonomía: las reglas aprendidas permiten ampliar los márgenes de acción frente al Estado y al sistema financiero, vincularse y, al mismo tiempo, escaparse de ellos.

La coyuntura actual pone patas para arriba la narrativa que el macrismo le propuso a la sociedad respecto del dólar. Desde la campaña electoral, Cambiemos buscó interpelar a quienes poseían (o querían poseer) la moneda estadounidense como portadores de derechos inalienables, asegurando medidas que permitiesen volver el mercado cambiario a lo que se consideraba su funcionamiento “normal” (es decir, no regulado por el Estado). En este punto, también (1) el gobierno se mostró heredero

de la crisis del 2001, pero de la marca que esta coyuntura le imprimió a la popularización del dólar. A partir del fin de la convertibilidad, una parte de la sociedad definió su relación con la divisa como un derecho fundamental. Cambiemos reconoció esta nueva etapa de la popularización del dólar y sacó ventaja electoral de ella. Pero una vez en el gobierno, confió en que bastaba reconocer la compra de moneda extranjera como un derecho para que su electorado no lo traicionara en el mercado cambiario. La realidad de los últimos meses mostró otra cosa. De manera despiadada para el actual gobierno, la preferencia de los argentinos por el dólar se muestra pos-ideológica. La autonomía política aprendida a través de los usos de la moneda norteamericana no reconoce diferencias entre posicionamientos políticos, ni respeta alianzas estratégicas. Ella permite aprovechar la ubicuidad que el peso nunca podría garantizar: colocarse fuera del alcance del Estado y de sus quebrantos. ■

1. Son varios los analistas –José Natanson, Gabriel Vommaro– que insisten en la estrecha vinculación entre las consecuencias políticas de la crisis del 2001 y la conformación de un espacio político como el PRO, primero, y Cambiemos, después.

*Dra. en Sociología (EHESS, París), investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

**Dr. en Sociología (EHESS, París y UBA), investigador del CONICET, profesor de la UNSAM y decano del IDAES.

© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Este texto presenta algunos avances de un libro que será publicado en 2019 por la editorial Crítica del grupo Planeta. Algunos de los argumentos que presentamos aquí, junto con otros, se amplían en la entrevista publicada recientemente en el número 384 de la *Revista Coyuntura y Desarrollo*, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Revista de Libros

REVIEW.

Es una publicación de cultura, literatura y política que ofrece una selección de los mejores textos de **The New York Review of Books** junto con artículos de prestigiosos escritores y académicos argentinos y latinoamericanos

#17

MARGARET ATWOOD
EL CUENTO DE LA CRIADA EN LA ERA TRUMP

ARIEL DORFMAN
CHILE: POR FIN LA MEMORIA

CHANTAL MOUFFE
POR UN POPULISMO DE IZQUIERDA

FERNANDA GARCÍA LAO
MACHISMO Y LITERATURA

HINDE POMERANIEC
SARLO Y LOS MEDIÁTICOS

SUPLEMENTO UNSAM
¿QUÉ HACER CON MARX?

Suscripciones en www.rdelibros.com

ci Capital intelectual

¡YA SALIÓ!



EN VENTA
EN KIOSCOS

En Argentina los gobiernos impulsores de una distribución más progresiva del ingreso tendieron a aumentar y homogeneizar salarios sin reducir lo suficiente la brecha de productividad entre las distintas actividades. Los gobiernos neoliberales amplían esa brecha, y tienden a reducir el nivel de bienestar al de las áreas de baja productividad.

Bajar salarios o hacer política industrial

El modelo productivo en cuestión

por Martín Abeles*

¿Quién hubiera previsto, a treinta y cinco años de la recuperación de la democracia, que el debate sobre el desarrollo argentino seguiría atravesado por la situación de *empate hegemónico* que, según la definición clásica de Juan Carlos Portantiero, había caracterizado la dinámica social y política del país en los veinte años anteriores al golpe militar de 1976? La idea de *empate hegemónico* alude a una situación en la que dos fuerzas sociales antagónicas tienen la capacidad de obstaculizar el programa económico y el proyecto estatal de la otra, pero no la suficiente fuerza política como para imponerse de manera integral y asumir la conducción del país (en el sentido gramsciano del término). Si bien las circunstancias históricas cambiaron drásticamente desde la década de 1970 –hoy tendría más sentido hablar de *vacancia hegemónica*, otro concepto de Portantiero–, aquella idea de que existe cierta traba producto de una disputa irresuelta entre un modelo nacional-desarrollista y otro liberal-conservador, sigue siendo útil para analizar los dilemas del capitalismo argentino, incluidas sus crisis cambiarias.

Estructura, productividad y salarios

La heterogeneidad de la estructura productiva característica de países en desarrollo como Argentina se relaciona con la existencia y perdurabilidad de grandes diferencias de productividad entre las distintas actividades económicas. Esas diferencias suelen calcularse estimando las brechas de productividad que tiene cada rama de actividad en un país en desarrollo (por ejemplo, la industria automotriz) o cada segmento empresario (por ejemplo, pequeñas empresas) respecto del mismo sector o tipo de empresa en un país desarrollado (véase gráfico de página 17).

En América Latina esas brechas resultan menores en los sectores de baja intensidad tecnológica (ligados, en general, a la explotación de recursos naturales), y suelen ser más elevadas en las actividades donde predominan las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, mientras la productividad de una pequeña empresa alemana o francesa se ubica entre el 70% y 75% de la productividad de una empresa grande en su país, la productividad de una pequeña empresa argentina no llega al 40% de la de una grande.

La supervivencia de las empresas (sean pequeñas, medianas o, incluso, grandes) que tienen importantes brechas de productividad, en particular las que se des-



Plataforma de perforación de YPF en Neuquén (Juliana Castila/Reuters)

empeñan en actividades expuestas a la competencia internacional, depende en el corto plazo de la eficacia de distintos mecanismos de intervención estatal: desde los clásicos instrumentos de protección arancelaria o paraarancelaria hasta el subsidio a la utilización de algún insumo clave, como puede ser la energía.

Otro modo de compensar esas brechas de productividad –que por obvios motivos se plantea menos abiertamente– es la reducción de los salarios reales. En teoría, como se infiere de la industrialización asiática, toda actividad puede remunerar a su fuerza de trabajo con un salario lo suficientemente bajo como para compensar su déficit de productividad y enfrentar la competencia internacional. Existen dos mane-

ras de alcanzar ese resultado (siempre en el plano hipotético): reduciendo los salarios de la economía de manera generalizada (es decir, incluso en los sectores que no tienen importantes brechas de productividad), o reduciendo sólo los salarios de los trabajadores de las actividades más rezagadas.

La disyuntiva, así planteada, resulta familiar. La primera alternativa (reducción generalizada de salarios) puede alcanzarse, si se dan determinadas condiciones (debilidad sindical, elevado desempleo, etc.), a través de una devaluación de la moneda local. La segunda (reducción selectiva de salarios), mediante una mayor flexibilización laboral que debilite la capacidad de negociación de los sindicatos, en especial en las actividades menos com-

petitivas. Para sus impulsores, esta segunda alternativa viene en general de la mano de la retracción de otras instituciones asociadas a los Estados de Bienestar que, indirectamente (como es el caso del salario mínimo), ponen un límite inferior al denominado “salario de reserva” de la economía, y pueden dificultar la reducción del salario relativo de las actividades en que la brecha de productividad es mayor.

Los tiempos comprometidos en una u otra opción son muy distintos y dependen de la dinámica política y social. Como sabe cualquier argentino o argentina de a pie, la primera opción (reducción salarial vía “devaluación”) puede lograrse de manera casi-instantánea. Aunque, como también sabemos, la dinámica posterior a una devaluación nominal, dependiendo del nivel de actividad económica o la capacidad de resistencia salarial, entre otros factores, puede forzar a sucesivas rondas devaluatorias hasta alcanzar la caída “necesaria” del salario real. No siempre el ajuste se logra “de una”. La segunda opción (reducción salarial selectiva vía flexibilización laboral) puede llevar mucho más tiempo, en especial en países con densidad sindical como Argentina. Estas opciones no son, por supuesto, excluyentes.

En cualquier caso, cabe preguntarse: ¿cuál es la magnitud de la devaluación requerida para cerrar las brechas de productividad mencionadas? De poder instrumentarse semejante devaluación, que sería muy significativa, ¿cómo se procesaría socialmente (en lo fiscal, distributivo, productivo) la rentabilidad extraordinaria que una modificación tan radical en los precios relativos reportaría a las actividades que no tienen esas brechas de productividad (por ejemplo, las actividades extractivas)? Y, lo más importante desde una perspectiva dinámica, ¿cómo sigue la película, a mediano y largo plazo, si las brechas de productividad existentes no se cierran, o peor, se siguen ampliando? Ante un horizonte como ese, más real que hipotético, ¿cuál es la dinámica salarial a la que pueden aspirar los trabajadores?

Existen factores sociales, políticos y simbólicos que contribuyen a explicar la elevada desigualdad en América Latina (1). En clave estructuralista, y sin desconocer el peso de esos factores, es la persistencia de una fuerte heterogeneidad estructural lo que explica desde “la base” la persistencia de la desigualdad latinoamericana.

El caso argentino

Argentina no representa una excepción en este cuadro general, aunque tiene sus particularidades. La heterogeneidad de su aparato productivo, que ya era tema de preocupación a mediados de la década de 1970 (el concepto de “estructura productiva desequilibrada” de Marcelo Diamand es de esa época) se profundizó en el llamado cuarto de siglo neoliberal (1976-2001). En el marco de una creciente apertura comercial y del desmantelamiento de los principales resortes de la política industrial y tecnológica, las estrategias de supervivencia de las empresas potenciaron las heterogeneidades existentes, sobre todo en la década de 1990. Algunas de las actividades más maduras en términos tecnológicos lograron reducir sus brechas de productividad, pero la mayoría tendió a ensancharlas, dando lugar a una disparidad creciente en el entramado productivo local. Hasta 2002, esa mayor heterogeneidad se produjo en simultáneo con un aumento de la dispersión salarial entre las distintas actividades.

En la posconvertibilidad (2002-2015), la dispersión sectorial de la productividad mostró cierta tendencia a la reducción, cuanto menos hasta 2008, aunque sin llegar a revertir las condiciones iniciales de

elevada heterogeneidad (2). La persistencia o profundización de la heterogeneidad estructural a partir de ese año entraría en contradicción con la tendencia a la reducción de la dispersión salarial, poniendo de manifiesto los problemas de competitividad inherentes a todo proceso de redistribución progresiva cuando existen profundos déficits de productividad en un amplio espectro de actividades.

Durante la década de 1990 la ampliación de la dispersión de las brechas de productividad de las distintas actividades coincidió con la ampliación de la dispersión salarial. El rezago en los salarios –o la caída en la informalidad– de los trabajadores de los sectores de menor productividad operó, en la práctica, como “amortiguador” de la creciente presión competitiva externa, aunque no evitó el cierre de innumerables empresas. En la posconvertibilidad, la discrepancia entre estas dos trayectorias –la dispersión de las brechas de productividad y la dispersión salarial– tuvo el efecto contrario: potenció la presión competitiva que enfrentaban las actividades fabriles que no lograron cerrar sus brechas de productividad. El aumento de la incidencia de los subsidios al uso industrial y comercial de la energía a lo largo de la posconvertibilidad, así como la proliferación de medidas de protección para arancelaria hacia el final del período, pueden entenderse como respuestas a esta tensión irresuelta entre una institucionalidad laboral que tendía a la homogeneidad y una estructura productiva que tendía a la heterogeneidad.

La convergencia de los ingresos laborales constituyó uno de los principales determinantes de la mejora en la distribución personal del ingreso (mejora del Coeficiente de Gini) que tuvo lugar en la posconvertibilidad. Pero en ausencia de una mejora sostenida y simultánea en la productividad de las ramas relativamente más rezagadas, un proceso de igualación de los ingresos laborales como el descrito –que supuso, además, un alza proporcionalmente mayor en los estratos de ingresos más bajos– no podía ser sobrellevado sin algún mecanismo de subsidio o protección. En las experiencias exitosas de industrialización tardía ese tipo de dinámica fue acompañada por instrumentos de apoyo al aumento de la productividad, de tal manera que los distintos mecanismos de subsidio o protección tendieran a perder significación en el tiempo. No fue así, salvo algunas excepciones de interés –pero de baja gravitación macroeconómica– en la experiencia argentina reciente (por ejemplo, en la industria del software o la biofarmacéutica).

Las crisis cambiarías como la que atraviesa este año nuestro país están relacionadas de manera directa con este tipo de tensiones estructurales. La agudización del déficit externo que comienza a manifestarse con gravedad a partir de 2011, cuando la suma del déficit de cuenta corriente (la cuen-

ta corriente es el saldo entre las divisas que entran y salen del país por concepto exportaciones, importaciones y pago neto de intereses y dividendos al exterior) y la salida neta de capitales por atesoramiento llegó a 4,5% del PIB, no sólo ponía de manifiesto el carácter bimonetario de la economía argentina, o la creciente financierización de los sectores de ingresos altos; también revelaba los problemas de competitividad derivados de la mencionada tensión entre una institucionalidad laboral que propiciaba una mayor homogeneidad salarial y una estructura productiva que no lograba revertir su profunda heterogeneidad.

Lamentablemente, esas crisis suelen interpretarse como la consecuencia de un exceso relacionado con determinadas políticas sociales o ciertas reivindicaciones distributivas de los sectores subalternos, más que como un defecto vinculado con la debilidad del entramado productivo, o la ausencia o insuficiencia de políticas industriales y tecnológicas tendientes a revertir esas debilidades. Tienden, además, a revalidar la visión ortodoxa que alienta una especialización productiva basada en la explotación de los recursos naturales y procura una institucionalidad laboral y un régimen de bienestar que redunden en un nivel y dispersión salariales más acordes con las elevadas brechas de productividad existentes.

La disyuntiva entre lo que, para simplificar, hemos llamado un modelo nacional-desarrollista y otro liberal-conservador, no es otra cosa que el vaivén histórico entre un programa político-económico de sesgo inclusivo (redistributivo) que no logra un *cierre productivo* más consistente mediante la reducción de las brechas de productividad, y un programa político-económico basado en la explotación de los recursos naturales que no consigue un *cierre distributivo* más acorde mediante la flexibilización del mercado de trabajo y la redefinición del régimen de bienestar. En el primer caso, el desafío histórico consistiría en transformar una estructura productiva “de segunda” y hacerla converger con un régimen de bienestar, supongamos, “de primera”. En el segundo, el desafío pasa por adecuar ese régimen de bienestar “de primera” a una estructura productiva “de segunda”. Nivelar para arriba o nivelar para abajo, esa sería la cuestión.

Estos desafíos suponen distintas temporalidades. Mientras el primero, en el mejor de los casos, podría ser el fruto del esfuerzo de una o dos generaciones (como mínimo), la redistribución regresiva del ingreso podría concretarse en un lapso incomparablemente más corto si las circunstancias históricas así lo permitieran.

Habida cuenta de esta dimensión temporal, la cuestión central en una propuesta de cambio estructural de signo progresivo –del tipo pretendido, supongamos, por la agenda nacional-desarrollista– no remite a la mayor o menor convicción acerca de

la centralidad de las políticas industriales y tecnológicas, sino a la existencia o no de un actor o coalición social capaz de impulsar un proyecto estatal de esa naturaleza y de sostenerlo en el tiempo.

¿Quién habla de productividad?

Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dijo: “La productividad no es todo, pero en el largo plazo, es casi todo”. Tanto el estructuralismo latinoamericano como el escandinavo (menos conocido) siempre pusieron el tema de la productividad y de la complejidad de su dinámica sectorial en el centro de la discusión sobre el desarrollo. En las últimas décadas, los actores capaces de impulsar una agenda de cambio estructural progresivo no pudieron, o no quisieron, ubicar la dinámica estructural de la productividad en el centro de la escena económico-social. Lo cual hubiera implicado resignificar el lugar de las políticas industriales y tecnológicas en el debate político. Sin duda, el tema fue cobrando mayor notoriedad en los últimos lustros, no sólo en Argentina sino en toda América Latina (lo que no es poco en una región en donde se llegó a decir que “la mejor política industrial es no tener política industrial”), pero aún permanece lejos de la centralidad que históricamente supo darle el pensamiento económico heterodoxo en la región. Esta ausencia no involucra sólo a una parte más o menos significativa del empresariado lo-

cal, sino también a un sector importante de los sindicatos, y ha redundado en que el tema de la baja productividad de buena parte del aparato productivo local, cuando aparece en la esfera pública, sea monopolizado por los sectores más conservadores, en general, como anatema del enfoque de derechos. Que la crisis externa que atraviesa hoy Argentina sea más “financiera” que “real” –que, más allá de sus causas y manifestaciones inmediatas, no suscite una discusión más profunda sobre el modelo productivo– tiene en parte que ver con esta trama de ausencias y presencias. ■

1. La CEPAL en los últimos años se ha referido en este sentido a la noción de “cultura del privilegio”. Véase CEPAL, *La ineficiencia de la desigualdad*, 2018, Santiago.
2. Fernando Porta, Juan Santarcangelo y Daniel Scheingart (2014), “Excedente y desarrollo industrial en Argentina: Situación y desafíos”, Documento de Trabajo N° 59, CEFID-AR, Buenos Aires.

*Economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor por la New School de Nueva York. Director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos Aires y director y docente de la Maestría en Desarrollo Económico del Instituto de Altos Estudios (IDAES-UNSAM).

Este artículo retoma algunas de las conclusiones de un trabajo escrito con Anahí Amar, “La industria manufacturera argentina y su encrucijada”, publicado en Martín Abeles, Mario Cimoli, Pablo Lavarello (eds.), *Manufactura y cambio estructural: apuntes para pensar la política industrial en la Argentina*, Libros de la CEPAL, N° 149, Santiago, CEPAL, 2017.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

ANTE UN NUEVO FRACASO

El equipo que no fue y el eterno retorno

Sin la coherencia con que se promocionó, el gobierno de Macri recae en la inflación y la corrida al dólar, que siempre han marcado los momentos críticos del pasado. Mientras, la oposición se concentra en impugnar a los CEO del gabinete por sus conflictos de intereses.

por Mariana Heredia*

Corría el año 1984 y el gobierno de Alfonsín se rendía poco a poco a la evidencia de que la inflación se convertiría inexorablemente en una prioridad de su agenda de gobierno. Aunque había sido minimizado durante la campaña y menospreciado en las aspiraciones presidenciales, el aumento de los precios había escalado de 300% en 1983 hasta arañar un 700% al cumplir el primer año de mandato. Los medios sentaban en el banquillo de los acusados al viejo militante radical que conducía el Ministerio de Economía. Para algunos, cumpliendo con las promesas de la plataforma partidaria, Grinspun había puesto en marcha un programa anacrónico, inspirado en las estrategias de la segunda posguerra, ante una realidad que había cambiado profundamente. Para otros, el ministro no solo adolecía de desactualización doctrinaria: a su retórica inflamada le faltaba pi-

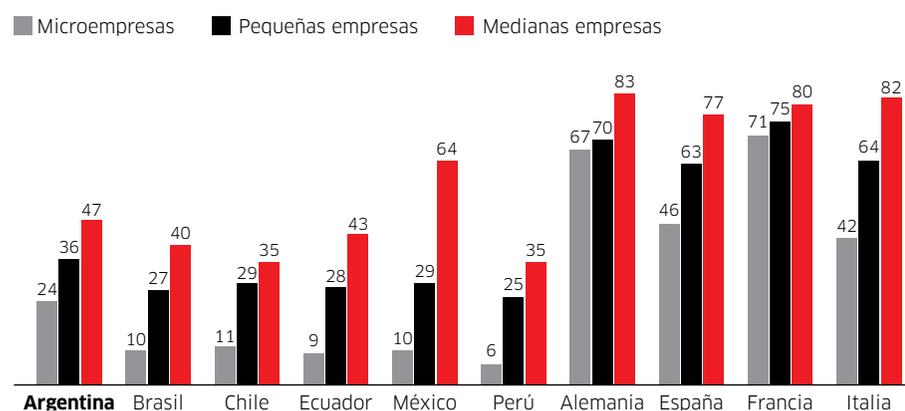
cardía y capacidad para estar a la altura de las circunstancias.

Desde entonces la desconfianza en la moneda sería uno de los grandes desafíos de la democracia, y los ministros de Economía concentrarían la ansiedad pública en momentos críticos. El gobierno de Mauricio Macri no es, en este sentido, una excepción, aunque en su inicio presentaba condimentos particulares. Por un lado, la situación económica se percibía mucho menos dramática que en elecciones presidenciales anteriores, y el presidente logró imponerse en el ballottage con la promesa de emprender correcciones gradualistas. Por otro lado, la composición de su coalición pro-mercado y de su equipo de gobierno –conformado por hombres de negocios y especialistas– parecía augurar una normalización económica más sencilla.

Mucho se habló de la novedad sociológica de la base electoral y dirigen- cial de Cambiemos y del modo →

Productividad relativa respecto a las grandes empresas de los distintos agentes

Años 2011-2015, en porcentaje



Fuente: CEPAL



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Luis Caputo en una conferencia de prensa, 4-5-18 (Marcos Brindicci/Reuters)

→ en que podía contribuir al fortalecimiento de la democracia. Se le reconoció su habilidad para contener una federación de partidos menores y ganarle al peronismo. Pero sobre todo se destacó la capacidad del PRO para fundar una nueva fuerza sobre la adhesión y el compromiso de grupos sociales renuentes a la política y a la gestión estatal. Si, como afirmaron historiadores y politólogos, una de las grandes tragedias de la Argentina contemporánea era el desencuentro entre fuerzas sociales y opciones políticas, valía reflexionar acerca de la capacidad del macrismo para ofrecer al empresariado, la alta gerencia, los técnicos de ONG y al electorado anti-peronista, una opción electoral que los sedujera y comprometiera con los desafíos de gobierno.

Desde un ángulo más crítico, también se subrayó la originalidad de su gabinete y los riesgos que entrañaba el ingreso masivo de dirigentes de empresa y representantes corporativos a la administración del Estado. Devenidos funcionarios, esos hombres de negocio planteaban dudas sobre los conflictos de interés que podían pesar en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Las alertas abarcaban desde la preocupación por la derechización que asumía la orientación gubernamental, hasta la amenaza de cooptación de decisiones y de beneficios extraordinarios para los sectores que acompañaban al gobierno.

Tal vez la composición sociológica del electorado y las trayectorias profesionales de los miembros del gabinete llevaron a suponer demasiado rápido la coherencia ideológica y programática del nuevo gobierno. Con los meses se hizo evidente que faltaba un coordinador general ajeno a la figura presidencial que mediara entre las distintas áreas que impactan en la situación monetaria, financiera y productiva del país. Faltaba un programa que armonizara a los distintos especialistas, para jerarquizar y subordinar sus misiones a ciertos objetivos primordiales. Aunque ahora resulte devaluada, queda una lección para la conformación de un verdadero equipo de gobierno. Más que la sumatoria de carteras con saberes técnicos delimitados, la razón de Estado exige una orientación general

(no solo presupuestaria y administrativa) que articule transversalmente las distintas áreas.

Pero aun contando con coherencia, la misma no tenía por qué haber sido un simple derivado de la conformación de la coalición de gobierno. Aprovechando su relación privilegiada con el esta-

En la dialéctica entre inflación, dólar y política antiinflacionaria se sigue jugando el orden económico del país.

blishment, Macri podría haber hecho la “gran Menem 1989”. A la manera de muchos partidos de centroizquierda europeos o populistas latinoamericanos, el presidente podría haber tensado y hasta contradicho los intereses de sus bases de sustentación en pos de un proyecto que lograra solidarizarlos con un programa de mediano plazo. Hay bibliotecas enteras sobre el modo en que la distancia entre el gobierno y sus apoyos sociopolíticos abre oportunidades históricas. Del mismo modo que a Menem le resultó más fácil de lo que le hubiera resultado a un liberal minar las bases de la intervención estatal y del poder sindical, a Macri le hubiera sido más sencillo que a Cristina disciplinar al empresariado alentando un sistema tributario más progresivo, aperturas comerciales y financieras prudentes y compromisos de inversión de largo plazo.

Atrapados en el capitalismo globalizado

A poco de andar, esa oportunidad se dio por perdida, y los desafíos monetarios y financieros volvieron a licuar las aspiraciones más generales del gobierno. La apuesta a la liberalización monetaria y financiera, lejos de comprometer a los tenedores de excedente con un proyecto de mediano plazo, siguió alimentan-

do la fuga de la moneda nacional que ya socavaba la economía kirchnerista, basada en el aliento al consumo. Preocupado por el incentivo a la inversión y el respeto a la libertad del mercado, el gobierno tuvo, no obstante, que desdeirse en distintos planos: la suspensión a regañadientes de la baja a las retenciones o el anuncio de la permanencia del programa precios cuidados son solo dos expresiones de esta capitulación.

Así las cosas, la normalización del capitalismo argentino no se hizo a través del acercamiento a ciertos estándares internacionales (aunque, dicho sea de paso, ¿a qué país podríamos parecernos hoy en día?). Otra vez, más que alinearnos con el mundo, volvemos a repetir lo peor de nuestra historia. Más allá del signo político del gobierno, otra vez el control de la inflación y el dólar se instalaron como una especie de “test experimental” para medir la solidez del orden político en su conjunto. Pero cada vez creemos menos en que esto pueda derivarse de una verdad revelada y de un programa de reforma realista y más de la coyuntura externa, las señales de las autoridades y los humores de los agentes económicos.

Sería deshonesto pensar que el problema del orden económico en Argentina se cifra hoy solo en la composición del equipo de Macri. Es evidente que en 2001 el problema era tanto José Luis Machinea, Ricardo López Murphy, Domingo Cavallo, y sus decisiones, como el hecho de que la convertibilidad se estaba cayendo a pedazos. “Pegarles” a los economistas o los CEO que enfrentan la crisis puede ser un ejercicio reconfortante pero resulta insuficiente. Pensando en las cotizaciones que vendrán, ¿el problema es que Dujovne sea un economista ortodoxo, un hombre de la City, un consultor, o que la orientación del gobierno vuelva a quedar librada al ministro de Economía de turno, al apoyo del FMI y a su capacidad para reconquistar la confianza perdida?

Lejos de cualquier fortaleza y originalidad, el gobierno de Macri vuelve a inscribir al país en tres procesos concomitantes que signan la historia argentina desde 1975: la entronización de la inflación como problema público y político de primer orden, la delegación de

la política antiinflacionaria en manos de expertos y la sucesión de experimentos macroeconómicos de singular osadía. Desde una mirada de mediano plazo, la atención a los desafíos enfrentados por los sucesivos gobiernos permite contar de otro modo la historia de las grandes transformaciones de las últimas décadas. Más que en un consenso en pos de las reformas de mercado o en un enfrentamiento encarnizado entre dos proyectos de país contrapuestos, sigue siendo en la dialéctica entre inflación, dólar y política antiinflacionaria donde se juega el orden económico del país. Nunca se pondrá énfasis suficiente en que las crisis aumentan los beneficios de los sectores dominantes y empeoran las condiciones de vida de los más vulnerables. Pero vale la pena destacar una perversa singularidad argentina: desde hace años, la corrida al dólar lleva a un esquema de distribución de la riqueza que premia a los actores con patrimonios más líquidos y prácticas más oportunistas.

Quizás el progresismo debería enfrascarse menos en la impugnación de los ministros, el develamiento de sus aliados y afluentes ideológicos, y más en sus acciones y en otras iniciativas posibles para redefinir y solucionar el problema que enfrentan. La preocupación por echar luz sobre las ataduras corporativas e ideológicas de los miembros del gabinete puede ser válida como alerta en áreas específicas (la energía o la agroindustria por caso), pero corre el riesgo de encubrir que no estamos frente a un gobierno cohesionado, que libra una batalla ideológica como si estuviéramos en las postrimerías de la Guerra Fría. Los economistas y CEO en el gobierno no creen necesariamente en las virtudes del mercado abierto ni buscan operar sobre la conciencia colectiva en pos de una gran causa. Tampoco son sabios ni científicos que se esfuerzan por convencernos de sus verdades. Tras liberalizar el flujo de capitales y alentar el ingreso de recursos de corto plazo, tanto ellos como nosotros quedamos atrapados dentro del capitalismo globalizado y con un modo de integración financiera que tiene efectos particularmente destructivos sobre las frágiles instituciones económicas argentinas.

“La inflación y la moneda son problemas de derecha”, se oye decir a ciertos economistas. Efectivamente, este abordaje del problema signó el pulso de la democracia argentina y habilitó la adopción de medidas muy impopulares. La cuestión entonces es menos soñar con un tecnócrata pícaro y *aggiornado*, capaz de domar el toro salvaje del pánico, que preguntarse cómo llegamos hasta acá, con qué mecanismos y a qué costos se puede intervenir en el mercado cambiario y financiero si las soluciones que se están ensayando fallan. En otras palabras, ¿cómo puede plantearse con criterio progresista la reconstrucción de la moneda nacional, y en el camino, una integración del país más virtuosa a los mercados comerciales y financieros internacionales? La derecha, evidencias sobran, está vivita y coleando. Sería una pena que quienes pueden hacerle frente se ensañen con las personas en lugar de pensar en cómo desandar el camino que llevó a apagar el incendio con nafta. ■

*Socióloga, investigadora del CONICET con sede en el IDAES, profesora de la UNSAM y la UBA. Autora del libro *Cuando los economistas alcanzaron el poder*, Siglo XXI, 2015.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Carlos Gorriarena, *Par*, 1999 (Fragmento, gentileza Sylvia Vesco)

Dossier

Neoliberalismo
y neofascismo

La conciliación de opuestos transfigurados

La novedad anunciada por los “neos” es la de un liberalismo cada vez menos democrático y un fascismo cada vez menos soberanista que se vuelven cada vez más conciliables. Rasgos de esta fusión están presentes en el gobierno de Cambiemos, y en los microfascismos y las crecientes violencias de la sociedad argentina.

La complementariedad de los opuestos por P. Dardot y C. Laval **20** | **La “bolsonarización” del macrismo** por Pablo Semán **22** | **Vuelco a la derecha, ¿hasta dónde?** por Alejandro Grimson **24** | **Violencias** por José Garriga **26**

Carlos Gorriarena, *Reunión cumbre en el jardín de invierno*, 1978 (Gentileza Sylvia Vesco)

Dossier

Neoliberalismo
y neofascismo

El neoliberalismo se opone al populismo, asimilado a los gobiernos populares en América Latina, al fascismo en Europa. En realidad, neofascistas y neoliberales confluyen en su índole antidemocrática, corrosiva del Estado de Derecho.

Neoliberalismo contra neofascismo, el aparente clivaje europeo

La complementariedad de los opuestos

por Pierre Dardot* y Christian Laval**

El trueno de la elección de Trump para la Presidencia de Estados Unidos en noviembre de 2016, y meses después, el referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017, tuvieron una fuerte repercusión simbólica: impactó en los ánimos el hecho de que Gran Bretaña y Estados Unidos, que fueron tierras de elección del neoliberalismo en los tiempos de Thatcher y de Reagan, parecen darle ahora la espalda mediante una reacción nacionalista. En el pasado, el neoliberalismo fue asociado con frecuencia a la “apertura”, al “progreso”, las “libertades individuales”, el “Estado de Derecho”. Hoy se conjuga con el cierre de fronteras, la erección de “muros”, el culto de la nación y de la soberanía del Estado, la ofensiva abierta contra los derechos humanos, los que parecen po-

ner en peligro la seguridad. ¿Cómo es posible esa metamorfosis y qué significado darle?

Neoliberalismo y fascismo

No conforme con nutrirse con las crisis sociales y económicas que genera, el neoliberalismo se nutre actualmente de las reacciones de hostilidad que suscita. Esta mutación afecta a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan tendencias nacionalistas, autoritarias y xenóforas. Lo esencial es que estos gobiernos no cuestionan en absoluto al neoliberalismo como forma de poder. Por el contrario, reducen los impuestos de los más ricos, disminuyen las ayudas sociales, aceleran las desregulaciones, sobre todo en materia financiera o ecológica, y asumen plenamente el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.

Tenemos que evitar dos errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con “el regreso de Adam Smith”, o peor todavía, con “el fin del Estado”. El neoliberalismo es una forma de gobierno muy activa, que no tiene mucho que ver con el Estado mínimo del liberalismo clásico. Lo novedoso es que la índole fundamentalmente antidemocrática del neoliberalismo se traduce hoy en un cuestionamiento cada vez más abierto y radical de los principios y formas de la democracia liberal misma.

El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos las tenemos que ver con un nuevo “fascismo neoliberal”, o incluso con “un momento neofascista del neoliberalismo”(1). Pero ¿se puede amalgamar en un mismo fenómeno político “el ascenso de las nuevas derechas y la deriva autoritaria de neoliberalismo”? La asimilación es eviden-

temente problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial “el Estado total” tan característico del fascismo y la difusión del modelo del mercado y la empresa en el conjunto de la sociedad? El riesgo reside entonces en “subsumir” fenómenos a la vez complejos y singulares en generalizaciones poco pertinentes, que no pueden sino producir a su vez un desarme político.

Para Henry Giroux, por ejemplo, el “fascismo neoliberal” es “una formación económico-política específica”. Según él, el fascismo se apoya en “pasiones movilizadoras” que se encuentran en el “fascismo neoliberal”: devoción al jefe, hiper nacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por el “débil”, el “inferior”, el “extranjero”, desdén por los derechos y la dignidad de los individuos, violencia para con los opositores, etc. (2). El mismo Paxton admite que “Trump retoma varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” (3). Porque hay grandes diferencias con el fascismo: no hay partido único, no hay prohibición de toda oposición y disidencia, no hay movilización ni regimentación de las masas en organizaciones jerárquicas obligatorias, no hay corporativismo profesional, no hay liturgias de religión laica, no hay un ideal de “ciudadano soldado” totalmente consagrado al Estado total, etc. (4). En este sentido, todo paralelo con los últimos años de la década de 1930 en Estados Unidos es engañoso, a pesar de que Trump haya retomado la consigna “*America first*”, el nombre que le dio Charles Lindbergh a la organización fundada en octubre de 1940 para promover una política aislacionista contra el intervencionismo de Franklin D. Roosevelt. En efecto, no vivimos un “momento polanyano” (5), como cree Robert Kuttner, que se caracterizaría por el hecho de que los poderes fascistas retoman las riendas de los mercados ante los estragos del *laissez faire* (6). En cierto sentido es todo lo contrario, y es mucho más paradójico. Trump se presenta como el campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su modo de conducir su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en que el neoliberalismo segrega desde dentro una forma política original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada.

El nuevo neoliberalismo

Lo que aquí denominamos “nuevo neoliberalismo” tiene de original que instrumenta la crisis de la democracia liberal-social que él mismo provocó canalizando el resentimiento de capas enteras de la población contra esa misma democracia. Esta transformación concierne a todas las formas nacionales de neoliberalismo. El neoliberalismo no es un conservadurismo. Es un paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las estructuras “arcaicas” y las fuerzas “retrógradas” que se resisten a la extensión de la racionalidad capitalista. Una de sus palancas preferidas es utilizar las vías de la “legalidad”, incluso de la constitucionalidad, de manera tal que el marco en el que deben desempeñarse todos los “actores” se vuelva irreversible. El fenómeno, no importa cuáles sean sus variantes nacionales, es general: dentro del marco formal del sistema político representativo se instalan dispositivos antidemocráticos de una eficacia corrosiva temible.

Pero ¿no es exagerado poner todas las formas del neoliberalismo “en la misma bolsa” de un “nuevo neoliberalismo”? Hay tensiones muy fuertes a nivel mundial y a nivel europeo entre lo que es preciso denominar diferentes tipos nacionales de neoliberalismo. Sin duda no cabe asimilar a Trudeau, a Merkel o a Macron con Trump, Erdogan, Orban o Salvini. Unos siguen apegados a una forma de competencia comercial supuestamente “leal”, mientras que Trump decidió cambiar las reglas de la competencia transformándola en guerra comercial al servicio de “la grandeza de Estados Unidos”; unos respetan todavía verbalmente los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad en derechos de los individuos, mientras que a los otros esto los tiene sin cuidado; unos creen tener una actitud “humana” respecto de los migrantes (algunos muy hipócritamente), mientras que los otros no tienen ningún escrúpulo en rechazarlos. De manera que hay que admitir una *diversificación* de mode-

lo neoliberal. Macron se presenta como la fortaleza frente al populismo de extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente, porque Macron y Le Pen, aunque no son idénticos, en realidad son perfectamente *complementarios*. Uno hace de fortaleza mientras la otra se pone el traje de espantajo, lo que le permite al primero presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si hace falta, como en los preparativos de las elecciones europeas, Macron se empeña en enduccionar artificialmente el supuesto clivaje entre partidarios de la “democracia liberal” y partidarios de la “democracia no liberal”, a la manera de Orban, para presentar mejor a la Unión Europea como alineada con la democracia liberal.

El caso Macron

Pero tal vez no se haya percibido lo suficiente el *estilo populista* de Macron, que pudo parecer una mera mascarada por parte de un producto puro de la élite política y financiera francesa. La denuncia del “viejo mundo” de los partidos, el rechazo del “sistema”, la evocación ritual del “pueblo francés”, todo eso era tal vez bastante superficial e incluso grotesco, pero no por eso dejaba de traslucir el uso de un método que precisamente caracteriza al neoliberalismo: la canalización de la furia contra el sistema neoliberal. Pero el macronismo no tenía espacio político para tocar esa música durante mucho tiempo. No tardó en revelarse por lo que era y por lo que hacía. En continuidad con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más declarada o menos vergonzante, asocia con el nombre de Europa la más cruda y cinica violencia económica contra los asalariados, los jubilados, los funcionarios y los destinatarios de asistencia, y la violencia policial más sistemática contra las manifestaciones opositoras, como se vio sobre todo en Notre-Dame-des-Landes, y también contra los migrantes.

No falta la represión. Las manifestaciones sindicales o estudiantiles, aun las más pacíficas, son sistemáticamente reprimidas por una policía superequipada, muy dispuesta a aterrorizar a quienes se manifiestan y a infundir miedo al resto de la población. El caso Macron completa el retrato del nuevo neoliberalismo. Llevando al extremo la identificación del Estado con la empresa privada, hasta el punto de que quiere hacer de Francia una “start-up nation”, no deja de centralizar el poder en sus manos, y llega a promover un cambio constitucional que valide el debilitamiento del Parlamento en nombre de la “eficacia”. En este sentido es manifiesta la diferencia con Sarkozy: mientras éste multiplicaba las declaraciones provocadoras afectando un estilo “descontracturado” en el ejercicio de su función, Macron se propone devolver su brillo y su solemnidad a la función presidencial. Conjugó así un despotismo empresarial con una puesta en vereda de las instituciones de la democracia representativa en beneficio exclusivo del Ejecutivo. Se ha hablado con acierto de “bonapartismo” respecto de él, no solo por el modo en que tomó el poder barriando los partidos de gobierno anteriores, sino también debido a su ostensible desprecio por todos los contra poderes. La novedad que introdujo en esta antigua tradición bonapartista es precisamente una verdadera gobernanza empresarial. El macronismo es un *bonapartismo gerencial*.

El recurso a la ley contra la democracia

Vemos entonces que *la exacerbación del neoliberalismo* conjugó la mayor libertad del capital con los ataques cada vez más profundos contra la democracia liberal-social. ¿Hay que conformarse con retomar el lugar común crítico según el cual “el estado de excepción se ha convertido en regla”? Al argumento de origen schmittiano del “estado de excepción permanente”, que supone una suspensión pura y simple del Estado de Derecho, debemos oponer este hecho: el nuevo gobierno neoliberal se implanta y cristaliza a través de la *legalización* de las medidas de la guerra económica y policial. ¿No fue una de las medidas más emblemáticas de Macron la introducción en octubre de 2017 en la legislación corriente de las medidas “excepcionales” del estado de urgencia instalado después de los atentados de noviembre de 2015?

Como las crisis sociales, económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación establecer las normas cuya validez permanente les per-

mitirá a los gobiernos responder a ellas en todo momento, e incluso prevenirlas. Así es como las crisis y urgencias dieron origen a lo que Harcourt denomina “un nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que hasta ese momento eran medidas de urgencia o respuestas coyunturales de política económica o social (7). Antes que un estado de excepción que funciona oponiendo reglas y excepción, afrontamos una transformación gradual y bastante sutil del Estado de Derecho que integró en su legislación la situación de doble guerra, económica y policial,

El nuevo gobierno neoliberal se implanta mediante la legalización de medidas de guerra económica y policial.

a la que nos condujeron los gobiernos. La doctrina neoliberal ya había elaborado el principio de esa concepción del “Estado de Derecho”. Así Frederik Hayek subordinaba explícitamente el “Estado de Derecho” a la “ley”. En su concepción la “ley” designa no cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de normas de conducta igualmente aplicables a todos, incluso a las personas públicas. Lo que caracteriza exactamente a la ley es la universalidad formal que excluye toda forma de excepción.

En otros términos, se trata de producir no un sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíbe la excepción. Y como la guerra económica y policial no tiene fin y reclama siempre cada vez más medidas coercitivas, la legalización de las medidas de guerra económica y policial no puede sino extenderse más allá de todo límite. El Estado de Derecho no es abolido desde el exterior, es destruido desde el interior con el objetivo de convertirse en un arma de guerra contra las poblaciones. El proyecto de ley de Macron sobre la reforma jubilatoria es ejemplar en ese sentido: de acuerdo con la exigencia de la universalidad formal, su principio es que un euro cotizado da exactamente el mismo derecho a todos, cualquier sea su condición social. En virtud de ese principio, está prohibido tener en cuenta el carácter penoso de las condiciones de trabajo en el cálculo de la jubilación. También en esto salta a la vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras el primero hacía adoptar ley tras ley sin que las siguieran decretos de aplicación, el segundo se preocupa mucho por la aplicación de las leyes. Allí está la diferencia entre “reformular” y “transformar”, tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad exige la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede conformarse con efectos de anuncios sin mañana. La redundancia de la fórmula “nuevo neoliberalismo” (“neo” significa nuevo) no debe entenderse en el sentido de una ruptura con el neoliberalismo, sino en el de un vuelco agresivo contra la democracia liberal. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es la continuidad del antiguo, empeorado. ■

1. Eric Fassin, “Le moment néofasciste du néoliberalisme”, *Mediapart*, 29-6-2018, <https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-néofasciste-du-néoliberalisme>.

2. Henry Giroux, “Neoliberal Fascism and the Echoes of History”, <https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/>; Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism*, Alfred A. Knopf, Nueva York, 2004.

3. Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, *Le Monde*, 6-3-2017.

4. Emilio Gentile, *Qu'est-ce que le fascisme? Histoire et interprétation*, Folio, Gallimard, 2004.

5. Alusión al cientista social austriaco Karl Polanyi (1886-1964), autor entre otras obras de *La gran transformación*, una crítica al liberalismo económico (N. de la T.).

6. Robert Kuttner, *Can Democracy survive global Capitalism?*, WW.Norton & Company, Nueva York/Londres, 2018.

7. Bernard E. Harcourt, *The Counterrevolution. How our Government went to War against its own Citizens*, Basic Books, Nueva York, 2018, pp. 213 y ss.

*Filósofo especialista en Hegel y Marx, coautor con Christian Laval de *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société neoliberal* (La Découverte 2009), y de *Marx, prénom Karl* (Gallimard 2012).

**Doctor en sociología, investigador francés sobre la historia de la filosofía utilitarista, la historia de la sociología clásica y la evolución del sistema de enseñanza. Traducción: Marta Vassallo

Dossier

Neoliberalismo
y neofascismoCarlos Gorriarena, *El retorno de los dinosaurios*, 1996 (Gentileza Sylvia Vesco)

De las promesas electorales, que utilizaron hábilmente las ambiciones y malestares de los sectores medios, el discurso del gobierno de Cambiemos ha pasado a una ofensiva contra los derechos laborales y sociales, con vistas a la aceptación de que bajo las leyes del mercado sólo pocos sobreviven, y los otros estamos de más.

De la pobreza cero al odio a los pobres

La “bolsonarización” del macrismo

por Pablo Semán*

“No vas a perder nada de lo que tenés.” El frontispicio de la construcción con la que Cambiemos ganó las elecciones de 2015 tenía escritas estas palabras de paz respecto del arreglo socio-económico que había generado el kirchnerismo. No importa la sinceridad de las intenciones declaradas, sino el hecho de que estas declaraciones fundaron el pacto electoral entre el macrismo y los sectores medios (desde las clases medias altas hasta algunos segmentos de las medias bajas en las que se ganaron voluntades, se moderaron los temores y se impusieron ejes de discusión que favorecerían las tesis de Cambiemos).

El llamado de Cambiemos por ese entonces recogía ansias de crecimiento económico personal contenidas y quejas por malestares que, concluidos los años de bonanza macroeconómica, les surgieron en diversos grados y bajo distintos modos a todos los grupos sociales, especialmente a los ubicados en los deciles de la mitad superior de la población.

En ese contexto, no es para nada extraño que los adversarios al planteo macrista de ese entonces, lo amonestaran por “evangelista” y “nueva era” [*new age*]. Esta amonestación consume un modo de acusación ignorante que recuerda a aquellas que un fascista podría lanzar a los “comu-

nistas promiscuos” o la clásica del gorila iletrado y su “hacen los asados con pisos de parquet”.

Sucede en realidad que los dos discursos tienen especificidades, diferencias y puntos de entrecruzamiento, y que las mencionadas acusaciones ignoran la consistencia y la eficacia cultural de las visiones religiosas, suponiendo que estas son simples portadoras de posiciones de “derecha” que los electores escogen por afinidades electivas, y no lo que son en realidad: visiones ambivalentes que pueden moldearse en diversos sentidos en procesos de disputa simbólica, cuyo giro a la derecha resulta facilitado por esa mirada acusatoria de “la izquierda”. Esas acusaciones olvidan que Lula tuvo a los evangélicos como aliados durante más de 13 años.

Si pueden ser parte de un llamado convocante es, entre otras cosas, porque están ahí desde hace mucho más tiempo que el que nadie se ha ocupado de tomar nota. La fe evangélica ha resalado, profundizado y movilizado la veta del milagro presente en una cultura popular que carga con centenares de años de catolicismo y de visiones que no distinguen el más acá del más allá y suponen una realidad intervenida por lo sagrado y por personas que lo puedan vehiculizar.

En la discursividad evangélica caben las emocionalidades, los deseos y sobran las solemnidades

católicas frías, cerebrales y, pese a lo que se pueda suponer, laicizadas en el sentido de reducir las potencias sagradas a un discurso moral. La espiritualidad de la nueva era combina las más variadas búsquedas religiosas con lenguajes y prácticas en las que distintas experiencias son promovidas como una vía de auto-transformación. Estas se retroalimentan con la emergencia de valores individualistas y hedonistas que no son simplemente el individualismo posesivo que se percibe desde el “solidarismo” o el comunitarismo hipostasiados en los críticos de estas posturas. En ambos discursos y en el entramado de prácticas que se relacionan con ellos se perfila la intención de crear contenciones, reglas y normas para sujetos que en diversos ámbitos de lo cotidiano las pierden. El aliento al esfuerzo individual ya casi no proviene de las instituciones que clásicamente lo sostenían. El llamado macrista de 2015 movilizó a su favor esa capa de la cultura realmente existente y la despojó de su ambigüedad en provecho de su causa. Parte de ese éxito se debe a que nadie quiso ni supo jugar en ese terreno.

Como bien señaló Diego Tatian, el discurso de Cambiemos inficionado de estas notas suena siniestro cuando está aplicado a justificar, promover y realizar los más diversos operativos de exclusión social. Con voces dulces, que no se hacen llegar desde distancias marciales, clericales o ideológicas, de tú a tú nos dicen suavemente que debemos irnos de donde estamos, resignar derechos, aceptar violencias. La escena de George Clooney en *Amor sin escalas*, especialista en despedir empleados convenciéndolos de que perder el trabajo es lo mejor que les puede pasar, evoca una María Eugenia Vidal diciéndonos con voz de maestra jardinera: “Vos tenés que morirte de hambre así alcanza para que cada uno reciba lo que se merece según su jerarquía”. El punto es que ese discurso no siempre sonó así para todo el mundo, y hoy resuena más desubicado que siniestro. Justamente por eso a los propios emisores se les ha planteado una necesidad de cambio.

Cambiemos cambia de retórica

Tres años después de su cenit, la marca Cambiemos sufre el rechazo de buena parte de aquellos que adhirieron a su discurso o incluso lo replicaron con recreaciones. Todavía no habíamos terminado de comprender lo que pasó, cuando la situación vuelve a cambiar y precisamos recomponer la descripción. Comienzan a ganar centralidad elementos que también formaban parte de la composición inicial pero estaban opacados, subordinados o incluso escondidos, al tiempo que se hace manifiesta la toma de distancia de algunos comunicadores privilegiados que asociaban su imagen y su voz a la épica del gobierno. Podría decirse que el conjunto de estos elementos conforman una dinámica en la que el gobierno, además de tomar nota de las consecuencias de sus propias debilidades y fortalezas en el espacio público, encara la posibilidad de bolsonarizarse todo lo que es posible.

El discurso de Cambiemos ha quedado, en general, asociado a una posición defensiva y reactiva: una impugnación de los motivos de sentido común que ni siquiera son propiamente opositores. Pasa a primer plano la hiperactivación de una emocionalidad antiperonista que hace tres años ya estaba presente aunque solapada (justamente fue en 2015 cuando comenzó a hablarse con pertinencia cronológica de “70 años de peronismo”). Esta estrategia no sólo se alimenta de los antiperonistas originarios, escasamente representados en un padrón electoral rejuvenecido, sino más bien de un efecto paralelo al neoperonismo de los 2000. En esa época los jóvenes que habían olvidado o no habían conocido al peronismo se aproximaron a él mezclando pasión política actual y revisiones históricas que permitían interpretar ese presente tan conmovedor. Los neoperonistas del 2000 y los antiperonistas de la actualidad surgen de la interacción entre la incertidumbre histórica y las revisiones históricas que vehiculiza la industria cultural.

Pero tan impresionante y grave como esto, desde el punto de vista de nuestra integración social y democrática, es un elemento que acompaña y

amplifica al anterior: el odio a los pobres ha pasado de los usos eufemísticos y metafóricos a lo manifiesto y explícito, dando lugar a un cuadro en el que casi se puede afirmar que el gobierno enfrenta a la mayoría de la sociedad. En la campaña de 2015 el gobierno se había legitimado haciendo uso de retóricas que denunciaban la pobreza, y se atribuía un mandato signado por su capacidad de reducirla; después pasó a denunciar a los pobres justo en el momento en que la pobreza se ensanchaba. Apenas pasado el idilio y la ostentación de “pobres propios” en las imágenes de Margarita Barrientos y de Toty Flores, así como en la estrategia de condescendencia que se consumaba en el uso de las canciones de Gilda para musicalizar la campaña electoral, las cosas fueron cambiando y se endurecieron. A la acusación de constituir mafias –que parecía distinguir entre cúpulas y bases de distintos sectores de la sociedad culpabilizando, por ejemplo, sindicalistas pero no trabajadores– y a la distinción entre aquellos que no habían hecho nada de malo, y por lo tanto no tendrían nada que temer, y aquellos otros que habían infringido la ley, le siguió la descalificación por entero de categorías sociales amplias como los docentes, los científicos, los trabajadores del Estado y los privilegiados que tienen contratos de trabajo de “otra época”. La forma más extensiva de esta acusación tiene dimensiones fenomenales: habría una mitad del país “que no trabaja” y es mantenida por la otra mitad del país que sí lo hace. Estas figuras fueron apareciendo o reforzando su presencia en el espacio público, y aunque no necesariamente son proferidas por representantes del oficialismo, nutren la definición de la época que estos quieren apuntalar. Donde hay una necesidad no sólo no hay un derecho, sino que cuando lo hay es considerado un privilegio inhumano y hasta un obturador del desarrollo social. En el extremo opuesto se perfila un héroe: el que ama el mercado, e incluso aquel que no triunfa

en él, pero no se sabe por qué considera una muestra de temple y valor enfrentarse al mismo en condiciones imposibles e injustas. Nunca olvidaré una conversación callejera en la cual un hombre le enrostraba a otro el bienestar de las sociedades escandinavas y el increpado respondía que sí, pero que ahí vivían todos del Estado, no había mérito.

Sin lugar para los débiles

He ahí el ciudadano que requiere la etapa actual del discurso macrista: uno cuya muestra de temple se juega en preferir la intemperie antes que en reclamar el interés de unos ganadores que no son ese ciudadano. En la sociedad reducida a mercado sobreviven unos pocos y los que no son capaces de triunfar desmejoran la especie. Así que la anulación de derechos no sólo debe ser vista como la eliminación de privilegios, sino también como la inauguración de una exigente formación del espíritu y las habilidades. En este contexto los pobres no son dignos de asistencia ni son el resultado del proceso de explotación, sino exclusivos responsables de su malestar. El hecho de que los miembros del gobierno tengan lecturas y formación en aspectos de las ciencias sociales les impide decir esto en voz alta, pero también les facilita argumentar de forma polémica contra los argumentos clásicos a favor de la justicia social a la que denuncian como un lugar común: ¿acaso no han recibido ya suficiente en nombre ella?, ¿no habrá algo en ellos que los hace estar cómo están? Se adivina tras esas preguntas la impugnación generalizada del gobierno a los actores del estancamiento: los sindicatos, los trabajadores, los derechos, los políticos. Aquí sólo hay lugar para emprendedores exitosos, o sea, dueños del capital concentrado.

Este giro del discurso del gobierno se da, no casualmente, en el contexto de la erosión de la imagen presidencial y su consiguiente efecto de pér-

didada de posibilidades electorales para él y para el oficialismo. La radicalización parece destinada a retener y satisfacer las demandas del núcleo duro del macrismo, pero también a mantener en un radio más amplio una agenda centrada en los intereses de los capitalistas y consensuada un poco más allá de la periferia de Cambiemos.

Pero en realidad todo esto ocurre en un contexto social más amplio: vivimos una transición en la cual la sociedad que nos formó para trabajar y consumir tiende a desprenderse de puestos de trabajo y a tornar supernumerarios a millones de seres humanos que no tendremos ocupación ni medios para vivir. De muy diversas maneras, los sujetos de las más distintas sociedades pugnan para no ser los excluidos, y para ello buscan constituir otros

Donde hay una necesidad no sólo no hay un derecho, sino que cuando lo hay es considerado un obturador del desarrollo social.

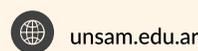
legítimamente prescindibles, chivos expiatorios de esta transformación del mundo del trabajo. La xenofobia en algunos países y la fobia a los pobres en otros son manifestaciones de ese juego todavía pacífico en el que todos parecen haber aceptado la premisa salvaje de que en este mundo sobra gente. ■

*Licenciado y Doctor en Antropología Social. Actualmente es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el IDAES, UNSAM. Sus áreas de actuación son el análisis de los movimientos religiosos, los estudios sociales de la música, las culturas populares y masivas.
© UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

POSGRADOS 2019



DOCTORADO / D MAESTRÍA / M ESPECIALIZACIÓN / E

CIENCIAS APLICADAS

- Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería / D
- Física de la Medicina Nuclear / E
- Calidad Industrial / E
- Calidad Industrial en Alimentos / E
- Tecnología y Gestión de la Seguridad contra Incendios en la Edificación / E
- Calidad Industrial / M
- Calidad e Innovación Industrial / D
- Tecnología Nuclear / D
- Radioquímica y Aplicaciones Nucleares / E
- Reactores Nucleares y su Ciclo de Combustible / E
- Astrofísica / D
- Ciencia y Tecnología, Mención Materiales / D
- Ensayos No Destructivos / E
- Ciencia y Tecnología de Materiales / M
- Evaluación de la Contaminación Ambiental y su Riesgo Toxicológico / E
- Gestión Ambiental / E
- Industria Petroquímica / E
- Tecnologías e Impacto Ambiental de Materiales Plásticos / E
- Gestión Ambiental / M
- Agrobiotecnología / M

CIENCIAS BÁSICAS

- Biología Molecular y Biotecnología / D
- Microbiología Molecular / M
- Ciencia y Tecnología, Mención Física / D
- Ciencia y Tecnología, Mención Química / D

CIENCIAS HUMANAS

- Educación (UNLA/UNSAM/ UNTREF) / D
- Filosofía / D
- Educación, Lenguajes y Medios / E
- Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemática / E
- Gestión Educativa / E
- Literatura Infantil y Juvenil / E
- Educación, Lenguajes y Medios / M
- Estudios Latinoamericanos / M
- Gestión Educativa / M
- Historia Conceptual / M
- Literaturas de América Latina / M
- Teoría y Práctica Psicoanalítica / E
- Conservación-Restauración de Bienes Culturales / E
- Conservación Restauración de Bienes Artísticos y Bibliográficos / M
- Historia / D
- Historia / M
- Clínica Psicoanalítica / M
- Historia del Arte Argentino y Latinoamericano / M
- Periodismo Narrativo / M

CIENCIAS SOCIALES

- Economía y Desarrollo del Turismo / E
- Economía y Desarrollo del Turismo / M
- Gestión de la Tecnología y la Innovación / E
- Cooperación Internacional / E

- Derechos Humanos y Políticas Sociales / E
- Cooperación Internacional / M
- Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe / M
- Derechos Humanos y Políticas Sociales / M
- Ciencia Política / D
- Derecho y Gestión Electoral / E
- Evaluación de Políticas Públicas / E
- Análisis, Derecho y Gestión Electoral / M
- Auditoría Gubernamental / M
- Compras Públicas / M
- Estudios Electorales / M
- Gobierno y Economía Política / M
- Planificación y Evaluación de Políticas Públicas / M
- Política y Gestión Local / M
- Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo / M
- Política y Planificación del Transporte / E
- Política y Planificación del Transporte / M
- Antropología Social / D
- Sociología / D
- Gestión Cultural y Políticas Culturales / E
- Antropología Social / M
- Ciencia Política / M
- Desarrollo Económico / M
- Sociología de la Cultura y Análisis Cultural / M
- Sociología Económica / M

CIENCIAS DE LA SALUD

- Neuropsicología Infantil / M

Carlos Gorriarena, *Íconos de la barbarie*, 2000 (Gentileza Sylvia Vesco)

Dossier

Neoliberalismo
y neofascismo

Las explicaciones simplificadoras y deterministas del giro a la derecha de las poblaciones de la región, atribuido al ascenso social, que postulan una relación automática entre el cambio social y el político, desatienden el peso de los microfascismos, un factor clave para entender la disputa por el sentido común.

Cambios sociales de raíces antiguas y efectos perdurables

Vuelco a la derecha, ¿hasta dónde?

por Alejandro Grimson*

¿Es posible el bolsonarismo en Argentina? Para responder una pregunta de este tipo, el análisis de los cambios políticos y económicos necesita prestar atención a las transformaciones culturales. Los cambios de gobierno, de orientación, la implementación de medidas o el despliegue de discursos que en otros contextos parecían imposibles, dan cuenta de modificaciones que operan en las profundidades de la vida social. Y pueden debatirse las causas.

El giro a la derecha, o incluso a la ultraderecha, que se vive en diferentes lugares del mundo es explicado por distintas teorías. Unas colocan el énfasis en los medios masivos, las redes sociales, las conspiraciones o la crueldad de los poderosos. Otras, denuncian a todos los humanismos y sostienen que las sociedades siempre han sido y siempre serán jerárquicas, conservadoras y reaccionarias. No hay esperanza en el ser humano que sea realis-

ta. Estos enfoques tan opuestos tienen una sola cosa en común: no colocan el énfasis en el conflicto social, en las disputas por el sentido común, en la construcción de hegemonías.

Vamos a detenernos en ciertos aspectos de la sociedad argentina, teniendo presente como tensión comparativa el surgimiento del bolsonarismo en Brasil. En el país vecino puede escucharse la opinión de que Bolsonaro fracasará rápidamente y que será un episodio olvidable en la historia brasileña. Más allá de las similitudes con el análisis político hecho sólo a partir de expresiones de deseo a fines de 2015 en Argentina, nos interesa subrayar aquí otra cosa. Mientras en el plano de las superestructuras efectivamente puede haber tanto cambios rápidos, figuras fugaces como otras mucho más perdurables, los cambios en las profundidades de lo social se relacionan con procesos más persistentes, de largo alcance.

Podríamos preguntarnos si una sociedad que logra avanzar en reducir la xenofobia, la desigualdad de género, la libre orientación sexual, y el racismo contra los pueblos originarios puede de pronto retroceder. La experiencia histórica muestra que claramente no existe un proceso continuo de avance desde una época de mayor desigualdad hacia otra de menor desigualdad. No sólo hay avances y retrocesos, hay también retrocesos brutales, duraderos y de grandes consecuencias. Ahora, lo que es seguro es que ese cambio no se produce “de pronto”, de la nada. Por ejemplo, en el brillante análisis de los orígenes del nazismo, Norbert Elías muestra cómo toda una serie de elementos (machismo, idea de superioridad, violencia social, etc.) estaban presentes hacía mucho tiempo en Alemania.

En el año 2011 hicimos una encuesta sobre creencias, valores y prácticas en relación a

percepciones de diferencias de clase, de género, étnicas y raciales, cuyos resultados publicamos en los años siguientes, pero pasaron algo desapercibidos (1). Sintéticamente, mostrábamos (con validez estadística para la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires) que aproximadamente un tercio de la población era abiertamente misógino, homofóbico, racista, clasista y xenófobo. ¿Cómo lo sabíamos? Habíamos hecho preguntas acerca de si le molestaría que su hijo se casara con personas de bajos ingresos, con migrantes limítrofes, con alguien del mismo sexo. Habíamos preguntado si le molestaría vivir en la misma cuadra con judíos, travestis o bolivianos. Habíamos preguntado si creían que, en situaciones de crisis, había que dar prioridad en el acceso al empleo a los varones. Y toda una batería de preguntas en buena medida estandarizadas a nivel internacional.

Si en la mayoría de los casos los encuestados responden de modo no discriminatorio, puede plantearse un cierto alivio. Pero esa sensación puede ser equivocada. En la sociedad existe la noción de lo que es políticamente correcto. Los cientos de miles de argentinos que insultan a negros y gays todos los domingos en los estadios de fútbol no se comportan del mismo modo en otros contextos. Los periodistas, dirigentes sociales o académicos que lo hacen, no lo dicen en sus artículos ni en los discursos públicos. Es evidente que los sentidos comunes de la discriminación se explicitan o no según los contextos. Que más de un tercio no quiera que sus hijos se casen con inmigrantes limítrofes, o más de un cuarto explicito que en situaciones de escasez de empleo los hombres sí deben tener prioridad frente a las mujeres, debe considerarse un piso.

Cuando es detectada una minoría significativa cuyas opiniones están en contra de ideas básicas de igualdad entre los seres humanos, más que alivio por el carácter minoritario debería generar preocupación por su carácter significativo. Y ello en virtud de dos razones: por un lado, en ciertos

contextos históricos las minorías se convierten en mayorías; por otro, una encuesta no capta el poder social efectivo de esas minorías.

Detectamos además que los habitantes de las villas concitan tanta o más discriminación que los inmigrantes, aunque ambos niveles son altos. El rechazo al casamiento de los hijos con personas del mismo sexo, un tema presente en las noticias y el debate actual, es factible que en lugar de ser “inimaginable” provoque escozor y por ello reúna un mayor rechazo explícito. También mostramos que la vida y la muerte de las personas son valoradas de modo desigual. Todos somos iguales en un plano muy abstracto, pero mientras un asesinato político en la frontera con la Capital puede producir una crisis política, algo similar en una provincia periférica puede pasar desapercibido.

Esta información y otra análoga tienen mucha importancia para comprender cómo se desarrollaron ciertos procesos sociales junto a sus correlatos políticos. Cuando hicimos la encuesta hacía varios años que no había políticas xenofobas desde el gobierno nacional. Sin embargo, detectábamos un racismo social profundo y persistente. Se había aprobado ya el matrimonio igualitario, pero en la encuesta se evidenció la persistencia de un núcleo homofóbico. Había habido varios avances legislativos en dirección a la paridad de género. No obstante, el rechazo a la igualdad entre varones y mujeres estaba presente mucho antes de la emergencia de los pañuelos celestes (que identifican a quienes se oponen al aborto legal).

Así y todo, las características específicas de las batallas sobre esa ley marcan una tensión creciente. Por una parte, la marea verde es un fenómeno que ha cambiado y cambiará a sectores muy relevantes de los jóvenes y de la población en general. Por otra, el surgimiento de los pañuelos celestes está lejos de ser un fenómeno pasajero. Y su lenguaje y el de varios diputados y referentes en el transcurso del debate legislativo han dado señales de alarma que no están siendo leídas adecuadamente.

Se considera irrelevante el nivel de agresividad alcanzado por algunos celestes porque son sólo una parte, porque serían los conservadores de siempre, o cosas por el estilo. Ese menosprecio de los microfascismos y esa aceptación de afirmaciones inaceptables en una cultura democrática conforman un típico error de etapas previas al crecimiento de estos procesos.

Hay una babytchecoparización de sectores de la esfera pública. Incluso, Baby Etchecopar se está radicalizando y otros personajes se suman a las cruzadas contra choriplaneros, negros, villeros y también kirchneristas. En varios países de América Latina hay un renacimiento del macartismo contra los militantes o supuestos adherentes al correísmo, petismo, kirchnerismo, etc.

Aquí Agustín Laje y Nicolás Márquez publican un libro titulado *El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural*. En Brasil Olavo de Carvalho afirma que el ascenso de Bolsonaro “no será sólo una derrota” del PT y las

organizaciones sociales, sino “su total destrucción en tanto grupos, en tanto organizaciones y hasta en tanto individuos”. Si no es el anuncio de una noche de los cristales rotos, se le parece bastante.

La autopercepción de clase

Muchas veces se argumenta que el crecimiento de las clases medias durante gobiernos progresistas

Los habitantes de las villas concitan tanta o más discriminación que los inmigrantes, aunque ambos niveles son altos.

llevó a que éstas giraran a la derecha y votaran en contra de las fuerzas que las habían favorecido. Sin embargo, en primer lugar, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Italia, el giro a la derecha fue precedido por procesos redistributivos. En segundo lugar, las subjetividades culturales y políticas son bastante más complejas que esta teoría.

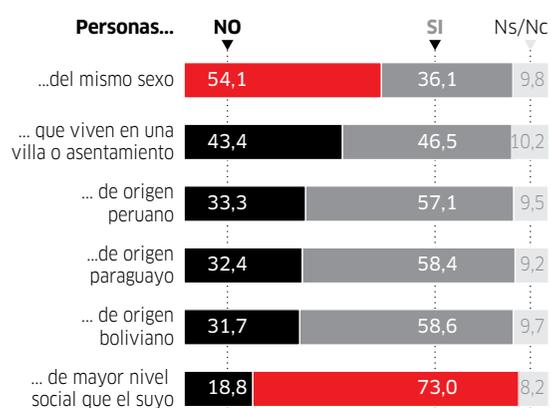
Hay que distinguir entre las concepciones socioló-

gicas objetivas de las clases medias, por tipo de empleo, nivel educativo o niveles de ingresos, por un lado, y las autopercepciones de clase por el otro. Estas últimas se refieren a las percepciones subjetivas que las personas o grupos pueden tener respecto de su propia posición o pertenencia de clase.

Mientras en los análisis sociológicos objetivistas cada persona o familia es parte de una clase o estrato, en las visiones subjetivas hay dos diferencias cruciales. Primero, las personas utilizan otros elementos para considerarse o no a sí mismas dentro de una clase: tener o no un trabajo, el cambio en la calidad del trabajo, en la calidad de la vivienda, en la propiedad de la misma, en la asistencia de su hijo a la universidad, en la posibilidad de irse de vacaciones, aunque sean →

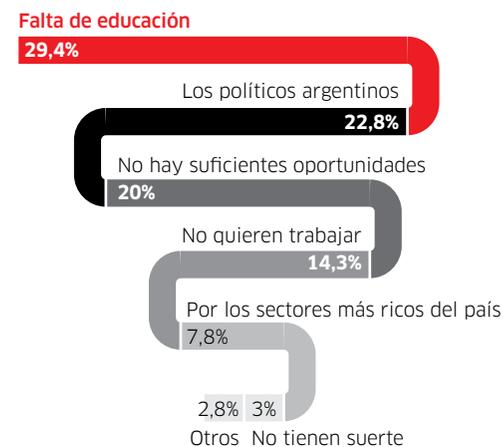
¿Con qué persona le gustaría que forme pareja su hijo?

En porcentaje, por respuesta



¿Cuál es la causa más importante que explica la situación de pobreza?

En porcentaje por respuesta, sobre el total de encuestados



Mundo Sano

25 AÑOS

1993	2018
CUMPLIMOS	

Contribuyendo a la salud de las personas expuestas a enfermedades desatendidas.

mundosano@mundosano.org
www.mundosano.org

→ modestas. Segundo, mientras que para el objetivismo cada persona sólo puede pertenecer a una clase, para ellas mismas se puede pertenecer a dos o más clases en simultáneo. En tanto “clase alta” y “clase baja” se presentan siempre como términos mutuamente excluyentes para la gente, “trabajadores” y “clases medias” no siempre lo son. Al menos no en todas las sociedades, ni para todos sus miembros.

Según la visión más tradicional (todavía con peso político), sólo los profesionales, pequeños comerciantes y agricultores, son clases medias. Quizás también lo sean los trabajadores de cuello blanco. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acerca del sentimiento de pertenencia a la clase media baja y a la clase media en América Latina son muy relevantes. Para las mediciones del Latinobarómetro, en 18 países el 26% se consideraba a sí mismo de la “clase baja”, el 31% de la “clase media baja” y el 38% de la “clase media”. Es imposible construir una estrategia política adecuada sin tener en cuenta estas auto-percepciones de los sentimientos de pertenencia de la población.

En el lenguaje coloquial de diversas sociedades, el término “clase media” es utilizado de un modo muy distante al de la sociología objetivista, y al de las fuerzas políticas que no han tomado nota de este cambio cultural. Puede haber personas que si consiguen trabajos fijos, si obtienen una vivienda, si adquieren una moto o si su hijo concurre a la universidad dejen de considerarse parte del nivel social más bajo. Por lo tanto, no son “clase baja”, sino “clase media baja”. Esto incluye a gran parte de los trabajadores sindicalizados. Hay otros muchos trabajadores que se consideran, por su parte, miembros de la clase media a secas.

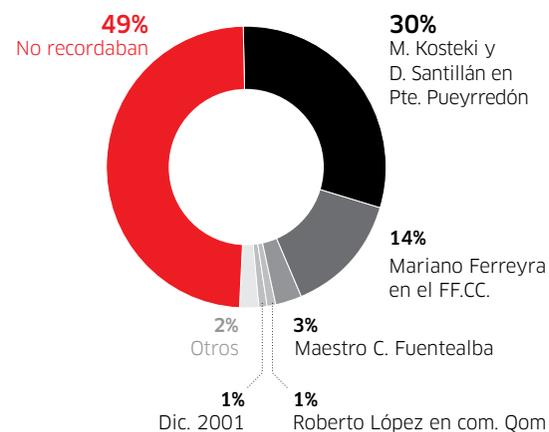
Cuando las personas modifican su visión sobre su propia posición en la estructura social es probable que tengan nuevas demandas, que puedan adherir a otros valores y modificar sus posiciones políticas. Lo que no se puede es predecir si ese cambio se orientará hacia la izquierda o hacia la derecha. No hay automatismo social. Es tan falso que el ser humano sea ontológicamente bondadoso como maligno. Es también falso que todo cambio social produzca un único y previsible cambio político. El hecho de que una sociedad sea más egoísta o solidaria, autoritaria o democrática, más o menos respetuosa de la diversidad depende, sobre todo, de luchas culturales y políticas nunca saldadas de una vez para siempre. ■

1. Alejandro Grimson, “Percepciones sociales de la desigualdad, la distribución y la redistribución de ingresos”, *Revista Laboratorio*, Año 15, N° 26, 2014-2015, y “El sentido común de la discriminación”, *Revista Ensamblés*, Año I, N° 1, primavera de 2014, Dossier, pp. 37-56.

*Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, investigador del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

¿Recuerda la muerte de alguna persona en una protesta social en los últimos 10 años?

En porcentaje por respuesta, sobre el total de encuestados



Fuente: Las fuentes de los gráficos se encuentran en los artículos mencionados en la nota al pie (1)

INCREMENTO Y DESNATURALIZACIÓN DE LAS AGRESIONES

Violencias

por José Garriga*

En los últimos veinte años, pero especialmente en los últimos cinco, sucedieron dos mutaciones dignas de análisis respecto a las violencias en Argentina. Por un lado, se produjo un lento pero sostenido cambio en la interpretación de los fenómenos violentos y, por el otro, hubo un aumento de las agresiones, ataques e intimidaciones (femicidios, abusos policiales y linchamientos). Ambos fenómenos, globales pero con dinámicas locales, tienen un común denominador: el rol del Estado.

Nueva sensibilidad

Observamos en Argentina cómo se modificaron, en las últimas décadas, las fronteras de lo que se definía como violencia, aumentando cuantiosamente lo incluido dentro de estos límites. La tolerancia social mutó. Lo que antes era aceptado dejó de serlo y así, se desnaturalizaron (y deslegitimaron) numerosas acciones, discursos y gestos violentos: desde el acoso sexual, a las burlas en los colegios, pasando por las múltiples maneras de la violencia de género.

Para comprender la inflación de las violencias debemos tener en cuenta que la definición de un acto como violento se constituye en campo de disputas por la legitimidad. Actores diferentes, con posiciones políticas y perspectivas éticas disímiles, luchan por definir prácticas y representaciones. Una lucha desigual atada a las dinámicas del poder. El Estado, antes actor de suma relevancia en la definición de estos límites, fue perdiendo protagonismo.

El concepto de violencia institucional es un claro ejemplo de la mutación de estas fronteras. La conjunción de estos términos –violencia e institución– fue efectiva para construir una nueva sensibilidad sobre prácticas policiales interpretadas como “naturales” y/o “excepcionales”. Sensibilidad que permitió desnudar las lógicas de la recurrencia y transformar lo legítimo en ilegítimo. Algunas violencias policiales, por ejemplo, eran toleradas en virtud de la legitimidad proveniente de las víctimas y defendidas por su excepcionalidad por parte de los victimarios. Se modificaron –con efectividad relativa– los criterios de lo legítimo.

Aparecen, se definen y se visibilizan formas de violencia que antes estaban ocultas o eran totalmente naturalizadas. La inflación es –en este caso– un fenómeno positivo, pues evidencia las disputas y el dinamismo de lo que se define como violento, permitiendo, además, abordar y modificar el orden de lo legítimo.

Emprendedores de la violencia

Linchamientos, violencias, femicidios y ataques xenófobos se multiplicaron en estos tiempos. Siempre existieron estas formas de violencias, pero en la última década no sólo crecieron sino que se volvieron más visibles dada su deslegitimación.

Dos caminos diferentes explican este crecimiento. Por un lado, ya lo dijimos, el Estado perdió el monopolio de la definición de lo que está bien y lo que está mal. Al no tener la capacidad para transformar la ley en discurso legítimo habilita sentidos comunes que legitiman violencias ilegales.

Por otro lado, y vinculado a lo que aquí denominaremos emprendedurismo de la violencia, el Estado se desligó de muchas de sus responsabilidades y las depositó en los sujetos. Políticas públicas, directas o indirectas, conformaron una subjetividad que pone el acento en los individuos y sus capacidades. Estos nuevos actores sociales parecen los únicos responsables del devenir de su vida, dependiendo el éxito o el fracaso de su esfuerzo. Esta imaginación meritocrática fantasea e idealiza a individuos que deben construir sus caminos solos en un mundo hostil. La figura del emprendedor, estrella rutilante de los nuevos senderos del universo comercial, tiene su correlato en el campo de las violencias. Remite al afán –individual– del que restaura un orden perdido: el emprendedor de la violencia hace “justicia por mano propia”, fomentado desde el Estado.

Los emprendedores de la violencia no se definen a sí mismos como violentos. Sus prácticas son para ellos legítimas. En nuestra sociedad nadie, o casi nadie, desea ser rotulado de violento. Esta etiqueta es una mancha venenosa, y por eso estos actos se legitiman como “justas” reacciones. Sus violencias no son, así, violencias, sino respuestas justas ante delincuentes, desviados morales, invasiones migrantes, etc. La violencia deviene una acción justificada en el desorden societal y animada por el espíritu individualista que aviva la reacción. El Estado no sólo fomentó, con más fuerza en los últimos años, el espíritu de este individualismo reaccionario sino también dio rienda suelta a los discursos de odio contra las alteridades. Un presidente que aplaude las formas de justicia por mano propia o una ministra que justifica usos ilegales de la fuerza entre los policías son algunas de las muestras de este accionar.

Estos discursos, corrientes y desbordantes en numerosos medios de comunicación, contribuyen a la legitimación de ciertas violencias. Una legitimación construida en el proceso de deshumanización del otro. Para que la violencia sea posible el destinatario debe ser identificado como radicalmente otro, diferente. Nada puedo compartir con aquel sobre el que descargo mi ira, no es como yo, no es humano. Entonces, quienes sufren estas violencias –nunca definidas como tales por sus practicantes– se “lo merecen”. El merecimiento se justifica en la deshumanización y se activa en la imputación de las responsabilidades de los emprendedores de la violencia en medio de un desorden societal anónimo.

El Estado, no obstante, nunca perdió a lo largo de estos años su capacidad represiva, la complementó con el incentivo de las individualidades violentas. Ese mismo Estado, paradójicamente, habilitó en simultáneo debates en torno a la legitimidad de algunas formas de acción violenta (las violencias de género, las institucionales, entre otras). ■

* Doctor en Antropología Social (UBA), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente del IDAES, UNSAM.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

¡NUEVO!

El Atlas

de la revolución de las mujeres

Las luchas históricas y los
desafíos actuales del feminismo



Una obra
imprescindible para
deconstruir las
arraigadas
construcciones
sociales de género

90 gráficos e
infografías
20 mapas
37 artículos

Del aborto al trabajo sexual y la trata, de la violencia de género a los techos de cristal impuestos para los altos cargos a las mujeres, de la madre trabajadora a la decadencia de la "familia tipo", de la literatura feminista al deporte, la música y el humor, **El Atlas de la revolución de las mujeres** ofrece una mirada panorámica, profunda y crítica, de un mundo donde la dominación patriarcal sigue muy arraigada.

LE MONDE
diplomatique

Ci Capital intelectual

www.eldiplo.org

EN KIOSCOS
Y LIBRERÍAS
DE TODO EL PAÍS

Los gobiernos populares que impulsaron el mercado interno y la redistribución de la riqueza redujeron en la primera década del siglo XXI la desigualdad de algunos países de la región. Pero el retorno de gobiernos neoliberales amenaza esos avances limitados, en particular una mejora cuantitativa en la cobertura educativa.

Tendencias y desafíos en la estructura social regional

Persistencia de la desigualdad

por Gabriela Benza* y Gabriel Kessler**



Escuela N°28 Distrito Escolar 5. Primera escuela primaria pública bilingüe argentino-china (Sub.Coop)

En la primera década del siglo XXI América Latina registró tendencias favorables en diversos indicadores sociales, entre ellos la reducción de la desigualdad de ingresos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para un promedio de países latinoamericanos, entre 2002 y 2014 el Coeficiente de Gini se redujo de 0,547 a 0,491, al tiempo que se acortó la distancia entre los estratos más y menos favorecidos: si en 2002 el 10% más rico tenía ingresos, en promedio, 43 veces más altos que el 10% más pobre, para 2014 esa brecha se había reducido a 39 veces. Esta tendencia es destacable porque ocurrió en prácticamente todos los países latinoamericanos (si bien con diversa intensidad) y porque contrastó con lo sucedido en las últimas décadas del siglo XX, cuando aumentó la

concentración de ingresos y la región se consolidó como una de las más desiguales del planeta.

Los factores tras la caída de la desigualdad son varios. Por un lado, el favorable contexto internacional y el crecimiento económico del período dinamizaron los mercados laborales, y en particular la demanda de trabajadores no calificados, lo que contribuyó a reducir la brecha de ingresos entre estos últimos y los calificados. Por otro lado, el cambio en el escenario político, con un “giro a la izquierda” en los gobiernos de la región, impulsó una mayor regulación laboral y políticas fiscales redistributivas, sobre todo bajo la forma de transferencias estatales hacia los hogares de menores recursos.

Sin embargo, la mejora en la distribución de ingresos no se extendió en el tiempo, se concentró en los prime-

ros años del siglo para luego menguar, e incluso estancarse. Después de 2010 cambió el contexto internacional y se desaceleró el crecimiento económico. También se modificó el contexto político: la interrupción, en varios países, de las experiencias “post-neoliberales” que venían desarrollándose hasta entonces ha puesto en duda la continuidad de las políticas redistributivas.

Más allá del cambio de contexto, la reciente caída de la concentración de ingresos parece haber tenido límites claros. Y esto no sólo porque en la región la propiedad y la riqueza siguieron estando muy concentradas (la concentración de la tierra, por ejemplo, es particularmente alta en comparación con otras regiones del mundo, con casos extremos como Paraguay, con 80% de las tierras agrícolas en manos del 1,6% de los propietarios, como muestra un in-

forme de Oxfam (1)). También porque durante el período, en general, se modificaron poco las estructuras productivas y tributarias de los países latinoamericanos, lo que en un caso limitó las posibilidades de generar empleos de mejor calidad y con mayores remuneraciones y en el otro, de generar más redistribución a través de impuestos a los sectores de más altos recursos. Así, la alteración de las bases estructurales de la desigualdad latinoamericana, con profundas raíces históricas, continúa siendo un tema pendiente.

Bono demográfico y envejecimiento

En general, las políticas locales prestan poca atención a la demografía, el sustrato básico de toda sociedad. La llamada transición demográfica, que implica caídas sustantivas en la mortalidad y la natalidad, es un buen ejemplo de cómo

los procesos poblacionales dan lugar a transformaciones radicales en las experiencias de vida de los individuos e imponen desafíos para el desarrollo socioeconómico y las políticas públicas. En América Latina la transición demográfica se inicia en forma más tardía que en los países desarrollados, pero ocurre en forma acelerada. La reducción de la mortalidad dio lugar a un incremento significativo en la longevidad: entre 1950 y 2015 la esperanza de vida al nacer de la región aumentó, en promedio, de 51,3 a 74,6 años, según datos de la División de Población de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, disminuyó el número de hijos por mujer: la tasa global de fecundidad pasó de 5,9 hijos hacia 1960, a alrededor de 2,1 en 2015. Estas tendencias han sido generalizadas, aunque persisten diferencias importantes entre los países, y dentro de cada país, entre distintos sectores sociales.

Uno de los resultantes centrales de la caída en la mortalidad y la fecundidad es el bono demográfico, producto de la relación favorable entre la proporción de población que por su edad es potencialmente activa y la potencialmente inactiva. Una situación de la que goza la región en la actualidad y que es muy propicia para el desarrollo económico. Esto, entre otros motivos, porque la sociedad cuenta con fuerza de trabajo abundante para impulsar la economía y porque un mayor número de personas en edad activa significa, potencialmente, más contribuciones para los sistemas de seguridad social y previsionales. Sin embargo, los beneficios asociados con el bono demográfico no son automáticos. Dependen de la adopción de políticas que incentiven la inversión productiva y que incrementen la capacidad de las economías para generar empleos. Sin esto, no sólo se desperdicia el bono, sino que se enfrenta el problema de un porcentaje mayor de población en edades activas sin oportunidades laborales. ¿Ha aprovechado la región el bono demográfico? La respuesta es, en general, no. No ha habido de manera explícita políticas de población que se centren en aprovechar este momento que está comenzando a terminar.

De hecho, el fin del bono demográfico se vincula con el proceso de envejecimiento poblacional, otra consecuencia importante de las tendencias en mortalidad y fecundidad. El grupo de adultos mayores está ganando un peso creciente en la región: se estima que para 2040 llegará a superar, por primera vez, al de los niños. El envejecimiento demográfico plantea desafíos sociales importantes. Como punto de partida, es necesario cuestionar la mirada que habitualmente se tiene de los adultos mayores, del rol que desempeñan y sus contribuciones a la sociedad, sin duda lo que menos se ha renovado en nuestras concepciones sobre las distintas etapas del ciclo de vida. En el plano de las políticas públicas, un reto es la creciente demanda de cuidados. En nuestras sociedades, estas actividades han quedado tradicionalmente en la esfera privada, a cargo de las familias, y sobre todo de las mujeres. Con el envejecimiento poblacional, se trata de un capítulo central de las políticas a debatir, con escasa presencia en el espacio público de la región.

Un perfil epidemiológico dual

Cada configuración histórica de la estructura demográfica tiene su correlato en el perfil epidemiológico de dicha

población. Hoy en América Latina la transición epidemiológica es la consecuencia en el terreno de la salud de la transición demográfica que mencionamos más arriba. Como muestran los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2), sus rasgos son duales: coexisten enfermedades infecto-contagiosas, vinculadas a estadios de menor desarrollo (como la persistencia de la mortalidad infantil o de distintas enfermedades de la po-

La alteración de las bases estructurales de la desigualdad latinoamericana continúa siendo un tema pendiente.

breza), junto al creciente peso de enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer y las dolencias cardiovasculares, concomitantes a los procesos de envejecimiento poblacional. A esto se agrega que, desde hace años, se está construyendo una perspectiva novedosa y más amplia sobre la salud. En primer lugar, se incluyen las muertes por “causas externas” provocadas por homicidios, suicidios y distintos tipos de accidentes, con mucha incidencia en la mortalidad de las y los más jóvenes. Más recientemente, otros temas han ingresado o intentan ocupar un lugar más destacado en la agenda pública, como la salud mental, los riesgos asociados a catástrofes naturales, y los accidentes y enfermedades ocupacionales.

En términos generales las noticias de la región en materia de salud han sido positivas en la última década. La OPS señala que ha habido avances producto de la disminución de la mortalidad infantil y, como vimos, del aumento de la esperanza de vida. También se ha incrementado el gasto en salud como porcentaje del PBI. Quedan, sin dudas, muchos pendientes: el acceso a la salud sigue siendo marcadamente desigual para los distintos sectores sociales, la incidencia de enfermedades vinculadas con la pobreza es aún elevada y los sistemas de salud todavía arrastran problemas derivados de un alto nivel de segmentación. Desde una mirada de más largo plazo, la pregunta es si los sistemas de salud de la región están preparados para hacer frente a los desafíos novedosos que plantean el perfil epidemiológico cambiante y las nuevas miradas sobre la salud. La evaluación de los especialistas es que no, en particular porque perduran lógicas institucionales creadas para hacer frente a una concepción tradicional de salud y enfermedad. Dos son quizás los principales desafíos. Como afirma en sus distintos trabajos Federico Tobar, el más visible consiste en adaptarse al cambio de perfil epidemiológico, que obligaría a los sistemas a seguir a la población con distintos tipos de riesgos (diabetes, colesterol, hipertensión) mediante controles e incentivos para estilos de vida saludable, en lugar de sólo atender la demanda ante la enfermedad que eclosiona. En otras palabras, se trata también de acompañar y cuidar a una población para evitar que se enferme. El dato positivo es que todavía los sistemas no se han

visto en crisis por el cambio de perfiles, tal como sucede en los países desarrollados por el aumento de demandas de una población envejecida, pero se prevé que esto sucederá en el mediano plazo. En segundo lugar, violencias, catástrofes naturales, enfermedades laborales, sufrimiento de salud mental son, cada uno de ellos, problemas complejos para el sistema y, más en general, para una política integral de salud. Se modifica la idea misma de prevención y el lugar de los propios servicios de salud, puesto que exige una respuesta integral, muy rápida, de varias agencias públicas en conjunto con capacidades de logística territorial diferentes de las que guían a los servicios de salud tal como los conocemos hasta hoy.

Inclusión educativa

Si bien perduran grandes desigualdades entre países y al interior de cada uno de ellos, América Latina ha sido exitosa en su proceso de inclusión educativa. Desde los años 80 y aun en los periodos de incremento de la pobreza y la desigualdad, las tasas de cobertura de educación en todos los ciclos no cesaron de incrementarse. Según datos del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) (3) para los años recientes, la educación temprana o inicial, hasta 3 años, es la que exhibe la menor cobertura, pero ha habido un importante aumento desde el comienzo de la década. En el mismo periodo, la cobertura de educación preescolar de 4 y 5 años casi se duplicó. La educación primaria entre los 6 y 11 años es obligatoria en todos los países de la región y ha logrado ser prácticamente universal; hoy se considera inaceptable que una niña o niño no esté escolarizado. La escuela secundaria es obligatoria en casi todos los países: en algunos sólo el primer tramo (12 a 14 años) y en otros el ciclo completo (hasta los 17). La cobertura ha aumentado en forma constante desde los años 80 y sobre todo en los 90. Por tal razón, en la última década ese incremento se fue morigerando: quedan núcleos de exclusión donde a la escuela aún le cuesta llegar. Datos del SITEAL muestran que hacia 2013 el 85,3 % de las y los adolescentes de 12 a 17 años estaban escolarizados. Pero a diferencia de la primaria, en el nivel medio ingresar a la escuela no es garantía de graduación: una cuarta parte de los que empiezan no finaliza y, nuevamente, las brechas entre y dentro de los países son muy altas. En fin, en cuanto a la educación superior, según la misma fuente hacia 2013 el 30,8% de las y los jóvenes de 18 a 24 años estaban escolarizados. Este ciclo creció en forma muy significativa en la última década. En palabras de C. Rama (4), se está produciendo una “deselitización” de la educación superior desde los años 90. Si en 1970 alrededor de 1,6 millones de 20 a 24 años concurría al ciclo superior, muestra el autor que en el 2005 ya eran casi 16 millones. Y el aumento continúa: se estima que en 2025 se puede prever que habrá un 65% de jóvenes latinoamericanos en la educación superior.

Mientras que la región ha sido exitosa en el aumento de la cobertura educativa, no puede decirse lo mismo en relación con su calidad. En la prueba más conocida, PISA, todos los países (con excepción de Chile) han presentado resultados peores que los que podría preverse por su ingreso per cápita. Si bien hay un mejoramiento paulatino desde el año 2000, las diferencias con otras regiones son muy importantes, y persisten profundas brechas entre clases sociales.

Así las cosas, la calidad educativa se ha transformado en el tema central en los debates actuales, tanto políticos como mediáticos y académicos. Gran parte de los países de la región han tenido desde la década pasada en el centro de la agenda la cuestión de la calidad, creando dispositivos continuos de evaluación y monitoreo de calidad y experimentando planes y programas para su mejora.

Reflexiones finales

Las dimensiones de la estructura social analizadas muestran tendencias que no siguen las mismas temporalidades ni tienen los mismos puntos de inflexión. En todas ellas se registran cambios desde principios de siglo, asociados por supuesto a un contexto económico y político novedoso, pero también a procesos de larga data, y a la emergencia de nuevas problematizaciones, de nuevos temas que se plantean en el espacio público. Las tendencias que hemos destacado para cada una de las dimensiones involucran desafíos que, más allá de la coyuntura, demandan una agenda política que atienda a aspectos más profundos, vinculados con problemáticas que emergen de procesos de largo plazo y de rasgos estructurales de las sociedades latinoamericanas. La profunda desigualdad de la región sigue planteando la necesidad de políticas que alteren las bases sobre las que se asienta. En relación con las tendencias demográficas, se ha desaprovechado el bono demográfico y el envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos que implican un cambio radical de la mirada sobre la vejez. La transición epidemiológica y el cambio en la mirada sobre la salud configuran de manera particular a la salud y enfermedad de la sociedad, y los sistemas no están, según los expertos, preparados para estos cambios. Tampoco el nivel de debate en el espacio público da a los desafíos de salud la importancia que tienen. Por último, la educación –motivo de todas las esperanzas y de todas las críticas– es domde, en contraposición, puede verse claramente un proceso exitoso, con la extensión de la cobertura. Sin duda la calidad es un tema, pero también es un terreno de experimentación y de preocupación de muchos actores. El interrogante es en qué medida en los próximos años América Latina enfrentará o no estos múltiples desafíos, en una etapa que es menos favorable que el ciclo anterior. ■

1. OXFAM (2015), “Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe”. Disponible en: <https://oxf.am/2FKaCx9>

2. Véase por ejemplo Organización Panamericana de la Salud (2017), Salud en las Américas+, edición del 2017. Resumen: panorama regional y perfiles por país, Washington, D.C., OPS disponible en <https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf>

3. Los datos provienen de distintos informes del SITEAL que pueden consultarse en <http://www.siteal.iipe.unesco.org/>

4. C. Rama (2009), “La tendencia a la masificación de la cobertura de la educación superior en América Latina”, *Revista Iberoamericana de Educación*, 50, págs. 173-195.

*Investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas, Universidad Nacional Tres de Febrero (CEIPSU, UNTREF) y del Instituto en Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM. Docente de la materia “Análisis de las sociedades latinoamericanas actuales” IDAES, UNSAM.
**Investigador de Conicet-UNLP/IDAES-UNSAM. Docente de la materia “Análisis de las sociedades latinoamericanas actuales” IDAES, UNSAM.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Las transformaciones del capitalismo han segmentado al movimiento obrero organizado que el peronismo generó en los años 40, con su alta afiliación sindical, representación gremial y conquista de derechos laborales. El surgimiento de organizaciones de trabajadores de la economía informal plantea el desafío de su incorporación a la CGT.

Sindicalismo y economía informal

Un desafío a la imaginación sindical

por Paula Abal Medina*



Resistencia, 24-9-18 (José Mateos)

“El modelo sindical argentino es el mejor del mundo”, dice hoy buena parte de la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), incluso de la Confederación General del Trabajador de la Economía Popular (CTEP). Si dejamos de lado la rutinización de los enunciados, la evocación tiene fundamentos porque los trabajadores organizados sindicalmente lograron convertirse en un poderoso actor de la vida nacional durante el proyecto nacionalista popular que encarnó el peronismo. En el libro *La columna vertebral. Sindicatos y Peronismo* (1), Alvaro Abós reconstruye sus características utilizando la metáfora que popularizó su determinante función social justamente como

vertebrador social. En definitiva, esta forma política permitió grandes conquistas a la clase trabajadora. La investigación que realizó Juan Carlos Torre sobre los sindicatos durante 1973-1976 lo llevó a otra síntesis: *El gigante invertebrado* (2). El mismo Abós calificó al sindicalismo, hace pocos años, como un “gigante con pies de barro”.

Durante los más de setenta años transcurridos desde entonces el capitalismo creó transformaciones tan estructurales que puso en crisis la línea divisoria de la relación entre capital y trabajo. Posiblemente el rasgo más saliente consista en la eyección del riesgo empresario desde las grandes empresas y su propagación por toda la geografía del trabajo. Desprenderse del riesgo, “que no se te pegue”,

una destreza del mundo financiero que pone su impronta en el conjunto. De este modo, desde la década del setenta del siglo pasado, se desvanece el gigantismo empresarial mientras ensordecemos con enunciados gerenciales del tipo “*small is beautiful*”. Un modelo de producción centrífugo que arroja segmentos productivos y trabajadores fuera de las casas matrices de las corporaciones transnacionales, aunque quedan subordinados a estas, a través de lo que Jean Pierre Durand ha llamado “la cadena invisible” de la subcontratación. Sus eslabones “más distantes” son las viviendas precarias de barriadas populares donde familias enteras se ponen a producir sin salario, sin derechos, sin regularidad, a riesgo propio.

Este nuevo jeroglífico social anida en las mercancías del capitalismo neoliberal. Se combinan nuevas y viejas formas de desposesión, endeudamiento y explotación. La resultante es la contracción de la condición asalariada y la consiguiente proliferación de trabajadores autónomos, independientes, informales, ilegales, desocupados o microempresarios. El poder de reclasificar a los asalariados como “otros” se acrecienta mientras el salario y los derechos laborales desaparecen.

La imaginación sindical se ve desafiada. La pregunta que se impone entonces es cuál es la forma política para la actual composición de la clase trabajadora.

Ayer: el hervidero sindical

Durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955), la CGT se transformó en un actor determinante de la vida nacional. En 1954, Argentina tenía alrededor de 6,6 millones de trabajadores. Una fuerza de trabajo mucho más homogénea que la actual, organizada en torno a la figura del asalariado registrado, abarcado por convenios colectivos. La agrupación de trabajadores en “grandes organizaciones masivas de primer grado y con ámbito jurisdiccional en todo el territorio nacional que comprenden por lo tanto a una numerosa masa de afiliados y poseen una sólida base contributiva y una mayor capacidad de movilización y negociación en el plano reivindicativo” (3), integrantes de una poderosa central de grado superior –la CGT– que representaba entonces alrededor de 5 millones de esos trabajadores. La afiliación sindical se disparó entre 1945 y 1954, pasando de 400.000 afiliados a cerca de 2,5 millones. Las crónicas históricas permiten imaginar que desde su expropiación e inauguración en 1950, el edificio de Azopardo 802 se convirtió en un hervidero al igual que la vida de muchas de sus regionales. Si bien no existen registros que permitan conocer los niveles de organización gremial en las empresas, es razonable inferir que las figuras de los delegados se diseminaron vertiginosamente por el tejido productivo. Y activaron tensiones internas puestas de manifiesto en las declaraciones de José Gelbard, quien en la apertura del Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, dijo: “Es intolerable que un delegado toque el silbato y pare la fábrica”. Si bien la acción sindical en las empresas estuvo sub-legislada, a partir de la sanción de la Ley 14.250 en 1953, se introdujo en convenios y estatutos. La asamblea o congreso de delegados pasó a ser reconocida como un órgano directivo de la vida de los sindicatos, destacándose su representatividad, ya que eran elegidos por el conjunto de los trabajadores de las empresas: afiliados y no afiliados al sindicato. Como lo registra Alvaro Abós: “La figura del delegado se había generalizado, tanto en las grandes concentraciones fabriles como en todas las dependencias estatales, incluso en el sector comercial y de servicios; en miles de pequeños establecimientos era frecuente que un solo delegado ostentase la representación sindical de un puñado de trabajadores” (4).

Una sublevación profunda de las estructuras de la identidad de los trabajadores fundamenta la magnitud de su fuerza social. Juan Carlos Schmid, un dirigente comprometido con la tradición de un sindicalismo poderoso y transformador, retiene este rasgo definitorio: “Lo mejor que hizo Perón no fue sancionar el estatuto del peón rural; lo que nunca le perdonaron los patronos a Perón fue que el obrero desde entonces les sostuviera la mirada”. Como un reguero de aceite sobre la placa de

mármol la insolencia se expandió por toda Argentina: la sirvienta, el peón de campo, el empleado de comercio se comportaban con altanería y prepotencia, dice Reynaldo Pastor, un ápice ilustrativo de una temible reacción de clase frente a los avances sociales y políticos de las grandes mayorías (5). Concebidos como “invasores” desde “las patas en la fuente”, irían a veranear a Mar del Plata para finalmente trastocar la configuración liberal de la democracia representativa ocupando la esfera política.

Cristian Buchrucker estima que “entre 1946 y 1955, unos 3.000 sindicalistas ocuparon diversos puestos del gobierno, en calidad de ministros, secretarios de Estado, diputados, agregados obreros en el servicio exterior, concejales, etc. El porcentaje de diputados nacionales pertenecientes a los estratos más altos de la sociedad disminuyó entre 1942 y 1952 del 30 al 5%, y casi la mitad de los parlamentarios peronistas constituyeron el bloque de origen gremial” (6). En la entonces Presidente Perón, actual provincia del Chaco, el movimiento obrero fue la cabeza entre 1953 y 1955 con la gobernación de Felipe Gallardo. De origen obrero, Gallardo quiso realizar su declaración de bienes al iniciar el mandato que no pudo terminar: “Un carro, una bicicleta, una heladera a kerosene y algunas pequeñas cosas del hogar”. Como sintetiza el fiscal de su provincia: “Gallardo no tenía bienes, era la declaración de un proletario”. Realizó una transformación en parte irreversible que aún se respira en el tejido cooperativo y de pequeños productores de un territorio que organiza la vida social con conflicto. Tras la sanción de la Ley Agropecuaria Eva Perón, Gallardo expropió latifundios como las veinte mil hectáreas de tierras de Bunge y Born, que fueron entregadas a pequeños productores rurales, muchos de origen indígena, y se convirtieron en unidades económicas que garantizaron a la vez condiciones dignas de vida a las familias dueñas y un aporte al desarrollo provincial y nacional (7). El gobernador oficiaba como tal en la Casa de Gobierno de la provincia y una vez por semana en la sede regional de la CGT.

Hoy: un sindicalismo de segmentos

Actualmente hay en Argentina alrededor de 17 millones de trabajadores ocupados. El 42,7% son mujeres. Unos 8,3 millones son asalariados registrados y cerca de 4,3 millones, asalariados no registrados. Dentro de los ocupados hay trabajadores del sector privado y público, asalariados no registrados, monotributistas, otras categorías de autónomos, trabajadores independientes no registrados, trabajadores de programas estatales, cooperativistas de la economía popular.

La heterogeneidad de situaciones de trabajo es un rasgo saliente, aunque la condición común es inapelable: son quienes necesitan vivir del laburo propio, tengan empleador, patrón oculto o sean trabajadores sin patrón. Si sumamos a los desocupados y “desalentados”, la cantidad de trabajadores supera los 19 millones.

Estimaciones recientes establecen que unos 6 millones están representados por sindicatos adheridos a la CGT. Este número es una aproximación basada en las estructuras sindicales más grandes que son las que intervienen con congresales y afiliación efectiva directa. Actualmente existen algo más de 1.500 sindicatos con personería gremial. Sin embargo, unas 230 estructuras gremiales están confederadas –aunque muchas de ellas contienen numerosos sindicatos– y alrededor de 80 organizaciones participan de manera intermitente de la vida colectiva de la central. Más allá de cualquier número, una recorrida por el edificio de la CGT sólo autoriza a constatar el extravío de la instancia colectiva del movimiento obrero. Las regionales, otrora instancias de federalización efectiva del sindicalismo, han sido relegadas de la estructura nacional.

Las tasas de afiliación sindical rondan entre el 37 y el 40% (8). La negociación colectiva alcanza a alrededor del 46% de los trabajadores ocupados (9). De acuerdo a una encuesta, realizada en 2005 por el Ministerio de Trabajo, en el 86% de las empresas no hay ninguna instancia de representación directa de los trabajadores. Asimismo, algunas investigaciones han mostrado que desde hace varias décadas las reformas de estatutos y convenios de muchos sindicatos han tendido a licuar el poder efectivo de los delegados en la vida de sus organizaciones, que han quedado reducidos a la función de gestores de servicios al afiliado en los lugares de trabajo, y radialmente subordinados a secretarios generales o a algún otro integrante de las comisiones directivas.

El “otro” movimiento obrero

A fines de 2010 se creó en Argentina la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La formación de este otro movimiento obrero no nació por generación espontánea, acumula varias décadas y un extenso despliegue de conflictividades: el territorio reconfigurado por el plato de comida, los cortes de ruta desde Cutral Có, Plaza Huinul, Tartagal y Mosconi, la resistencia organizada a los desalojos, la consolidación de las organizaciones populares disputando planes, la constitución de un movimiento piquetero con epicentro en el conurbano bonaerense, la recuperación de fábricas, la organización en cooperativas, la enorme capacidad de movilización social y la habilidad para conquistar nuevas institucionalidades populares: como el salario social complementario o la más reciente “ley de barrios populares” que implicará que centenas de miles de familias sean dueñas de las tierras que habitan. Finalmente, tras numerosas iniciativas de articulación, la CTEP aguarda respuesta tras solicitar formalmente su afiliación a la CGT. El trayecto recorrido se inició con excluidos y pobres para reconocer a trabajadores organizados de un sector de actividad: la economía popular.

Estimaciones estadísticas realizadas en 2014 permitieron dimensionar la po-

blación potencialmente representable por el sindicalismo de la economía popular: más de cinco millones de trabajadores (10). Es posible encontrar una rica caracterización de oficios y actividades en materiales elaborados por referentes de la organización (11).

Sus experiencias organizativas de trabajo y producción en el campo y en las ciudades –trabajadores y delegados de la economía popular distribuidos por toda Argentina– construyen un amarre de tanta fortaleza que el neoliberalismo ya no podrá “descartarlos”.

Los trabajadores de la economía popular producen un valor sub-remunerado o directamente ninguneado. El mecanismo puede ser más tortuoso con la aparente desaparición del patrón y su sustitución por “proveedor de insumos y herramientas”, “comprador de bienes y servicios” a precios de estafa: los patrones ocultos. Otras veces es un “pagadiós empresario”, como con los envases plásticos. Las grandes empresas los lanzan al mercado y se desentienden del costo ambiental. Quienes tuvieron que “inventarse el trabajo” son los que realizan el reciclado que nadie quiere pagar. Por eso la CTEP ha propuesto una Ley de Envases, largamente cajoneada. También está el “pagadiós estatal” que financia con montos de mercado servicios para barrios acaudalados y paga a precios-miseria en los barrios empobrecidos.

¿Cómo se hace sindicalismo de la economía popular? Dependerá de la singularidad de las actividades y de los espacios en los cuales se despliega el trabajo. Sin embargo es posible describir algunas prácticas comunes que comienzan con la identificación de los trabajadores en un registro sindical y también estatal, la inscripción en el monotributo social, la organización en cooperativas, la obtención de tierras, la unificación de la producción de diversos trabajadores y cooperativas, la fijación de precios mínimos de venta, la fabricación de las herramientas de trabajo, la compra conjunta de insumos para evitar los mencionados precios de estafa, la elaboración de proyectos productivos para financiar las iniciativas a través de programas vigentes en reparticiones municipales, provinciales y nacional, el compra estatal de la producción popular, la provisión de servicios a las cooperativas para fortalecer la comercialización, entre tantas otras. Dos experiencias merecen destacarse: el Movimiento de Trabajadores Excluidos que agrupa a recicladores y cartonerxs, inspirado en el dispositivo reivindicativo de la CTEP, y el Sindicato de Ladrilleros (UOLRA), confederado en la CGT, porque tras la modificación de su estatuto a principios de 2016 ejerce la representación “del todo”: trabajadores de fábricas, informales y los de la economía popular. Su movimiento más audaz es transformar el terreno minado de la economía informal en economía política popular.

Jacqueline Flores, una referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos

que agrupa a recicladores y cartonerxs, suele decir: “Nosotros al principio decíamos que teníamos derechos; la diferencia es que ahora lo creemos”.

La experiencia de la economía popular sintoniza y crece con las elaboraciones del feminismo porque convergen en la conexión de los espacios de reproducción y producción. Una nueva formulación política permite la elevación de la mirada que narra Jackie: hay trabajo aunque no haya salario, se produce valor, de múltiples formas, por fuera de la empresa privada. El trabajo de cuidados es trabajo. El problema crucial es en definitiva la reproducción de la vida; más allá del nombre que el capitalismo imponga al trabajo que la garantiza en cada momento histórico.

El movimiento *Ni una menos* funciona como una caja de resonancia y el debate feminista se está instalando adentro de las estructuras sindicales. El 7 de marzo de este año se constituyó el Bloque Gremial Feminista, que reúne compañeras de la mayoría de las organizaciones populares y de las centrales sindicales. Juntas convocaron al último Paro Internacional de Mujeres del 8M. Desde entonces la organización con perspectiva feminista crece exponencialmente.

En definitiva el desafío es la reconstrucción de una CGT INMENZA para lxs más de 19 millones de trabajadores que viven en Argentina. Un sindicalismo vivo y tupido que encarne la composición heterogénea de la realidad trabajadora, un renovado protagonismo federal y político y un nuevo sentido de felicidad laborante. ■

1. Alvaro Abós (1986), *La columna vertebral*, Hyspamérica, Buenos Aires.
2. Juan Carlos Torre (2006), *El gigante invertido*, Argentina 1973-76, Siglo XXI, Buenos Aires.
3. Néstor Corte (1994), *El modelo sindical argentino*, Rubinzal Culzoni editores, Buenos Aires.
4. Alvaro Abós, *op. cit.*
5. Natalia Milanés (2014), *Cuando los trabajadores salieron de compras*, Siglo XXI editores.
6. Cristian Buchrucker (1987), *Nacionalismo y Peronismo*, Editorial Sudamericana.
7. Manuel Millán Ford en un documental sobre Felipe Gallardo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_XD0mitvKAQ
8. El porcentaje corresponde al sector privado no primario en establecimientos de 10 y más ocupados. Véase Cecilia Senén González, David Trajtemberg y Bárbara Medwid, “Tendencias actuales de la afiliación sindical en Argentina: evidencias de una encuesta a empresas”, *Relations industrielles / Industrial Relations*, Vol. 65, N° 1, 2010, pp. 30-51.
9. David Trajtemberg (2018), *Los nuevos retos del modelo de negociación colectiva*, disponible en <http://lanaciontrabajadora.com.ar/los-nuevos-retos-del-modelo-de-negociacion-colectiva/>
10. Véase Juan Martín Bustos y Mariela Molina (2014), *Economía Social. Descripción y caracterización del sector y principales hallazgos de la investigación cualitativa*, disponible en http://www.trabajo.gov.ar/downloads/estadisticas/talleres/Presantacion_Molina.pdf
11. Juan Grabois y Emilio Pérsico (2015), *Trabajo y organización en la economía popular*.

*Socióloga, trabajadora de IDAES-UNSAM-CONICET. Editora del Portal La Nación Trabajadora. © UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

Las personas que toman decisiones importantes están en Very Important People

¿Quiere conocerlas?

La información actualizada para sus negocios y comunicaciones con empresas, instituciones y organismos

comercial@verinfo.com www.verinfo.com



El 33 Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en Trelew en octubre pasado, hostigado como ninguno de los anteriores, mostró la aparición de un feminismo masivo y juvenil, decolonial, que toma las calles clamando por una sociedad donde la lucha por la justicia social y por la justicia de género vayan a la par.

Feminismos contra el neoliberalismo

“Vivas y desendeudadas nos queremos”

por Vanesa Vazquez Laba*



8-8-2018 (Gala Abramovich)

En los últimos años, Argentina junto con otros países americanos vienen llevando a cabo un proceso de “levantamiento” feminista: los paros internacionales de mujeres, las movilizaciones de Ni Una Menos, la marcha de mujeres en oposición a Donald Trump y el movimiento #metoo de las actrices hollywoodenses denunciando el acoso sexual en Estados Unidos, las manifestaciones juveniles en Chile contra la violencia machista, y recientemente en Brasil el movimiento de mujeres que tomó las calles bajo la consigna #EleNão en contra del candidato presidencial de ultraderecha Jair Bolsonaro, que sostiene la inferioridad

de las mujeres. Todas estas expresiones dan cuenta de lo que Graciela Di Marco denominó “la pueblada feminista” (1), una articulación contrahegemónica de varios feminismos que une diversos grupos sociales subalternizados: mujeres, jóvenes, afros, clase trabajadora, disidencia sexual e identidades de género, entre otros.

En nuestro país esa pueblada se fue gestando durante décadas en diversas instancias: los Encuentros Nacionales de Mujeres; la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; el espacio legislativo y sus avances en materia de derechos de género y leyes de Educación Sexual Integral, de Salud Sexual y Reproductiva, de Protección In-

tegral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de Identidad de Género, Matrimonio Igualitario, de Paridad de Género; y espacios territoriales, donde las acciones de las organizaciones de mujeres y feministas buscan garantizar las políticas de reconocimiento y redistribución (2) en los barrios, las escuelas, las universidades, los centros de salud. Lo anterior evidencia el peso de estos movimientos en la transformación social y los avances de derechos, que en los últimos tres años dieron un claro giro hacia demandas más concretas en torno al endeudamiento, el desempleo y la precariedad de las vidas de las mujeres. “Vivas y desendeudadas nos queremos” fue el

lema del último Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, el 8 de marzo pasado, que puso de relieve la deshumanización de los cuerpos en épocas de neoliberalismo financiero.

La antropóloga Laura Masson (3) sostiene que al feminismo argentino hay que comprenderlo hoy en dos dimensiones: por un lado, en su desplazamiento hacia una multiplicidad de voces y experiencias autorizadas que incorporan a la juventud como actor fundamental, impugnando los “métodos” tradicionales de legitimación de la pertenencia al movimiento. Y por otro lado, en su consideración de las distintas formas de legitimidad a partir de la participación directa en espacios disímiles y sin mediaciones, esto es, un feminismo que “está en todas partes”, dando el debate y transmitiendo saberes y experiencia feminista en la calle, las escuelas, la academia, el territorio, la televisión, los partidos políticos, entre los espacios más significativos.

Desde mi punto de vista, es posible identificar otras dimensiones del fenómeno social feminista de estos tiempos. Podemos aproximar la idea de “pueblada feminista” a lo que Judith Butler definió como ejercicio performativo del derecho a la aparición (4). En las manifestaciones y en las vigiliadas se hicieron visibles los cuerpos agrupados territorialmente expresando una “reivindicación corporizada de una vida más vivible” (5). El grito en masa “ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven”, trajo a escena cuerpos entrelazados solicitando reconocimiento y ejerciendo colectivamente su derecho a la aparición y a la libertad en la esfera pública.

Esas manifestaciones corporeizadas poseen dos características: en primer término, la lucha plural y de alianzas de las identidades de género con otros grupos sociales con identidades de clase, étnicas y sexuales que se congregan para ponerles límites al patriarcado y al neoliberalismo; en segundo término, las acciones *performáticas* de “hacer ejercicio público del género” (6) a través de las cuales se ejercen esa lucha y esas alianzas.

“Salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías”, “Mi cuerpo es míA”, “Sin las travas no hay Ni Una Menos”, “Están lloviendo mujeres desafiando a los poderes”, forman parte de un repertorio de discursos con nuevos sentidos respecto a las expectativas de género que se pretenden impugnar y, a su vez, a las normas de género que nos *producen* y dan forma a los modos de vida corporeizados. Dicho de otra manera, son “enunciados lingüísticos que, al momento en el que son pronunciados, crean una realidad o hacen que exista algo por el solo hecho de haberlo expresado” (7). El feminismo viene dando batalla, en definitiva, a través de prácticas *performativas* que desestabilizan el género y la femineidad, llevando a cabo nuevas alianzas poéticas y de producción cultural.

El sujeto político del feminismo

Esto se entrelaza con otra dimensión que creo fundamental destacar y que es la pregunta por el sujeto del feminismo, esa pregunta que Judith Butler introdujo a comienzos de la década del '90 en su libro *El género en disputa* (8). ¿Quién o quiénes tienen la visibilidad y legitimidad de representar los objetivos e intereses para la representación política? La creencia de un patriarcado universal y de una opresión común a

las mujeres viene siendo impugnada en el movimiento. Tal es así que una pluralidad de grupos sociales e intereses vinculados con los géneros, las sexualidades, la clase social, las etnias, grupos etarios, nacionalidades, están poniendo de manifiesto la división y los límites de una política de la identidad. Para entender su morfología actual es preciso comprender que esas identidades no son fijas, sino que están situadas y mutan, lo cual genera tensiones hacia adentro del movimiento. Son estas tensiones las que suscitaron ciertos debates internos que condujeron a *repensar* y ya no *representar* un único y homogéneo sujeto –el sujeto mujeres–.

En este marco se torna necesario analizar el proceso asambleario que precedió el Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, así como también las reuniones organizativas de las manifestaciones y vigiliadas en ocasión de la discusión sobre los proyectos de ley de despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados y la de Senadores de la Nación. Este proceso de acalorados debates develó crudamente una oposición paradójica para el movimiento que dejó entrever el problema de la representación política cristalizada en la pugna entre la hegemonía de la categoría “mujeres” versus las “otras” mujeres y femineidades.

Este transcurso de los feminismos en movimiento devela una nueva construcción, a veces armoniosa y otras no tanto, sobre la base del intercambio y de ciertos consensos entre grupos sociales con tradiciones igualitaristas (reivindicaciones vinculadas a los derechos po-

líticos, económicos y educativos), de la diferencia sexual y lésbicas (reivindicaciones en torno a la sexualidad y a temas tradicionalmente vinculados con el ámbito de lo privado), posmodernas (con posiciones deconstructivistas del género estimuladas por el deseo) y poscoloniales (que impugnan la universalidad blanca y reivindican los saberes situados). Consensos precarios en la medida en que se sostienen en definiciones

“Salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, nuestros deseos y nuestras autonomías.”

conceptuales muchas veces antagónicas como, por ejemplo, que las “mujeres” no existen, o que son definidas por su experiencia vivida, que las lesbianas no son “mujeres” o que las identidades colectivas son ficciones.

Sin embargo, considero importante señalar que el feminismo tiende a enriquecerse con esta heterogeneidad política-conceptual: no asume concepciones esencialistas de la identidad de género, ni tampoco niega las identidades

no binarias; prioriza “hacer ejercicio público del género” mediante sus manifestaciones multitudinarias. El gran desafío de esa representación política feminista en las calles ha sido agrupar los cuerpos al grito de una vida más vivible.

Los “desposeídos”(9), esos sujetos repudiados y rechazados son lxs sujetos políticos contemporáneos, es decir, las mujeres, lxs negrxs, lxs indígenas, las putas, las lesbianas, las maricas, las travas, lxs inmigrantes sin papeles, les intersexuales, les jóvenes, las mujeres privadas de su libertad, lxs refugiados, lxs discapacitados, y otros. Son esos cuerpos que luchan por ganar espacio y voz en la arena política, por ser reconocidos, los que hoy están en las calles construyendo una posición colectiva y de alianza con un feminismo que se está permitiendo ampliar sus bases de participación.

Como señala Nancy Fraser(10) la crisis actual del capitalismo podría revelarse como momento de transformación y de oportunidad para una plenitud de participación en la vida social. Se trataría de ensanchar las bases sociales para generar una democracia participativa que construya una igualdad ampliada, sin injusticias económicas, culturales, ni políticas, y que dispute la visión neoliberal de la igualdad que promueve la meritocracia, el individualismo y el espíritu de mercado.

En un contexto de crisis financiera, el feminismo no puede caer en la “primacía de lo económico” volviendo a subsumir lo cultural, tal como sostienen Judith Butler y Athena Athanasiou (11). Atravesamos una fase histórica

que condensa décadas de praxis y saberes feministas antipatriarcales y anticapitalistas, cargados con la promesa de construir imaginarios políticos, económicos y culturales que atiendan por igual a la justicia social y la justicia de género. ■

1. Graciela Di Marco, “La pueblada feminista”, *Revista Anfibia*, <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-pueblada-feminista/>

2. Nancy Fraser, “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era ‘postsocialista’”, en M. A. Carbonero Gamundí y J. Valdivieso (eds.), *Dilemas de la justicia en el siglo XXI. Género y globalización*, Palma Edicions UIB, 2011.

3. Laura Masson, “Soy feminista, hago política”, *Revista Anfibia*, <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/soy-feminista-hago-politica/>

4. Judith Butler, *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*, Buenos Aires, Paidós, 2017.

5. *Idem*, p. 31.

6. *Idem*, p. 31.

7. *Idem*, p. 43.

8. Judith Butler, *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Buenos Aires, Paidós, 2013.

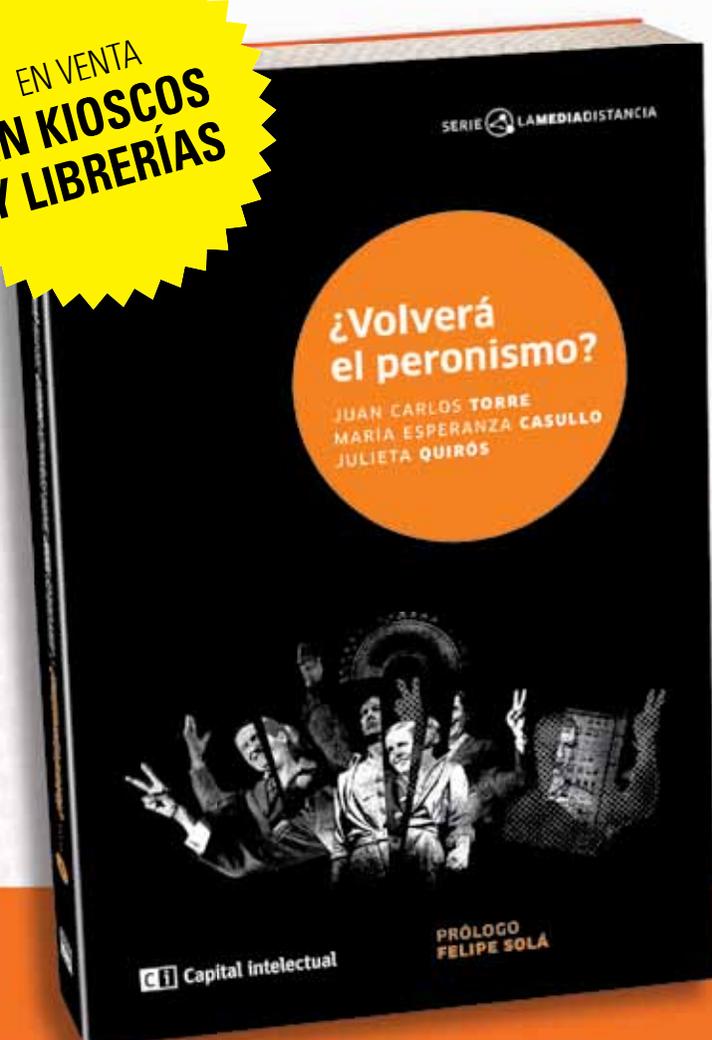
9. Judith Butler y Athena Athanasiou, *Desposesión: lo performativo en lo político*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2017.

10. Nancy Fraser, “El destino de la igualdad en un mundo financiarizado”, en E. Rojas y M. Cuesta (directores), *Conversaciones con Nancy Fraser. Justicia, crítica y política en el siglo XXI*, Buenos Aires, UNSAM edita, 2107.

11. Judith Butler y Athena Athanasiou, *op. cit.*

*Doctora en Ciencias Sociales-UBA. Magíster en Investigación en Ciencias Sociales-UBA. Lic. en Sociología-UBA. Investigadora Adjunta CONICET. Docente IDAES-UNSAM. Directora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM.
© UNSAM / *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur

EN VENTA
EN KIOSCOS
Y LIBRERÍAS



¡YA SALIÓ!

SERIE  LAMEDIA DISTANCIA

¿Volverá el peronismo?

A pesar de dos contundentes derrotas electorales, sigue habiendo razones concretas y específicas que ponen en cuestión la perspectiva de un ocaso definitivo del peronismo. No sólo no ha muerto, como pronosticaban algunos, sino que además es sensato creer que puede llegar a volver.

JUAN CARLOS TORRE
MARÍA ESPERANZA CASULLO
JULIETA QUIRÓS

PRÓLOGO
FELIPE SOLÁ

LE MONDE
diplomatique

 Capital intelectual

www.eldiplo.org



Fernando Haddad marcha por la paz en la favela Heliópolis, San Pablo, 27-10-18 (Amanda Perobelli/Reuters)

Las fallas estratégicas del Partido de los Trabajadores no son la causa del renacimiento de la derecha en Brasil, pero sí una condición de su posibilidad. El PT desalentó el debate interno, expurgó las disidencias, sacrificó el movimiento social al aparato electoral y generó confusión entre ampliación del consumo y ampliación de la conciencia crítica.

Errores estratégicos del PT en Brasil

Limitaciones de los gobiernos de Lula y Dilma

por Rita Laura Segato*

Me molesta la idea de que el pueblo es burro, y no desconfío de la historia que tiene sus ritmos y sus lugares de paso, siempre provisionales, siempre transitorios, aunque a veces fatídicos y tenebrosos. Tengo fe histórica. Predico el largo plazo, tan difícil de procesar por nuestros Estados liberales y eurocéntricos, a derecha y a izquierda. No niego que las conciencias puedan ser, hasta cierto punto, manipuladas. Pero soy antropóloga, y por lo tanto mi premisa es que todo lo afirmado por los pueblos debe ser considerado un enunciado, y como tal hace referencia a una realidad. En otras palabras: hay un dicho ahí. Hay un dicho en toda votación. Es imprescindible intentar entender qué es lo que dicen los votantes aunque a primera vista parezca ininteligible y absurdo. Aunque voten por la muerte. Las conciencias son manipulables, sí, pero es necesario que exista una condición de posibilidad –mar de fondo, estado de ánimo, resentimiento, y sobre todo error estratégico grave– que permita esa manipulación.

Son muchas las razones que pueden explicar este cimbronazo al proyecto pro-

gresista, y mostrar que los gobiernos más benefactores que hemos tenido han cometido graves equivocaciones que acabaron estimulando el resentimiento de diversos sectores sin los indispensables antidotos para ese resentimiento: la promoción del auténtico debate político en profundidad y de la reflexión crítica en todos los espacios de la sociedad.

Una democracia que no es pluralista es simplemente una dictadura de la mayoría. Y eso vale para todos. Vale para los fascistas cuando ganan elecciones, y vale también para las izquierdas, que aplican hasta hoy el falaz método heredado de las insurgenencias de los 60 y 70 llamado “centralismo democrático”. Ambos expurgan la disidencia y desaniman el debate. Hacer aliados circunstanciales para garantizar la “acumulación de fuerzas” no significa estimular el debate. Por otro lado, ni la acumulación de fuerzas, ni la toma del Estado sin el trabajo afiligranado de transformación de la sociedad, han llegado jamás a destino, en país alguno, en su propósito de reorientar la historia hacia un futuro de mejor vida para más personas. Es en la sociedad donde se cambia la vida, no en el Estado. Ahora hemos perdido en el Estado y en la sociedad.

En 2005, cuando el diputado Roberto Jefferson, antiguo enemigo del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil y autor del tiro de gracia en la trayectoria de figuras históricas del PT, inicia con sus denuncias el gran escándalo de la compra de votos en el Congreso Nacional conocido como “mensalão”, explica las razones del notable cambio del antes purista PT diciendo: “El PT abandonó un proyecto político y adhirió sólo a un proyecto de poder”. Describe así el acceso del PT al lenguaje contemporáneo de la política, reconfigurándose de forma adaptativa a un formato del campo político en que las metas ideológicas son desalojadas por la meta del poder. Efectivamente, en las vísperas de las elecciones de 2002 fuimos espectadores de un importante cambio de rumbo de los sectores de izquierda que se agruparon en el PT. Sus líderes decidieron adaptarse al nuevo paradigma de la política, ahora de bajo perfil doctrinario, que acabaría fragilizando instituciones democráticas y ganando antipatías a un lado y al otro de la bipartición política de siempre.

Las consecuencias de ese cambio táctico, que se mostró estratégico, replicadas también en proyectos progresistas

de otros países latinoamericanos, fueron masivas y desastrosas. En primer lugar, la anterior adhesión del PT a un camino de transparencia y total democratismo en sus métodos de conducción y toma de decisiones, al interior y al exterior de las filas partidarias, fue revocada, y las consecuencias del personalismo extremo y de las decisiones en *petit comité* se hicieron visibles rápidamente. Aquel PT que se manifestaba vital en las calles y que era una mezcla de movimiento social y partido político fue rápidamente descabezado –el movimiento social fue desestimulado y el partido político, asalariado–.

Sin debate de ideas

A esa mutación le siguieron consecuencias de peso incalculable en las decisiones tomadas: la supresión de la deliberación interna en profundidad llevó a desoír y descartar asesorías que significasen mínimas disidencias. Fue elegida una sucesora que era un cuadro técnico y no un cuadro político, y por lo tanto inhábil en la negociación y aun menos dispuesta que el propio Lula a debatir interna o externamente. No hubo más pluralismo ni debate de ideas al interior del partido. Esto fue fatal, en especial, cuando se intentó advertir que el juego democrático era un “hacer ver”, una parodia, y hubo avisos sobre el carácter ficcional de las instituciones, los pactos y las alianzas.

Al desoír esa voz y por el afán de tomar el Estado, pasaron a realizarse alianzas tácticas y se perdieron aliados naturales de inmenso valor. Fue así que la ingenua fe en el discurso institucional de superficie, y el ansia de acumular poder al interior de esas instituciones, sin percibir su carácter ficcional desde el origen de nuestras repúblicas, llevó a la fatal incapacidad de percibir el golpe que se gestaba debajo de las propias narices del gobierno, en su misma sede y por parte de sus más próximos “aliados”.

El miedo al pluralismo y la disidencia llevó a no reforzar las estructuras colectivas no estatales que se encontraban vigentes y vitales en la sociedad. Al romperse éstas, el individualismo cundió y se quebró la malla de relaciones y ayuda mutua que todavía existía en jirones de comunidades por todo el país. De esa forma, la intervención estatal “bien intencionada”, que llevó recursos y derechos a las comunidades, dañó formas existentes de blindaje, arraigo territorial y reciprocidad.

La toma de decisiones dentro del consenso sin oír disidencias impidió que se corrigiera la confusión fatal entre la ampliación del consumo, de todos los tipos de consumo (desde celulares a viajes en avión), y la ampliación de la ciudadanía. Fueron consideradas erróneamente como si fueran lo mismo, mientras, muy por el contrario, al ampliarse el consumo se redujo justamente la idea de ciudadanía a las aspiraciones de consumo como meta central. Se rompieron por este camino vínculos comunitarios que podrían haber llevado a una real politización. Una real politización requiere de una profundización del debate, siempre. Hoy se ve que la ampliación del consumo sin ampliación de la conciencia y comprensión crítica de los valores propios de la teología del capital tiene pies de barro.

Al confundirse la ampliación de la ciudadanía con la ampliación del acceso a los bienes, sin tocar ni intervenir de forma alguna la marcha de la concentración de la riqueza, no quedó otra salida que colocar todas las apuestas en el mercado global. Fue la venta de *commodities* –soja, hidrocarburos, minerales– lo que permitió un mayor bienestar social, y no la redistribución interna. Es así como se

concibió el Pacto de Aceleración del Crecimiento (PAC, vinculado al IIRSA en escala subcontinental), que llevó, entre otras cosas, al proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en el Río Xingú, que ni el gobierno militar había osado tocar. Con este tipo de políticas se tornó inevitable el despojo y el desarraigo comunitario y territorial de pueblos, con su forma de vida alternativa y sus metas divergentes con relación al proyecto histórico del capital. Durante la gestión PT murieron asesinados más indígenas y líderes comunitarios que en todos los gobiernos democráticos anteriores. Un camino al menos anfibio, con una distribución de fichas puestas al mercado global y otras puestas en la protección de las economías locales y regionales, hubiera sido mucho más propicio.

En el campo jurídico, no se tomó la iniciativa de judicializar el negacionismo de la dictadura, ni la Comisión de la Verdad llegó muy lejos. Se fortaleció el punitivismo jurídico en los tribunales, en el Ministerio Público y en la Policía Federal, de lo cual Lula acabó siendo también una víctima, y crecieron exponencialmente las cárceles. En el campo de la educación se procedió a la inclusión, pero de una forma no muy distinta a lo que sucedió con la ampliación del consumo: fue algo otorgado pero sin el debido trabajo de ampliación de la conciencia crítica y sin una promoción del debate sobre el modelo mismo de las instituciones a las que se estaba accediendo.

No hubo una real comprensión del aumento del crimen organizado y de su impacto en la economía y la política, pues nunca se percibió la magnitud del vínculo

entre la acumulación, las oportunidades en la política y la actividad criminal. De esa forma se dejó de entender que el crimen organizado es una de las maneras de atacar la posibilidad de la democracia en cualquier país, ya que la acumulación que procede del crimen organizado captura inevitablemente la política.

En la política internacional, nunca se abandonó un nacionalismo simplón, y se traicionaron de diversas maneras las alianzas intra-continenciales con los paí-

No se trabajó la conciencia colectiva, no se cambió la gente, a pesar de que se mejoró la vida de las mayorías.

ses aliados, siempre en búsqueda de una supremacía de Brasil. Eso impidió, por ejemplo, que Brasil acompañara a Argentina en su proyecto de ley de medios, o que tornara a Telesur accesible, aunque sea por cable, al telespectador brasileño.

Dentro y contra el Estado

Es doloroso, pero la autocrítica y el conocimiento de la historia son la única garantía de poder caminar hacia una sociedad de mayor bienestar para más perso-

nas. Sin hacerlo andaremos en círculos convencidos de que tomando el Estado, por las armas o por las urnas, podremos reorientar la historia en otra dirección. Lo cual nunca se ha probado que sea cierto. En ningún lugar. Aníbal Quijano, el gran sabio peruano recientemente fallecido, tenía una fórmula para la acción en el campo estatal: adentro y en contra. Yo creo que el camino es anfibio también en la política. Dentro del Estado, que siempre acaba traicionándonos, buscar las brechas, las fisuras, para convertirlas en clivajes capaces de romper el cristal institucional, siempre colonial en América Latina, es decir, siempre exterior en su gestión de la vida de los pueblos y territorios. No hay que olvidar que el cambio se hace en la sociedad y lo hace la gente. Y eso es lo que ha fallado: no se trabajó la conciencia colectiva, no se cambió la gente, a pesar de que se mejoró la vida de las mayorías.

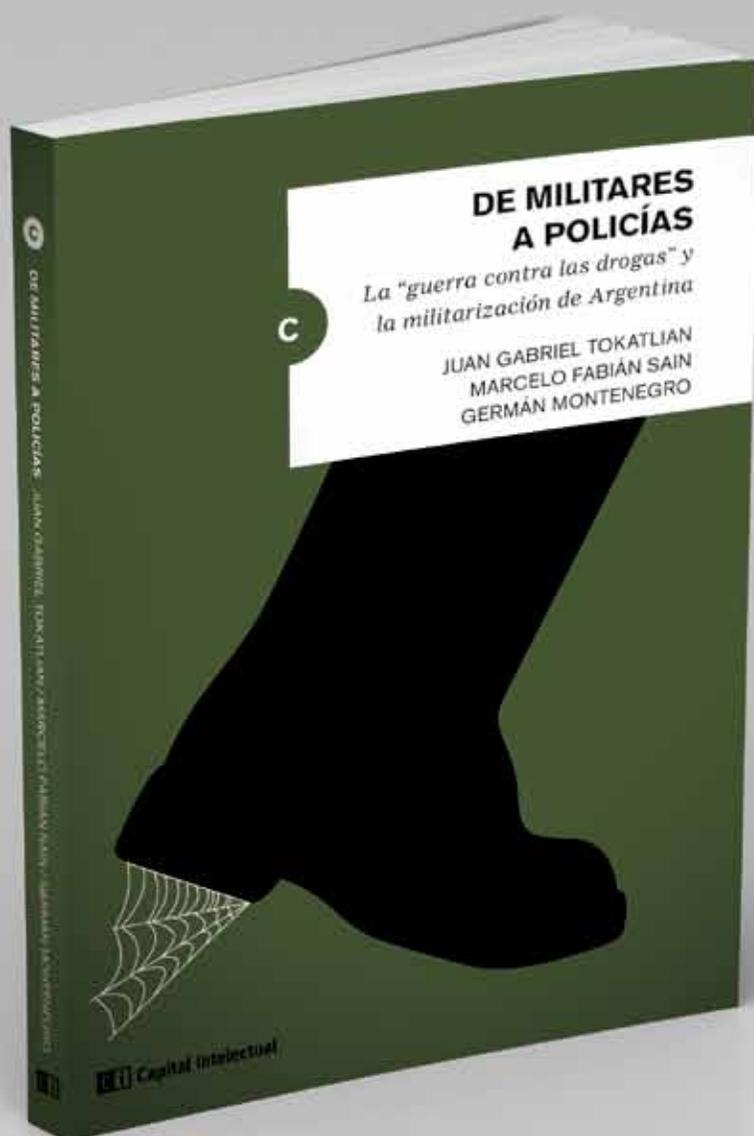
Y por encima de todo, no se tocó el orden patriarcal. No olvidemos que ese orden político es arcaico y fundacional para todas las formas de opresión en la larga prehistoria patriarcal de la humanidad que llega hasta el presente. Son los antagonistas del proyecto histórico quienes nos lo están diciendo con su reacción fundamentalista. Esa base, ese cimiento, esa plataforma, no puede ser tocada, y hasta ahora el ideario socialista puesto en práctica se abstuvo de hacerlo, pues no se logra meramente emplazando mujeres en los recintos estatales –el Estado, con sus protocolos, siempre acaba capturándonos, institucionalizándonos–. Debemos entender bajo esta luz el significado de la irrupción del feminismo en las calles co-

mo la entrada en escena de una nueva forma de la política que parte de la sociedad y recupera una historia de politicidad comunal, confinada por todo el tiempo de la colonial modernidad.

Una aclaración necesaria: lo que examino aquí no son las causas del renacimiento derechista. Entre éstas bien podríamos colocar la gran multiplicación de los cupos universitarios y las acciones afirmativas, como la política de “cotas”, de cuya primera propuesta formal en una universidad brasileña fui co-autora, en 1999, en la Universidad de Brasilia. Estas políticas instalaron el signo del cuerpo negro en los espacios donde anteriormente no circulaba. También el apoyo a la diversidad sexual con programas como Brasil Sin Homofobia fue libertario e inclusivo. Tampoco traté aquí del complot imperial, con su agenda quirúrgicamente diseñada para controlar nuestro destino como naciones. Lo que examiné, en esta etapa histórica que he calificado en otra parte como un tiempo de “más verdad”, es el tercer aspecto de la cuestión: los errores que vulneraron el proyecto de gobierno del PT y crearon las condiciones de posibilidad del golpe y del irresistible *ascenso de Arturo Ui* (1). Solo un análisis riguroso e inclemente podrá protegernos de futuras repeticiones. ■

1. Una referencia a la obra homónima de Bertolt Brecht sobre el ascenso de Hitler al poder (N. de la A.).

*Doctora en Antropología por la Queen's University of Belfast, profesora de la Universidad de Brasilia e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Brasil. © UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



En venta
en kioscos
y librerías

**EL PELIGROSO
REGRESO DEL
PODER MILITAR**

ci Capital intelectual

Feminismo y neoliberalismo

Un feminismo para el 99%

por Nancy Fraser*

Me centraré en una idea fundamental: el movimiento feminista es un movimiento social que emerge en un contexto histórico particular. De ahí que las posibilidades y formas que asuma este movimiento transformador dependan, justamente, de ese contexto determinado. Es muy importante que las feministas –ya sea las del ámbito académico intelectual o las activistas– trabajemos para entender de la manera más adecuada, más exacta, el contexto en el que surge el movimiento y lo contiene. Si no conseguimos hacerlo, este contexto se apoderará de nosotras y jugará con nosotras de una manera que no nos gusta. Si hablo en estos términos es porque se trata de algo que me ocurrió a lo largo de mi vida. Cuando surgió el movimiento feminista en los años sesenta y principios de los setenta, estábamos en un contexto de radicalización. Esa radicalidad que sedujo, en especial, a sectores de la juventud, y que llamábamos “la nueva izquierda” fue después cooptada por otras fuerzas y para otros propósitos que no tenían nada que ver con los objetivos y el espíritu de la nueva izquierda. En el ensayo titulado “El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia” (1) intento dar cuenta de esta especie de relaciones peligrosas que se producen entre esos ideales, ese movimiento, y el contexto en el que es concebido, en este caso el neoliberalismo.

Es preciso ver que no hay sólo una forma o una modalidad de neoliberalismo. El neoliberalismo adopta diferentes variantes y opciones: puede constituirse bajo formas reaccionarias o progresistas. Son justamente estas formas progresistas del neoliberalismo las que recuperan aquellos ideales, aquel pensamiento feminista, para transformarlo en lo que llamo un “feminismo corporativo”. Éste no hace otra cosa que legitimar el daño que se inflige a la sociedad en general. El feminismo no es el único movimiento que ha sido cooptado de esta manera; ciertos discursos toman su aura de emancipación para enredarla en relaciones peligrosas con el neoliberalismo. Hay otros movimientos sociales que también han sido víctimas de este proceder, como por ejemplo el movimiento LGTBQ, los ambientalistas o los anti racistas.

Estamos viviendo una época que nos plantea un gran paradoja en este sentido. Hemos visto un devenir del capitalismo desde sus formas más financieras, dominantes y dañinas –sobre todo para las clases trabajadoras y las mujeres–, hacia otras en las que se cubre de esta aura emancipatoria procedente de los movimientos feministas. Transcurridos varios meses de la presidencia de Trump en Estados Unidos, podemos decir que estamos siendo testigos de lo que llamaría una revuelta a nivel mundial que ha dado lugar a un neoliberalismo progresista que, lejos de traer consigo una genuina emancipación, ha dado nacimiento a distintos populismos de derecha. Expresiones que si bien pretenden oponerse al neoliberalismo, no se articulan con la izquierda ni con movimientos realmente progresistas, sino que se vuelcan a un anti neoliberalismo de derecha, tal como ocurrió en el Reino Unido con el Brexit, en Estados Unidos con los votantes de Trump, o en Italia con la elección del partido *Cinque Stelle* liderado por el comediante Bepe Grillo.

Contra el feminismo corporativo

Nos encontramos hoy ante una encrucijada: entender y procurar soluciones que nos permitan cambiar

el curso de la historia, romper este vínculo y este enredo que se produce con el neoliberalismo progresista, y sacar de allí al feminismo. Propongo un feminismo alternativo al “feminismo corporativo” que quiere tan sólo romper los techos de cristal para que las mujeres puedan avanzar dentro del mundo corporativo bajo las reglas propias del neoliberalismo. Se trata del “feminismo para el 99%”. Creo que lo que está pasando en Argentina con el movimiento *#Ni Una Menos* se asemeja bastante a esta idea del feminismo del 99% que estoy llevando adelante en Estados Unidos. Tenemos que lograr dos cosas: diferenciarnos, por un lado, de los movimientos o los liderazgos hiper reaccionarios que estamos viendo, por ejemplo, con la demagogia de derecha presente en Trump y otros sectores de Estados Unidos; y por otro lado, desenredar o despegar al feminismo, y a las banderas feministas, del neoliberalismo progresista.

Sugiero en este análisis un poco rápido lo que tenemos que hacer ante el surgimiento de estos populismos autoritarios de derecha que no son otra cosa que neoliberalismo. En este marco debemos diferenciar estos neoliberalismos de derecha de los neoliberalismos progresistas, aun cuando sean dos formas político-ideológicas que se retroalimentan mutuamente, y que crean uno las condiciones de posibilidad de existencia del otro. Sostengo que ninguno de los dos nos conduce por el camino de la emancipación verdadera. Es preciso rechazar ambas posturas, ambos extremos, para encontrar otras maneras de hacer avanzar las banderas de un feminismo auténtico.

La realidad social es muy compleja. Muchas veces, cuando nos parece que hemos encontrado un camino hacia la emancipación verdadera, hacia el progresismo, hacia la ampliación de derechos, nos topamos, en realidad, con obstáculos que van en contra de eso que creíamos haber encontrado. Aprendemos de este modo que tenemos que tener una visión multidimensional que nos permita abarcar esa complejidad, y que nos ayude a entender que cuando vamos mejorando en alguna de las dimensiones que llevan hacia una mayor justicia, podemos, al mismo tiempo, dar pasos hacia atrás o retroceder en otras dimensiones.

Atentos a esto, lo que el actual momento reclama es una nueva alianza entre emancipación, proteccionismo y ampliación de derechos, contra el núcleo financiero y el furioso neoliberalismo capitalista. Una alianza que nos diferencie tanto del “populismo de derecha”, el de Trump por ejemplo, que encuentra sus bases de sustentación en la construcción de los inmigrantes como chivo expiatorio –en lugar de culpar a Wall Street–, como del “neoliberalismo progresista”, que busca culpar a otros grupos como, en el caso de Hillary Clinton, a las clases trabajadoras pobres, blancas e ignorantes que serán siempre racistas y sexistas. Es preciso apartarse de ambos análisis para hallar una vía crítica alternativa. ■

1. Publicado en *New Left Review* 56, pp. 87-104.

*Filósofa política feminista, socióloga, profesora e investigadora de la New School en Nueva York.
© UNSAM / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Fragmentos editados de *Conversaciones con Nancy Fraser. Parte II* el día 6 de abril de 2018, organizado por el Programa Lectura Mundi y el IDAES, UNSAM. Traducción de Cecilia Della Croce.

Sumario

Staff	3
Editorial: El neoliberalismo del siglo XXI <i>por Ariel Wilkis y José Natanson</i>	2
El rol de la Universidad <i>por Carlos Greco</i>	3
Debilidad económica y resiliencia política <i>por Gabriel Vommaro</i>	4
Una nueva máquina de confrontación <i>por Alexandre Roig</i>	6
Inestabilidad política: hechos y mitos <i>por Martín Plot</i>	8
Anticorrupción bajo el signo de la antipolítica <i>por Sebastián Pereyra y María Soledad Gattoni</i>	10
La crisis permanente como marca identitaria <i>por Marina Franco y Valeria Manzano</i>	12
Ese oscuro objeto de desvelo de los argentinos <i>por Mariana Luzzi y Ariel Wilkis</i>	14
El modelo productivo en cuestión <i>por Martín Abeles</i>	16
El equipo que no fue y el eterno retorno <i>por Mariana Heredia</i>	17
Dossier:	
Neoliberalismo y neofascismo	
La complementariedad de los opuestos <i>por Pierre Dardot y Christian Laval</i>	20
La “bolsonarización” del macrismo <i>por Pablo Semán</i>	22
Vuelco a la derecha, ¿hasta dónde? <i>por Alejandro Grimson</i>	24
Violencias <i>por José Garriga</i>	26
Persistencia de la desigualdad <i>por Gabriela Benza y Gabriel Kessler</i>	28
Un desafío a la imaginación sindical <i>por Paula Abal Medina</i>	30
“Vivas y desendeudadas nos queremos” <i>por Vanesa Vazquez Laba</i>	32
Limitaciones de los gobiernos de Lula y Dilma <i>por Rita Laura Segato</i>	34
Editorial: Un feminismo para el 99% <i>por Nancy Fraser</i>	36